

El plan del
FORO DE SÃO PAULO
para destruir las
FUERZAS ARMADAS

Compilación elaborada por la Unión de Organizaciones
Democráticas de América - UnoAmérica

Septiembre de 2009

Índice

Introducción

1. ¿Qué es el Foro de São Paulo?
2. ¿Por qué el Foro de São Paulo quiere destruir las Fuerzas Armadas?
3. El desmantelamiento de las Fuerzas Armadas en Argentina
4. El desgaste axiológico de las Fuerzas Armadas en Bolivia
5. El Foro de São Paulo afecta a Colombia
6. Perú: La Guerra Jurídica contra las Fuerzas Armadas
7. El Foro de São Paulo y el desmantelamiento de las FF.AA. en Uruguay
8. El Socialismo del Siglo XXI contra las Fuerzas Armadas en Venezuela

Conclusión

Introducción

Las Fuerzas Armadas latinoamericanas son objeto de un ataque sin precedentes. La ofensiva se realiza en todas las naciones -aunque con métodos diferentes- para lograr un mismo fin: la destrucción definitiva de las instituciones armadas.

En Bolivia, Ecuador y Venezuela, las transforman, cambiándoles la identidad, sustituyendo la doctrina tradicional por nuevos conceptos emanados del Socialismo del Siglo XXI. El caso más emblemático es el de Venezuela, donde obligan a los militares a gritar “Patria, Socialismo o Muerte”. El objetivo final es convertir a estas Fuerzas Armadas en guardias pretorianas al servicio de los regímenes socialistas.

En Argentina, Chile y Uruguay, enjuician a los militares que combatieron la subversión armada, derogando las leyes de amnistía y obediencia debida, y aplicando retroactiva e ilegalmente los efectos de dicha derogación. En la mayoría de los casos, se trata de juicios políticos, precedidos de una propaganda feroz, donde no se presentan pruebas, ni argumentos válidos.

Ciertamente, algunos militares cometieron excesos; pero el objetivo de estas acciones no es hacer justicia, sino cobrar venganza y acabar con las instituciones castrenses. Porque si buscasen justicia, también condenarían a los terroristas de izquierda, que cometieron delitos de lesa humanidad, al colocar bombas, realizar atentados y asesinar víctimas inocentes.

Invariablemente, se criminaliza sólo al sector castrense, mientras que los terroristas del pasado siguen indemnes y, en muchos casos, ostentando altos cargos.

En Colombia, donde el gobierno trabaja hombro a hombro con las Fuerzas Militares, las ONGs de izquierda, financiadas desde el exterior, hacen de las suyas, acusando injustamente a héroes militares, para minar la moral de la Institución. La teoría de los “falsos positivos”, inventada por la izquierda, está haciendo estragos en Colombia, al convertir a muchos terroristas y narcotraficantes, en supuestas “víctimas” del sector castrense.

El hecho de que la ofensiva exista de manera casi idéntica en naciones con gobiernos de diferente ideología, demuestra que se trata de una estrategia supranacional, orquestada desde fuera de nuestros propios países.

El compendio que publicamos a continuación, servirá para conocer mejor los detalles de esta estrategia y para diseñar mecanismos de defensa que la contrarresten.

Soplan vientos de cambio

Durante la década de los ochenta y noventa, casi todos los partidos tradicionales latinoamericanos perdieron su razón de ser, por no contar con un proyecto de nación y, sobre todo, por no haber solucionado el problema más grave de la región, el de la pobreza.

Como consecuencia, en al menos quince países fueron objeto de un voto castigo generalizado, que los desalojó del

poder y lo entregó a manos de los partidos pertenecientes al Foro de São Paulo (FSP).

Sin embargo, luego de años gobernando, los integrantes del FSP tampoco han resuelto los problemas más acuciantes de nuestras naciones; por el contrario, en algunos casos los han agravado, porque -en lugar de gobernar para los más pobres, como habían prometido- se dedicaron a promover un proyecto absurdo y fracasado, basado en el Socialismo del Siglo XXI.

Por este motivo, los pueblos latinoamericanos también se desilusionaron de los gobernantes izquierdistas, y buscan la manera de apartarlos del poder.

En algunos casos, la transición será pacífica, siguiendo los caminos democráticos e institucionales, como ya ocurrió en Panamá, con el triunfo de Ricardo Martinelli; y como se espera ocurra pronto en otras naciones, como por ejemplo en Chile y Uruguay.

Sin embargo, en otros países -entre ellos los pertenecientes al ALBA: Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela- el cambio será traumático, puesto que sus gobernantes no pretenden reconocer los verdaderos resultados electorales, ni están dispuestos a abandonar el poder por ningún motivo. De hecho, ya Chávez y Ortega han cometido fraudes electorales, y sin duda seguirán cometiéndolos en el futuro.

En estas naciones, se presentarán crisis político-militares, muy parecidas a la que experimentó Honduras, cuando Zelaya -también miembro del ALBA- quiso unilateralmente modificar la Constitución para perpetuarse en el poder. Obligados a defender la vigencia de la Carta Magna, el Congreso y la

Corte Suprema de Justicia, tuvieron que destituir legalmente al mandatario y ordenar a los militares hacer cumplir la decisión.

Durante los próximos meses -sin proponérselo- las Fuerzas Armadas de al menos cinco países se verán arrastradas hacia conflictos no deseados. Se verán forzadas a tomar una decisión moral, como ocurrió con los militares hondureños. ¿A quién obedecerán? ¿Al presidente de turno? ¿O al mandato constitucional de defender la democracia y las libertades?

Dado que el sector castrense está obligado a prevenir posibles conflictos y a prepararse adecuadamente para enfrentarlos con éxito, sería contrario a su propia naturaleza no considerar realidades evidentes y palpables, como las que se avecinan en el horizonte.

Es por eso que UnoAmérica ha decidido publicar un compendio que ofrezca a los integrantes de las Fuerzas Armadas latinoamericanas un panorama general de la situación castrense; y así contar con suficientes elementos de juicio que les permita defender su institución y cumplir con la delicada misión que su patria les ha encomendado.

Alejandro Peña Esclusa
Presidente de UnoAmérica
www.unoamerica.org

1.

¿Qué es el Foro de São Paulo?

El 3 de julio de 2009 se cumplieron diecinueve años de la fundación de una organización política denominada el Foro de São Paulo (FSP), que agrupa a casi todas las izquierdas de Iberoamérica, incluyendo a los movimientos guerrilleros armados. Se llamó así porque su primera reunión se llevó a cabo en esa ciudad brasileña.

El FSP fue convocado por el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil y el Partido Comunista de Cuba, con el fin de redefinir los objetivos y las actividades de la izquierda, luego de la caída del muro de Berlín y el derrumbe del comunismo en la ex Unión Soviética.

A la convocatoria acudieron originalmente sesenta y ocho fuerzas políticas pertenecientes a veintidós países latinoamericanos y caribeños. Pero desde su primera reunión el FSP ha crecido notablemente.

En el VI Encuentro, realizado en 1996 en la ciudad de San Salvador, estuvieron presentes ciento ochenta y siete delegados pertenecientes a cincuenta y dos organizaciones miembros; ciento cuarenta y cuatro organizaciones invitadas representadas por doscientos ochenta y nueve participantes; y cuarenta y cuatro observadores integrantes de treinta y cinco organizaciones de América, África, Asia y Europa.

El Foro de São Paulo no posee una sede conocida, pero desde su creación ha sostenido quince encuentros en ciudades distintas, aproximadamente uno cada año: São Paulo (1990), Ciudad de México (1991), Managua (1992), La Habana (1993), Montevideo (1995), San Salvador (1996), Porto Alegre (1997), Ciudad de México (1998), Managua (2000), La Habana (2001), Antigua-Guatemala (2002), São Paulo (2005), San Salvador (2007), Montevideo (2008) y Ciudad de México (2009).

Entre las organizaciones miembros se encuentran: El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Polo Democrático Alternativo de Colombia, el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, el Frente Amplio de Uruguay, el Partido Socialista de Chile, la Izquierda Unida del Perú, el Movimiento Bolivia Libre y el Movimiento al Socialismo de Bolivia, el Partido Socialista Ecuatoriano, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el Partido Revolucionario Democrático de Panamá, el Movimiento Lavalas de Haití, y todos los partidos comunistas de la región, incluyendo -por supuesto- el de Cuba.

Los presidentes iberoamericanos que forman parte del Foro de São Paulo son: Lula da Silva, Raúl Castro, Hugo Chávez, Tabaré Vázquez, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, Mauricio Funes, Leonel Fernández y René Preval.

Cristina Kirchner, Michelle Bachelet y Fernando Lugo, no pertenecen formalmente al FSP, pero sí algunos de los partidos que las respaldan.

El FSP alega que *"no es ni pretende ser una nueva internacional, ni una estructura orgánica que impone condicionamientos a quienes participan, ni un transmisor de unanimidades"*¹. Pero si bien es cierto que no existe unanimidad total dentro de sus miembros -como tampoco la hay en ninguna otra organización política- de hecho funciona como una internacional y tiene una estructura orgánica bien orquestada. Posee un modo permanente de comunicación, un sistema de coordinación y centralización de sus actividades, una revista propia denominada América Libre y, lo que es más importante, un objetivo común claramente definido: la toma del poder en Iberoamérica.

Los integrantes del Foro de São Paulo no presentan propuestas concretas para resolver los problemas de la región; y en la práctica no los han solucionado cuando han llegado al poder. Su único discurso consiste en criticar el orden existente: la globalización, el neoliberalismo, el libre comercio, el imperialismo y los partidos políticos tradicionales.

Armados de estadísticas, los miembros del FSP hablan constantemente del fracaso del capitalismo moderno:

Mientras en 1960 el 20 por ciento más rico de la población mundial disponía de un ingreso 30 veces mayor que el del 20 por ciento más pobre, hoy esa relación es de ¡82 a uno! Existen actualmente 358 personas, las más ricas del mundo, cuyo ingreso anual es superior al ingreso del 45 por

ciento de los habitantes más pobres, o sea, 2.600 millones de personas... 30 millones de personas mueren por hambre cada año y más de 800 millones están subalimentadas.²

Argumentan que tales contradicciones no podrán sostenerse y que, más pronto que tarde, el modelo neoliberal se derrumbará, dando así una oportunidad para el resurgimiento del comunismo o de alguna de sus variantes.

La ola de triunfalismo neoliberal, que, al son de trompetas y estimulada por la caída del muro de Berlín, pretendió pasar por encima de todo, debe vencer ahora resistencias cada vez más fuertes. Hay un amplio y creciente rechazo social a una globalización concebida como pillaje planetario... Este orden mundial que está destruyendo el planeta nos pone de cara a nuevos estallidos sociales.³

En efecto, los integrantes del FSP aprovechan los estallidos sociales para crecer y fortalecerse, aplicando nuevas y variadas formas de lucha.

El FSP opina que la izquierda debe coordinar y centralizar las reacciones contra el neoliberalismo, provengan o no de sus propias filas, y captar las organizaciones populares que surjan como respuesta a las injusticias provenientes del modelo capitalista moderno: desde grupos pequeños que se forman para resolver un problema concreto, como la construcción de una escuela, hasta los movimientos más amplios que luchan por los derechos de la mujer, la preservación del medio ambiente, la defensa de los derechos de los indígenas, etcétera.

Claro está, muchas de estas “organizaciones populares” no son tales, sino simples oportunistas buscando el beneficio propio, esgrimiendo como justificación su pretendida lucha contra las “injusticias provenientes del capitalismo”.

Este reagrupamiento de carácter flexible les ha permitido crecer rápidamente. Según sus dirigentes, en su seno existen:

Fuerzas de izquierda de los más diversos orígenes, algunas con ocho décadas de historia y otras creadas recientemente; marxistas y no marxistas; de inspiración social cristiana -algunas de las cuales identificadas con la Teología de la Liberación-, grupos nacionalistas o de raíz anarquista; sectores desprendidos de viejos partidos históricos, liberales, socialdemócratas o demócrata cristianos; organizaciones con dilatadas trayectorias dentro del sistema político legal de sus respectivos países, otras obligadas a extensos recorridos por los caminos de la clandestinidad, entre ellas varias que en determinados períodos han transitado por la vía armada.⁴

Después de diecinueve años de existencia, hay suficientes elementos para juzgar las actuaciones del FSP. Ya no puede alegar que se trata de un foro de discusión y de disquisiciones teóricas, puesto que muchos de sus miembros ejercen funciones importantes de gobierno. Desde su fundación, el Foro de São Paulo ha estado signado por una serie de contradicciones, las cuales se han profundizado con el tiempo.

El Foro de São Paulo hace de la democracia un baluarte, pero a la vez defiende la revolución comunista cubana, rechazada en el mundo entero por ser una dictadura implacable, que

ha asesinado y encarcelado a decenas de miles de opositores, y cercenado sin ninguna contemplación la libertad y la libre expresión de sus ciudadanos.

El FSP se opone verbalmente al terrorismo y la violencia, pero dentro de sus filas existen grupos guerrilleros, como las FARC y el ELN, que practican diariamente el terrorismo y la violencia. Igualmente condenan el narcotráfico, pero existen pruebas irrefutables de la vinculación de algunas de sus organizaciones con la producción y comercialización de narcóticos, siendo los más conspicuos los movimientos guerrilleros colombianos.

No todos los del FSP se identifican con la lucha armada y con los procedimientos ilegales que utilizan los grupos más radicales del Foro. Sin embargo, en lugar de desvincularse de ellos y denunciarlos públicamente, se sientan en la misma mesa y comparten una misma estrategia de acción, lo cual demuestra la carencia de principios sólidos y el pragmatismo que los mueve, idéntico al de los grupos políticos tradicionales que dicen combatir.

El Foro rechaza la corrupción, pero cuando sus miembros llegan al poder, no la combaten, sino que la acrecientan, como ocurre en Venezuela, donde se evidencia el enriquecimiento personal de los funcionarios públicos y el financiamiento ilegal para sus planes de expansión continental. Muchos dirigentes del Foro de São Paulo se presentan como antiimperialistas, pero luego subordinan el interés de su patria a los del castro-comunismo.

La principal bandera que enarbola el Foro de São Paulo es la lucha contra el neoliberalismo, alegando que con ese modelo “las elites pueden acumular más riquezas a expensas del crecimiento de la pobreza” ⁵, y asegura que esa organización es la alternativa popular y democrática al neoliberalismo; pero después de 50 años de gobierno, el régimen cubano ha creado su propia elite, rodeada de privilegios, mientras que el resto de los cubanos vive en la más absoluta miseria.

Tantas contradicciones demuestran que el principal objetivo de los miembros del Foro de São Paulo es mantenerse en el poder, no para resolver los problemas de los marginados, cuya representación exclusiva se atribuyen, sino para usufructuarlo ellos. Irónicamente, los más perjudicados son los pobres que, aparte de sufrir un nuevo desengaño, continúan experimentando las penurias del subdesarrollo, pero en grado aún mayor, porque además pierden la libertad.

NOTAS

Este capítulo es un extracto actualizado del libro *El Foro de São Paulo contra Álvaro Uribe* (2008), Peña, A. Ediciones Fuerza Productiva. Caracas.

1 Baráibar, C. y Bayardi, J. “El Foro de San Pablo ¿Qué es y cuál es su historia?” (23, agosto, 2000). Disponible en <http://www.analitica.com/va/internacionales/noticias/7026753.asp>.

2 “Radiografía del Foro de São Paulo” (julio, 2000). Cita tomada del Docu-

mento que sirvió de base al IX Encuentro del Foro de São Paulo, realizado en Managua en febrero de 2000. Disponible en <http://www.fuerzasolidaria.org/WebFS/FuerzaProductiva/RadiografiaFSP.html>

3 *Ibíd.*

4 *El Foro de San Pablo ¿Qué es y cuál es su historia?. Ibíd.*

5 *Radiografía del Foro de São Paulo. Ibíd.*

2.

¿Por qué el Foro de São Paulo quiere destruir las Fuerzas Armadas?

La sección “Eventos” de la revista del Foro de São Paulo, América Libre, contiene una transcripción de intervenciones realizadas en mesas de trabajo, donde se discutió el rol de las Fuerzas Armadas. Allí queda claramente plasmada la perversa concepción que tienen los integrantes del FSP sobre las FF.AA. latinoamericanas:

La mayoría de los ejércitos latinoamericanos han sido diseñados, no como guardianes de la democracia, ni de la soberanía nacional; todo lo contrario, han sido diseñados por el capital internacional, precisamente para ahogar la verdadera democracia y para ser policías del capital internacional.¹

Los integrantes del Foro de São Paulo consideran que las Fuerzas Armadas son un instrumento de dominación de los bloques dominantes:

El accionar de las FF.AA. no es nunca un accionar autónomo, históricamente actúan en consonancia con los bloques dominantes o hegemónicos. En todos los golpes de Estado, las FF.AA. han sido los emergentes de relaciones de poder que no podían llegar a establecerse de acuerdo a la le-

galidad burguesa. Las oligarquías, cuando pierden su hegemonía, actúan por el lado del golpe militar, basándose en la doctrina de la seguridad nacional.²

Según esta distorsionada opinión, se requiere de una nueva concepción -un nuevo modelo- para las Fuerzas Armadas, a fin de amoldarlas a los objetivos del socialismo. El documento es explícito, en cuanto a la necesidad de controlar las instituciones armadas para asegurar el poder de la izquierda en la región:

El tema militar tiene que estar en la estrategia de los revolucionarios para romper la dominación; porque, con las diferencias que puedan haber en cada país, éste es uno de los factores de poder fundamentales con el cual tiene que lidiar un proceso revolucionario; ya que precisamente, en una revolución, su principal problema es el del poder, de alcanzar el poder; y éste es uno de los baluartes del poder.³

De estas definiciones se desprende que las Fuerzas Armadas latinoamericanas -tal como están concebidas en la actualidad- deben ser destruidas, o transformadas en otro tipo de instituciones, para que funjan como brazo armado de la revolución, con el único objetivo de asegurar la permanencia en el poder de los abanderados del socialismo.

Pero aparte de esta motivación, hay otra, aún más preocupante y peligrosa.

Además de ser una corriente política, el Foro de São Paulo es una mafia criminal, que sirve de vaso comunicante

para los llamados “imperios transversales”, como lo son el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de armas.

Se les denomina imperios, por el enorme poder que ostentan y por las multimillonarias cantidades de dinero que manejan; y se les llama transversales, porque no pertenecen específicamente a un territorio, sino que se comunican, desplazan y movilizan a lo largo y ancho del globo, prácticamente sin ninguna limitación.

Aun así, los imperios transversales necesitan de espacios determinados en los cuales materializar dichos negocios, y los integrantes del Foro de Sao Paulo se los proporcionan, generándose así una simbiosis del mal, en la que todos los participantes obtienen un importante rédito.

Todos los integrantes del Foro de São Paulo -apelando a la máxima: el fin justifica los medios- son, en el mejor de los casos, permisivos con los imperios transversales del crimen; y en el peor de los casos, se transforman en uno de ellos. El ejemplo más evidente lo constituyen las FARC, que dejaron de ser una simple guerrilla con fines políticos, para convertirse en el más poderoso cartel de la cocaína.

La información contenida en los computadores y dispositivos electrónicos incautados a alias Raúl Reyes, durante la Operación Fénix, demuestra la relación que existe entre las FARC y los dirigentes políticos de toda América Latina que pertenecen al FSP.

La revista América Libre no esconde su rechazo a que los militares luchen contra el narcotráfico y el terrorismo; por el contrario, opina que el combate contra el narcoterrorismo es

una mera excusa para golpear la revolución:

El imperialismo, una vez que ya no tenía a mano la justificación de la doctrina de la seguridad nacional, ni el anticomunismo, ha inventado nuevas funciones para las FF.AA. para golpear a la fuerza revolucionaria: el narcotráfico y ahora el terrorismo. Son vehículos que han sustituido al anticomunismo.⁴

Estas dos motivaciones -transformar a los militares en brazo armado del socialismo, y neutralizar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo- son de carácter supranacional. Eso explica que las Fuerzas Armadas estén siendo atacadas de manera casi idéntica en toda la región, pese a las diferencias ideológicas que existen entre los distintos gobiernos latinoamericanos.

Como se explica más adelante, el Foro de São Paulo no es la única organización que pretende dismantelar las Fuerzas Armadas, hay otras (enquistadas no sólo en América Latina, sino en Estados Unidos y Europa) que también quieren hacerlo; sin embargo, hemos colocado el énfasis en el FSP porque, en este momento, constituye la amenaza más inmediata a la integridad de las FF.AA.

En los seis capítulos que siguen a continuación, presentados en orden alfabético -Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela- el lector podrá conocer los métodos que se utilizan en cada país para dismantelar a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, también podrá detectar claras semejanzas, que revelan un objetivo común y un hilo conductor.

Cada capítulo fue escrito por un equipo diferente, perteneciente a cada uno de los países referidos. La mayoría está conformado por militares retirados; pero en algunos casos también participaron civiles conocedores del tema militar. De allí los diferentes estilos de presentación y redacción.

Esta obra está concebida como un primer aporte, sujeto a ser mejorado y ampliado, para incluir los capítulos correspondientes a Brasil, Chile, Ecuador y otras naciones. Esperamos sinceramente que analistas de otros países decidan incorporarse al esfuerzo de develar el complot que existe para aniquilar a las Fuerzas Armadas de América Latina.

NOTAS

1 Revista América Libre. Disponible en:
<http://www.nodo50.org/americalibre/eventos/mesaffaa0903.htm>

2 Ibid

3 Ibid

4 Ibid

3.

El desmantelamiento de las Fuerzas Armadas en Argentina

Colaboración del Centro de Estudios Históricos Verdad y Equidad para ser Nación

1. Introducción

Referencia histórica sobre la “guerra revolucionaria” en nuestro país

En 1959 durante la presidencia constitucional del Dr. Arturo Frondizi se detectó y neutralizó un grupo que intentaba iniciar una guerrilla rural en Tucumán bajo el nombre de “Uturuncos”. En 1963, con otro presidente constitucional, el Dr. Arturo Illía, recaló en el país el “Ejército Guerrillero del Pueblo” encabezado por el “Comandante Segundo” -Jorge O. Massetti- mediante una invasión desde territorio boliviano a la provincia de Salta. El grupo, enviado por el Che Guevara, estaba compuesto por 50 argentinos y extranjeros, entre los que resaltaban miembros del ejército cubano. La actividad preparatoria en la zona de Orán comenzó en junio de ese año y para marzo del año siguiente -1964- ya había sido desbaratada por la Gendarmería Nacional: muertos, desaparecidos, presos o evadidos, marcaron el fracaso de este primer intento cubano de

intervención militar en nuestro país.

En la Tricontinental de la Habana (1966) y en la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS 1967) fue cuando Cuba multiplicó la formación político-ideológica y militar de sudamericanos, bajo la consigna de “hacer la revolución mediante la lucha armada”, para lo cual instó a todos los países del subcontinente a organizar Ejércitos de Liberación Nacional para acompañar al Che en su intento insurreccional en Bolivia, donde halló su muerte.

Después de la muerte de Guevara la violencia se expandió: movimientos insurreccionales en las principales ciudades de nuestro país, magnicidios e incremento sustancial de aparentes delitos comunes (asaltos, robos, secuestros) que brindaron los fondos para dotar a las tres organizaciones político-militares que nacieron en 1970: Montoneros, Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), cuyo nombre intentaba ocultar la ideología marxista de gran parte de sus integrantes, las precedían desde 1964 y estaban en el ápice de su desarrollo.

Desde entonces y sin importar el tipo de gobierno (jure o facto) en ningún momento detuvieron las acciones subversivas y mantuvieron inalterable su objetivo de tomar el poder para instaurar un sistema socialista, previa destrucción de las instituciones vigentes. El conjunto de acciones subversivas durante el decenio 1969-1979 determinó un promedio de seis hechos diarios de esas características, pero el índice se eleva a 10 hechos diarios si se considera el trienio 1973-74 y 75. Debe

aclararse que este significativo aumento fue una consecuencia directa e inmediata del decreto del presidente Cámpora, del 25 de Mayo de 1973 y la consecuente ley de amnistía a los dos días posteriores, por la que irresponsablemente se liberaron alrededor de 2000 subversivos condenados y procesados sin exigirles renuncia previa a la acción armada y entrega de su armamento. Hasta esa fecha en la Argentina se había luchado contra la subversión terrorista con la ley en la mano, gracias al trabajo de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, una institución pionera en el mundo para contrarrestar judicialmente al terrorismo, que fue ideada por el Ministro de Justicia del general Lanusse, Jaime Perriau, en 1971.

En 1975, dado el caótico estado imperante en el país, la Presidente Constitucional ordenó a las FF.AA. hacerse cargo e iniciar operaciones tendientes a aniquilar la subversión. A partir de esa decisión las organizaciones terroristas fueron objeto de un asedio incesante, tanto en el ámbito rural como en el medio urbano y comenzaron a sufrir crecientes bajas que los indujeron a introducir cambios en la estrategia mantenida hasta ese momento.

Un año antes había nacido la estructura dependiente del ERP “Solidaridad Internacional” (o “Cuarto Pilar”) mediante el establecimiento de contactos con organizaciones similares de Europa y Asia, y el inicio de las denuncias por violaciones a los derechos humanos ante organismos internacionales encargados de la defensa de los mismos, a través de decenas de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de siglas variadas que se fueron constituyendo, básica-

mente con exiliados argentinos.

El éxito obtenido por la sociedad argentina contra la subversión terrorista comenzó a ser desacreditado por esa campaña contra el gobierno de facto que regía al país, comparándolo con los regímenes nazi o fascista donde se habían comprobado genocidios (los de la URSS no se mencionaban). La propaganda repicaba las muletillas consabidas: “jóvenes idealistas que eran eliminados por disentir” con militares totalitarios que habían asaltado el poder constitucional “para imponer un sistema económico contrario a los intereses populares”. Pese a lo burdo de la propuesta y a la flagrante omisión de los objetivos y crímenes cometidos por las organizaciones terroristas, la Argentina comenzó a ser objeto de una presión internacional tendiente a frenar su acción contra aquéllas.

En 1982 la Argentina fue derrotada por Gran Bretaña (con ayuda de la OTAN) en la guerra iniciada por la recuperación de sus islas Malvinas. Pese al apoyo casi unánime de los países del subcontinente (exceptuados Chile y Colombia), el aislamiento a nivel internacional fue muy profundo e influyó de manera terminante en la finalización del gobierno del Proceso Militar. En este cuadro de situación tan desfavorable, las FFAA argentinas entregaron el gobierno al presidente electo, Dr. Raúl R. Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, y comenzaron a sufrir los embates de otro tipo de guerra, más sutil pero no por ello menos destructiva: La Guerra Cultural.

La guerra cultural toma vuelo en Argentina

Es oportuno recrear este concepto como: el enfrentamiento en el ámbito de una nación para imponer una concepción contraria a los principios trascendentes que sostiene, mediante una alteración del “sentido común” (entendido este último como el común sentir de la gente ante determinados hechos que históricamente deben prevalecer en los integrantes de una sociedad). Según la concepción de Gramsci y en abierta oposición a la teoría leninista que requiere de la conquista plena del Estado para imponer al marxismo, es imprescindible ganar al pueblo destruyendo sus valores y tradiciones, sustituyendo su cultura por una nueva forma de pensar, actuar y ver la vida.

De allí la importancia que Gramsci asignaba a los intelectuales frente al conjunto de la sociedad para alcanzar la toma del poder político, y la gravitación que en tal sentido poseen los medios de comunicación en la sociedad moderna, como multiplicadores de las ideas propugnadas por aquéllos, para imponer ese “sentido común” -horizontal y homogéneo- que permita asimilar a la sociedad política. Es fundamental comprender el concepto de materialismo que sustenta Gramsci como un rechazo visceral por la cosmovisión religiosa de la existencia, de la trascendencia, del más allá. Por eso su intención de desacralizar y su odio manifiesto a las religiones, la católica en particular.

Con esta suerte de “estrategia indirecta” Gramsci logró imponer, a través de sus conceptos, un euro-comunismo en

aquellos países latinos en los cuales los escritos de Marx o la praxis de Lenin habían resultado ineficaces.

De lo sintéticamente expuesto surgen en forma natural los objetivos perseguidos por la guerra cultural:

- Desacralizar, desprestigiar y ridiculizar a las religiones.
- Modificar a la familia tradicional mediante creciente injerencia estatal.
- Infiltrar y corromper el sistema educativo.
- Desprestigiar y minimizar el rol de las FF.AA.
- Imponer modelos y valores afines a su concepción mediante el control de los medios de comunicación social y expresiones culturales y artísticas.

Nótese como a partir de 1983 -en ese escenario que calificamos como desfavorable para las FF.AA. Argentinas- se fue avanzando sin pausa en la consecución de los 5 objetivos precedentes, con la finalidad de constituir en el orden nacional un cuadro de situación netamente propicio para la instalación de un sistema de clara concepción marxista.

La “Guerra social”, el eslabón que faltaba

Como repetición agravada de turbulencias sociales ya vividas en 1989, 1994 y 1995, en diciembre del 2001 una serie de manifestaciones populares -violentas y masivas- se sucedieron en toda la República Argentina, con particular virulencia en la Capital Federal y el cono urbano de la provincia de Buenos Aires. En apariencia se trataba de “movimientos so-

ciales espontáneos y apolíticos”, integrados por decenas de miles de personas cuya motivación principal consistía en llamar la atención por la grave situación que afectaba económicamente a un sector mayoritario de la población. La crisis explotó inicialmente por el congelamiento de los depósitos bancarios de particulares (“corralito”), dio por tierra con la presidencia de Fernando de la Rúa e inició un período de inestabilidad política y anarquía que dejó profundas secuelas.

Los métodos usados por los manifestantes fueron los saqueos a comercios -en particular supermercados- destrozos e incendios indiscriminados, ocupación de establecimientos, cortes de calles y rutas de acceso a las principales ciudades por parte de grupos de activistas, que desde entonces fueron caracterizados como “piqueteros”. Es oportuno recordar que algo más de un año atrás, en julio del 2000, se realizó el “Encuentro Antiimperialista: Congreso Internacional de Movimientos Sociales” en la Universidad de Manta (Ecuador). Allí se expresó públicamente por primera vez que la estrategia para el continente en la actual coyuntura latinoamericana era la “Guerra Social”, versión actualizada de la clásica guerra insurreccional de masas. Sin perjuicio de lo anterior se preveía dar apoyo a la guerrilla colombiana y otros grupos similares.

Para materializar el concepto previo se decidió trabajar promoviendo protestas sociales, sectoriales y sindicales. En la primera etapa fueron elegidos Ecuador, Colombia y Perú; una segunda instancia incluía a Brasil, México y la Argentina.

Puede considerarse que las siguientes instituciones, organizaciones o grupos de nuestro país están enrolados en alguna medida en el desarrollo de la Guerra Social, ya sea por su pertenencia al Foro de San Pablo, como a la activa participación en acciones violentas del tipo expuesto. La mayoría de ellas emplea la técnica de “ganar la calle” para ocupar espacios de poder a la espera del momento oportuno para propinar el “puñetazo al paralítico”: ONGs vinculadas con residuos de la guerrilla de los 70: “Madres de Plaza Mayo”, “Abuelas”, “Hijos”; partidos políticos de izquierda; movimientos feministas; sindicatos combativos; comunidades de gay y lesbianas; sectores sociales deprimidos: desocupados y jubilados; grupos promotores de “Democracia Directa”: Asambleas barriales, “Barrios en Lucha”; grupos carenciados: “Sin Tierra”, “Sin Techo; organizaciones “ecologistas”; asociaciones indigenistas; organizaciones estudiantiles; organizaciones de autogestión; comités de fábricas ocupadas; grupos marginales violentos: “Barras bravas”.

A las entidades precitadas deben incorporarse todos aquellos elementos que componen específicamente el Movimiento Piquetero Nacional, entre los que pueden computarse más de quince Movimientos, Agrupaciones, Frentes y Federaciones liderados principalmente por partidos o entidades de izquierda extrema, muchos de ellos dirigidos por funcionarios vinculados con la gestión gubernamental.

Vale destacar que al asumir la presidencia Néstor Kirchner en el 2003, el problema piquetero entró en progresión geométrica, en gran parte por la anticonstitucional consigna

impuesta por la autoridad de “no judicializar las protestas sociales”, como así también por la incorporación rentada por el gobierno de ciertos grupos que ha utilizado como fuerzas de choque o intimidación contra sectores disidentes u opositores.

2. Aplicación de las ideas de Gramsci y Marcuse antes de la creación del FSP

En 1983, el gobierno militar de facto (1976-1983), como se dijo, llamó a elecciones generales de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional.

Como consecuencia de las mismas resultó electo presidente el doctor Raúl Ricardo Alfonsín ¹ cuyo partido había expresado que el objetivo respecto al sector militar era: *“disminuir de una vez y para siempre el papel político de las FF.AA. en el país”*. Esta declaración de contenido lógico y aceptado por los integrantes de las mismas fuerzas por las experiencias históricas vividas, tenía un acento político que iba a ir mucho más allá de su significado literal y que terminarían afectando notablemente la Defensa Nacional.

Como iremos viendo en el desarrollo de este documento, a pesar que en esta época no existía aún una estructura supranacional (Foro de San Pablo), en los círculos de izquierda radicalizada y en especial en las universidades circulaban las ideas de Gramsci y Marcuse como parámetros aptos para lograr los objetivos de toma del poder dentro de nuestro país.

Los “Derechos Humanos” usados como estrategia política para debilitar las FF.AA.

A los tres días de asumir Alfonsín dictó dos decretos para enjuiciar: por un lado, a los miembros de las tres primeras juntas militares; y por el otro, a un pequeño número de dirigentes subversivos terroristas, dentro del cual llamaba la atención que sólo uno de ellos pertenecía al PRT-ERP y todo el resto a Montoneros. Por estos decretos -que daban por iniciado el conflicto armado a partir del 24 de marzo de 1976-, cuando era público y notorio que el conflicto había comenzado más de una década antes, va a surgir la denominación de “teoría de los dos demonios” (ver Google “Nuestra_historia_70” Boletín 105) como desfiguración del conflicto armado acaecido en nuestro país, (terroristas contra militares) la que tenía un falso doble mensaje a la opinión pública:

- “Los políticos no somos responsables” (ni de la guerra ni de los muertos)
- “El gobierno es ecuaníme al juzgar a ambos actores del conflicto armado interno”.

Para ratificar la hipocresía del gobierno de Alfonsín, es interesante transcribir algunos párrafos del libro “Memorias de Gorriarán Merlo”, un terrorista asesino confeso.²

Alfonsín en sus decretos no reconoció que en Argentina hubo una guerra no convencional (“guerra revolucionaria”), contradiciendo el espíritu de lo que expresara como defensor

de terroristas en 1972. Tampoco reconoció que las acciones terroristas en su enfrentamiento con las instituciones del Estado habían comenzado antes el 24 de marzo de 1976 (inicio del gobierno militar de facto), ya que a esa fecha y durante los gobiernos constitucionales desde 1973 ya se habían producido más de 900 desaparecidos y otra cifra similar de muertos entre las partes enfrentadas (los terroristas y la sociedad con sus instituciones republicanas).

A las 48 horas de dictar los decretos expresados dictó el decreto 187/83 creando una “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas-CONADEP” (destinada a determinar e identificar -mediante el procesamiento de denuncias- a todas las personas desaparecidas), comisión especial anticonstitucional de hecho, por estar explícitamente prohibida por el Art. 18 y por invadir la competencia del Poder Judicial. Los miembros componentes de la misma, en general, no garantizaban ecuanimidad ni seriedad en su trabajo ya que varios eran ideológicamente de izquierda, enfrentados a las FF.AA., y dos eran padres de desaparecidos. La persona de más prestigio ante la comunidad, el doctor René Favaloro, a poco de andar, renunció porque observó “falta de ética y de objetividad” en las tareas encaradas (Ver Google ó Yahoo “Nuestra_historia_70” Boletín Nro. 100).

La CONADEP tenía el apoyo de todos los militantes de las organizaciones subversivas, de los familiares de muertos y desaparecidos, de los partidos políticos de izquierda radicalizada, del Partido Comunista y de las ONGs de DD.HH. que sólo defendían a los terroristas, atacando a las FF.AA., de Se-

guridad y Policiales, actuantes en la guerra contra el terrorismo subversivo. Posteriormente las denuncias presentadas sirvieron también para un “gran negocio” para abogados y familiares de terroristas subversivos muertos y desaparecidos.

Unos días después, el gobierno, con la intención de continuar su prevista “estrategia Gramsciana”, contra las FF.AA., promulgó la Ley 23.040, que anuló la Ley de Amnistía General Nro. 22.924, llamada “de Pacificación Nacional”, sancionada el 23 de septiembre de 1982 por el Gobierno Militar, que era la acción recomendada por el Derecho Humanitario.³

De resultados del trabajo de la comisión, produjo un “Informe” titulado “Nunca Más”, elevado al presidente Alfonsín en septiembre de 1984. De acuerdo a sus “conclusiones”, se confeccionaron 7.380 legajos de personas supuestamente desaparecidas (de los cuales sólo 4.905 tenían datos completos identificatorios, incluyendo el número de documento). Increíblemente en esa parte final se expresa que se estimaba que los desaparecidos eran 8.960 (?), sin fundamentar donde estaban los eventuales 1.580 legajos faltantes o las razones de esa estimación. Como veremos, hasta el día de hoy -arbitrariamente y como un recurso de acción psicológica tendiente a configurar la figura de “genocidio”- se difunde por todos los medios y organizaciones que los desaparecidos fueron ¡¡30.000 !! .

Debemos dejar constancia que posteriormente “varios desaparecidos”, consignados como tales en el Informe de la CONADEP, declararon en el posterior juicio a los coman-

dantes, otros fueron encontrados en el extranjero e incluso aparecieron años después en distintos e importantes cargos oficiales de gobiernos posteriores (actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actual juez federal, actual Procurador General de la Nación, etc.).

El juicio a las Juntas Militares fue el inicio de la campaña de desprestigio, no sólo de los comandantes de las fuerzas, sino de todas las FF.AA. por los procedimientos utilizados en la lucha contra el terrorismo, mostrándolas como victimarias de jóvenes “idealistas” que actuaban políticamente. Al respecto, el máximo dirigente montonero Mario E. Firmenich desmintió esto último en una entrevista publicada el 17 de marzo de 1991 cuando expresó al periodista Jesús Quinteros: *“Habrá alguno que otro desaparecido que no tenía nada que ver, pero la inmensa mayoría eran militantes y la inmensa mayoría eran montoneros. A mí me hubiera molestado muchísimo que mi muerte fuera utilizada en el sentido de que un pobrecito dirigente fue llevado a la muerte. Hombres capaces de elegir su vida y de dejar posibilidades laborales, intelectuales, lo han hecho con conciencia, con pasión, con sacrificio, con patriotismo, con amor al prójimo y todo eso se transformó en una estupidez. No hay derecho.”*

Con Alfonsín también se inició la llamada “desmalvinización”; es decir, las acciones de crítica a la guerra contra Gran Bretaña, apoyadas por una campaña de desprestigio a los oficiales y suboficiales, y ensalzamiento a los jóvenes soldados. Además hubo en general una falta de protección del gobierno a los veteranos ex combatientes, muchos de los cuales poseían secuelas típicas de todo conflicto armado, que origi-

naron un número importante de suicidios y de otros problemas psicológicos. Tampoco se arbitraron las medidas para dar un resarcimiento económico y moral a quienes expusieron sus vidas en el frente de batalla con el apoyo de todo el pueblo argentino.

La campaña de acción psicológica contra las FF.AA.

Los dirigentes trotskistas y comunistas (aún algunos con disfraces de peronistas), además de instruirse en Cuba, donde se aprecia concurrieron unos 5.000 militantes a lo largo de casi quince años para ser adoctrinados y adiestrados en técnicas de guerrilla urbana y rural, también tuvieron aceitados lazos con gobiernos, sindicatos y ONGs europeas de izquierda, iniciados en 1974 por la estructura “solidaridad internacional” ya referida, y profundizada notablemente durante el exilio que se generalizó a partir de 1977, incluyendo a las cúpulas de las organizaciones terroristas, debido a la cantidad de militantes presos que estaban delatando a sus compañeros.

Fieles a sus convicciones ideológicas, continuaron desde allá atacando al gobierno y FF.AA. con las frases hechas de: “en Argentina hay un genocidio”, “los opositores políticos son secuestrados torturados y desaparecidos”, “no existe el estado de derecho”, “es una dictadura feroz”, “hay 30.000 desaparecidos”, etc. Eran frecuentes las reuniones de prensa en las que se presentaba a algún liberado de los “centros de reunión de prisioneros” (liberados por haber colaborado con las fuerzas legales) quienes denunciaban apremios y torturas inimagi-

nables al sólo efecto de reducir el sentimiento de culpa por sus delaciones, que habían colaborado en forma gravitante en la destrucción de las organizaciones terroristas subversivas de las que formaban parte.

En los principales países europeos se crearon organizaciones, comités de apoyo y solidaridad, y de DD.HH., a través de los cuales se difundía información falsa, incompleta o distorsionada para imponer en la opinión extranjera que la subversión y el terrorismo no existían, sino que eran una invención de la dictadura imperante para justificar sus represiones. Uno de los miembros más activos en esos comités era casualmente Rodolfo Mattarollo.⁴

Algunas de las organizaciones de falsos DD.HH. creadas por terroristas argentinos fueron: Comisión Argentina de los Derechos Humanos (CADHU); Comisión de Solidaridad de Familiares de presos, muertos y desaparecidos en la Argentina (COSOFAM); Comité Argentino de Información y Solidaridad (CAIS), creado por la “Junta Coordinadora Re-volucionaria” (JCR), integrada por ERP, MIR chileno, Tupamaros y ELN de Bolivia.

Es necesario recalcar que a lo largo de todos los gobiernos constitucionales a partir de 1983, se realizó y se sigue realizando, una campaña de acción psicológica contra los militares en relación a los procedimientos utilizados en la guerra no convencional librada contra el terrorismo subversivo. Es difícil encontrar una campaña de ese tipo contra un sector de la sociedad tan prolongada (lleva 25 años ejecutándose), tan incisiva, tan constante y en la cual hayan sido utilizados tantos

medios, procedimientos y recursos financieros aportados por el Estado. Justamente contra el sector que es constitucionalmente el brazo armado de la Nación.

Desarrollo del ataque a las FFAA por parte del gobierno neomarxista

Mientras tanto, por la renuncia de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que actuó durante el llamado “Proceso Militar”, Alfonsín nombró los cinco jueces para cubrir las nuevas vacantes, asegurándose el manejo de la justicia al más alto nivel. El Dr. Leopoldo Schiffrin, un enemigo ideológico de las FF.AA., fue designado secretario.

Esa Justicia, no actuó conforme a derecho ya que, impulsada por el poder político, creó nuevas normas no existentes al momento de los hechos que se imputaban, y utilizó otras que violentaban los preceptos constitucionales y del Derecho Internacional. Entre ellas:

- El gobierno modificó la ley 14.029 (Código de Justicia Militar) a efectos de sacar a los miembros de la Juntas Militares de sus jueces naturales, en violación del Art. 18 de la Constitución Nacional. También ordenó que el juicio se realizara con característica de sumario (para impactar en la opinión pública nacional e internacional y no se diluyera en el tiempo) e impartió instrucciones para que no se aceptase que había habido una guerra (Ver en Google o Yahoo: “Nuestra_historia_70“, B117 y otros).

- Se violó el Art. 18 que dice: *“Ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”*, ya que se juzgó imputando delitos inexistentes en nuestro código penal y “por una comisión especial” carente de idoneidad y competencia.
- Se violó la norma del derecho de aplicación de la ley más benigna.
- Se violó el principio constitucional de inocencia con la aplicación de prisiones preventivas permanentes, no ajustadas a sus fines cautelares.
- Se violó el principio de cosa juzgada y negación de los derechos adquiridos.

Esta perversa e inequitativa interpretación de la justicia, en línea con los postulados de Gramsci para destruir y debilitar las FF.AA., permitió que a la fecha (30 años después) sólo exista un único grupo de perseguidos por la guerra contra el terrorismo: los miembros de la institución militar que habían recibido del poder político constitucional la orden de aniquilarlo.

La realización de los juicios a los Comandantes fue un enorme show para el país y el exterior con el fin de hacer aparecer a Alfonsín como el paladín de los DD.HH., camino al “Nobel de la Paz”. Los testigos y los presuntos torturados, instruidos por los abogados de DD.HH. -cuya estrategia iba mucho más allá de ese juicio-, relataron cosas aberrantes para

impactar a la población, que a su vez era “bombardeada” por una aviesa campaña de acción psicológica que presentaba a los militantes de organizaciones armadas terroristas como inocentes jóvenes que sólo habían sido críticos del gobierno.

Mientras tanto el gobierno utilizó varios subterfugios e incluso dos leyes con normas para conmutar penas y presentar impugnaciones a condenas firmes dictadas por tribunales militares. En poco tiempo todos los terroristas detenidos quedaron libres.

Las sentencia condenatoria a los Comandantes abrió las puertas para impulsar nuevos y masivos juicios a los integrantes de las FF.AA. y a otras fuerzas que actuaron subordinadas, al margen de su jerarquía. Sin embargo esa sentencia, luego ratificada por la Corte Suprema de Justicia -adicta al Poder Político- en su lado positivo dejó establecido que no hubo condenas por delitos de genocidio, lesa humanidad, ni plan sistemático de apropiación de menores. Delitos todos que aún hoy se intenta imputar a los mismos actores.

La avalancha de citaciones e imputaciones a oficiales y suboficiales, que en la época de los hechos eran subalternos, provocó gran inquietud en los cuadros, quienes entre 1987 y 1989 produjeron varios motines en el Ejército contra los jefes de Estado Mayor, por considerar que no defendían adecuadamente a sus subordinados.

A raíz de esas acciones, el gobierno -que no quería dictar una Ley de Amnistía y que había anulado la dictada por el gobierno militar antes de entregar el poder- envió dos leyes al Congreso Nacional que fueron aprobadas: la Ley de “Punto

Final” y la de “Obediencia Debida”. Con esto veremos que temporariamente la persecución política por medios jurídicos a los cuadros de las FF.AA. y elementos subordinados, se detuvo.

La nueva ley de Defensa Nacional 23.554 del gobierno radical

Fue promulgada en 1988 luego de tres años de tratamiento. Es incompleta y pesa de anacrónica al no considerar por razones ideológicas las "Nuevas Amenazas", que en definitiva son las generadoras de la casi totalidad de conflictos que suceden en el siglo XXI dentro de la categoría de “Crimen internacional organizado”: como el fundamentalismo religioso, terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero, además de las amenazas energéticas y a los recursos naturales.

El tiempo transcurrido desde la promulgación y su reglamentación (casi 20 años) fue responsabilidad constitucional de los distintos presidentes que gobernaron el país. Por su parte el Consejo de Defensa no cumplió en hacer los proyectos de leyes mínimas necesarias para completar el Sistema de Defensa. La suma de estas omisiones demuestra el desinterés, la falta de conciencia e ignorancia de nuestra dirigencia política sobre la necesidad de establecer una política de Seguridad Nacional, imprescindible para establecer cuáles son los desafíos y amenazas y cómo enfrentarlos. ¿Es posible que aún (año 2009) no se hayan promulgado leyes mínimamente necesarias, por ejemplo la ley orgánica de producción para la defensa?,

¿Podemos prepararnos para un conflicto armado sin ley de movilización y entrenamiento de las reservas?... por citar sólo dos de las normas que aún no han llegado al Congreso -20 años después de ordenar la Ley de Defensa- que se debían concretar dentro de los 365 días de promulgada dicha ley.

La síntesis final de las consideraciones relativas a la Ley de Defensa vigente y su instrumentación se puede resumir en una sola frase: "Nuestro país, Argentina, quedó y está totalmente indefenso por voluntad y decisión de nuestros gobernantes".

En diciembre de 2001 el gobierno del Dr. Menem promulgó la Ley 25.520 o Ley de Inteligencia Nacional. En coherencia con la anterior -Ley de Defensa- prohibía a las FF.AA. realizar la inteligencia en el país, necesaria para poder prevenir o enfrentar las "nuevas amenazas". El proporcionar la información e inteligencia necesaria para esos casos se asignaba como obligación de la Secretaría de Inteligencia (SI) dependiente de la Presidencia de la Nación.

En su contenido prohíbe formar parte del sistema de Inteligencia Nacional a quienes registren antecedentes por crímenes de guerra, contra la humanidad o por la violación de DD.HH. que figuren en los archivos de la Secretaría de DDHH, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Ley establece también el control parlamentario, antes inexistente.

3. Destrucción de la Industria para la Defensa Nacional (1983 - 1989)

En términos económicos, la “Seguridad y la Defensa Nacional” se define como un bien público intangible, necesario fundamentalmente para garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial del Estado; un concepto que amplía, y de ninguna manera obstruye, principio alguno que se pueda deducir del contenido de la Constitución de la Nación Argentina.

Necesidad de utilización de la experiencia de la “Guerra de Malvinas” ⁵

Las recomendaciones del informe respecto a la industria para la Defensa fueron:

- Mantener la capacidad fabril para la fabricación de munición y explosivos.
- Mantener la capacidad fabril y o mantenimiento de vehículos de combate terrestre, aéreo y naval.
- Generar condiciones favorables para la creación de tecnología de sustitución y de fabricación de elementos nuevos de materiales de guerra.

Todas estas acciones debieron ser consideradas en la política de Defensa de los gobiernos posteriores a 1983. La

realidad fue opuesta a estas recomendaciones como veremos más adelante.

Disminución del presupuesto de Defensa Nacional

Durante el gobierno del doctor Alfonsín y gobiernos posteriores, se disminuyó notablemente el presupuesto del área de Defensa lo que paralizó en gran parte las actividades de las distintas fabricas militares y las tareas de mantenimiento así como las compras de material extranjero -más necesarias que nunca- luego de la notable pérdida de material, además de vidas, producida durante la guerra de Malvinas (Abril-Junio 1982). Ese bajo presupuesto también influyó en la falta de adecuado adiestramiento de las fracciones de los distintos comandos y unidades, con la consecuente reducción en la capacidad operativa y de conducción de los distintos niveles.

- Ejército Argentino (EA)

La Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) creada por Ley 12.709 del 9 de octubre de 1941 como elemento orgánico del Ejército Argentino era un enorme complejo industrial-militar. Hasta 1983 estaba integrada por una Dirección de Desarrollo de la que dependían las 14 grandes sociedades en las que la DGFM tenía participación accionaria, y atendía todo lo relacionado con el sector siderúrgico y minero según lo establecía la ley. Se completaba su organización con la Dirección de Producción de la que dependían 12 estable-

cimientos fabriles que producían elementos estratégicos para las FF.AA. argentinas y de algunos países de Latinoamérica.

Diez días después de asumir, Alfonsín dispuso por decreto que Fabricaciones Militares pasara a depender del Ministerio de Defensa, y un mes y medio después designó personal civil sin conocimientos o ajeno a la empresa, para ocupar la cúpula de toda la estructura, lo cual no era malo en sí mismo, sino que la medida tenía más intencionalidad política que dirigencial en cuanto no se había realizado un adecuado estudio de factibilidad para modificar la dependencia y estructura del sistema. Hasta ese momento la DGFM había sido manejada como un holding en el que las empresas más rentables permitían el funcionamiento y producción de otras cuya actividad era necesaria aunque no rentable. La modificación significó el desmembramiento de las distintas sociedades que antes eran conducidas como un holding, lo que originó una situación anárquica en algunas de las empresas y fábricas cuyos nuevos gerentes civiles con poco conocimiento de lo que debían administrar, entraron en el juego de intereses políticos y económicos.

En síntesis, el gobierno de Alfonsín, por razones partidarias e ideológicas, perdió una importante oportunidad para mejorar la organización industrial militar a través de un programa coordinado, toda vez que los cambios no se produjeron como consecuencia de un estudio meduloso, en el que participaran especialistas en el tema, sino por una decisión política -inducida por una particular visión histórica, sectaria y teñida de cuestiones ideológicas- preconcebida para disminuir la in-

jerencia en el poder político y económico del Estado por parte de las FF.AA.

-Tanque Argentino Mediano S.E. (TAMSE)

El TAM (Tanque Argentino Mediano) fue un proyecto nacido en la DGFM en cooperación con Thyssen de Alemania, acordándose en su oportunidad realizar dos prototipos: un Vehículo de Combate -tanque- de 30 Ton. con cañón 10.5 y un vehículo blindado de Transporte de Personal con cañón de 20mm. Luego de probados los prototipos, que estaban a la altura de los mejores productos mundiales, se inició su fabricación en serie. Se fabricaron alrededor de 450 vehículos blindados.

En 1980 se inició el desarrollo de un VC blindado para artillería de 155 mm que fue logrado con éxito. Hasta 1996 se entregaron 17 de ellos a las unidades correspondientes. En 1997 el gobierno del Dr. Menem ordenó la liquidación de TAMSE, la sociedad que fabricaba estos armamentos blindados, cuyo trámite finalizó en el año 2000. Los activos quedaron en el Ejército.

• Armada de la República Argentina (ARA)

La industria naval argentina -para servir a un enorme litoral marítimo- estaba orientada a la construcción de unidades de pequeño, mediano y gran porte para la carga y pesca en la cual estaba muy bien calificada. En menor grado satisfacía la construcción de unidades para la ARA y cubría sus

necesidades de mantenimiento. La modalidad de esta Fuerza, en lo que hace al equipamiento, se basaba en la compra de unidades usadas o nuevas con equipamiento completo, incluyendo los sistemas de armas. De todos modos para las necesidades de mantenimiento, desarrollos y actualizaciones tecnológicas se valía de sus talleres de la Base Naval Puerto Belgrano e instalaciones de empresas sobre las que ejercía influencia legal por participación accionaria.

En función de las exigencias así planteadas el Estado Mayor General de la Armada al 31 de diciembre de 1983 tenía bajo su mando la siguiente estructura de apoyo :

-Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor S.A.)

Empresa inicialmente dirigida por la Armada Argentina y la Administración General de Puertos, bajo el sistema legal de una sociedad anónima, con mayoría de capital estatal. Los talleres tenían como capacidad la reparación de 400 buques por año. En los años 1973 y 1974 además, se armaron y ensamblaron allí las partes de los submarinos “San Luis” y “Salta” de 1000 toneladas cada uno. Actualmente es una empresa privada.

-Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE)

Era el astillero argentino más importante, disponiendo de una superficie (en todo su predio) de 1.010.000 m². En él se fabricaron para la Armada Argentina buques como: el destructor ARA Santísima Trinidad y las fragatas misilísticas ARA Espora, ARA Spiro, ARA Parker y ARA Rosales, de la clase MEKO 140.

El gobierno de Alfonsín modificó la política previa existente en materia de construcciones de buques de guerra y comerciales, quedando los astilleros de AFNE casi inactivos, con la seria afectación de mano de obra especializada.

-Astilleros Manuel Domecq García S.A.

Este astillero fue concebido para el propósito de fabricar los submarinos TR-1700 y proporcionar el servicio de mantenimiento al resto de los submarinos diesel de marinas de otros países. Desde su pasaje a la órbita al Ministerio de Defensa sufrió un progresivo desmantelamiento que anuló su capacidad como astillero. De los 4 tubos de submarinos depositados en sus talleres sólo queda uno en proceso detenido, mientras que los tres restantes fueron canibalizados como repuestos de los submarinos en servicio.

-Taller Aeronaval Central o Taller Aeronaval Espora

En él se realizaba el 4to Escalón de Mantenimiento y Servicio Autorizado de todo el material aéreo de la ARA . El masivo éxodo de ingenieros, capataces y técnicos especializados en reparación de turbinas aéreas y navales provocado por los bajos sueldos, le ha hecho perder la finalidad principal que tenía como taller central.

- **Fuerza Aérea Argentina (FAA)**

La Fuerza Aérea argentina desarrolló su capacidad de mantenimiento y de producción aeronáutica en base a dos talleres regionales (Quilmes, en la provincia de Buenos Aires y Río Cuarto, en la provincia de Córdoba) sumados al Área Material Córdoba donde, además de producir aviones, se fabricaron motores alternativos, armamento (misiles, cohetes y bombas), paracaídas e instrumental.

La Fábrica Militar de Aviones Córdoba (1927) se constituyó en el embrión industrial del interior del país y fue la mejor escuela industrial a través de muchos años, donde se formaron ingenieros, técnicos y operarios especializados. Durante setenta años en sus plantas se produjeron en serie ocho aviones bajo licencia (desde el AVRO GOSPORT 504 {1928} al DOUGLAS A-4AR {1999}, pasando por el MENTOR B-45, que aun es de dotación de la Escuela de Aviación, tras cincuenta años de ser utilizado como entrenador básico).

En el mismo período de sus talleres salieron treinta y seis sistemas de armas entre prototipos y de producción en serie, que integraron la dotación de la Fuerza Aérea. Entre los prototipos se destacaron el PULQUI I (1947), el ÑANCÚ (1948) y el PULQUI II (1950), de avanzada tecnología para la época. Los dos últimos desarrollos fueron el IAe 58 PUCARA (turbohélice de reconocimiento ofensivo y apoyo directo en el campo táctico, que operó en el conflicto de Malvinas), y el IAe 63 PAMPA, desarrollado con la colaboración de la industria alemana (adiestramiento avanzado y ataque).

La reducción presupuestaria operada sobre las Fuerzas Armadas a partir de 1983 y la manifiesta despreocupación por la industria y actividad aérea, trajo como resultado que buena parte de esa capacidad industrial haya quedado definitivamente en el pasado, restando sólo la capacidad de mantenimiento mayor.

Los embates contra la estructura aeronáutica continuaron en forma sistemática, llevando al polo industrial hasta casi su paralización, hecho éste que sirvió para justificar la privatización del Área Material, por parte del gobierno de Menem, el 15 de diciembre de 1994, que terminó con el Estado subsidiando a una empresa extranjera, que no aportó trabajo ni tecnología. Las motivaciones del desmantelamiento de la industria aeronáutica se ven con más claridad si se repara en las maniobras políticas y mediáticas que se han desatado durante los últimos veinticinco años y que dieron como resultado la desvinculación total de la Fuerza Aérea con el control del tráfico aeroespacial, del Servicio Meteorológico Nacional y de la Administración Nacional de Aeronavegabilidad, entre otros, afectando seriamente la seguridad aérea.

-Programa misilístico “Cóndor”

En las postrimerías de la década de los setenta comenzó el proyecto y desarrollo de un misil balístico de mediano alcance (MRBM) a cargo de la Fuerza Aérea, proyecto realmente ambicioso que fue evolucionando con la colaboración de varias empresas. entre ellas la MBB alemana y subsidiarias. La gran

formación técnica de los científicos argentinos, permitió avanzar rápidamente en la tecnología del combustible sólido, los motores y el sistema de guiado.

El “Cóndor I” estuvo destinado a la investigación atmosférica, con un apogeo de 300 km. y una carga útil de aproximadamente de 500 kgs. Los ensayos estáticos se realizaron a mediados de 1983 y el primer lanzamiento estaba previsto a fines de 1985, cosa que nunca se realizó. Su sucesor el “Cóndor II” era capaz de llevar una ojiva de media tonelada a más de 1000 km., cuyo bajo costo comparado con sus competidores no sólo favorecía su producción, sino que permitía vislumbrar la posibilidad de un buen mercado. Estos proyectos nacieron impulsados por la idea de lanzar satélites y ponerlos en órbitas de baja altura, sin contar con ayuda externa.

Terminado apresuradamente el gobierno de Alfonsín, el nuevo gobierno de Menem pareció en un principio estar de acuerdo con el proyecto pero posteriormente cedió a las presiones que se ejercían y ordenó la cancelación del proyecto aduciendo inicialmente razones presupuestarias, para terminar dando como causa las imposiciones internacionales (EEUU).

Gran parte del material y equipo para el desarrollo de los cohetes fue desmantelado y enviado a los EE.UU. para su destrucción en el año 1993. Paralelamente, todo lo que estaba relacionado con la investigación y desarrollo pasó a una nueva organización gubernamental civil, quitándole la responsabilidad a la Fuerza Aérea.

- Radarización y narcotráfico

Con el vertiginoso desarrollo de la aviación en general y de la comercial en particular, la Fuerza Aérea fue impulsando a lo largo de los años diferentes planes tendientes a lograr la vigilancia y control integral del aerospacio, los cuales no llegaron a materializarse por diversas razones. Así nacieron: el “Sistema Integrado de Control del Espacio Aéreo” (SICEA) en los años 70 y 80; el “Plan Nacional de Radarización” en los años 90 (aprobado por Decreto 145/96) y actualmente el llamado “Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial” (SINVICA) que lo remplazó. Este último prevé incorporar cuatro radares militares en forma escalonada a partir del año 2009/2010. Esta decisión, aún no cumplida, se está tomando 40 años después de la última adquisición de radares militares, en la década del 70.

Sólo el 11% de nuestro territorio se encuentra bajo control radar, limitándose ello a radares para control de tránsito aéreo instalados en los aeropuertos de Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y un radar secundario en Paraná. Desde hace mas de 15 años el Estado nacional no ha incorporado ningún radar para ir completando la red de control de tránsito aéreo que es casi inexistente. Es evidente que ello se debe a una falta de decisión política vinculada con aspectos de corrupción administrativa en un negocio de casi 2.000 millones de dólares (materiales, equipos y mantenimiento) y favorece especialmente las actividades de contrabando y narcotráfico que se desarrollan preponderantemente en las fronteras norte del país.

La diversidad y la gravedad de los trastornos que se ori-

ginan en la sociedad argentina a partir del ingreso de estupefacentes al territorio nacional vía aérea y de la amenaza permanente del terrorismo, debería ser motivo suficiente para justificar la asignación de partidas presupuestarias que permitieran la inmediata adquisición de equipos y radares que posibilitaran un adecuado y completo control del espacio aéreo nacional.

Otro problema no menor, en cuanto el control de espacio aéreo, es que nuestra Fuerza Aérea no está legalmente autorizada a derribar aviones civiles en vuelo ilegal.

4. Ataque a los cuarteles de La Tablada durante el gobierno de Alfonsín

Enrique Gorriarán Merlo, integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de nuestro país, fue asesor militar del Foro de San Pablo -a partir de su creación- en su calidad de “comandante” del ejército nicaragüense, grado al que había accedido por su apoyo militar y participación en la revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que incluyó la planificación, dirección y ejecución del asesinato en Paraguay (Sep. 1980) del ex presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, por encargo del gobierno revolucionario nicaragüense.

Gorriarán había sido creador en 1986, en Managua, del Movimiento Todos por la Patria (MTP) para actuar en la Argentina, junto al actual Secretario de DD.HH. de Argentina, Eduardo Luis Duhalde, y otros militantes del ERP, mon-

toneros, sacerdotes de izquierda radicalizada y miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En enero de 1989, durante el gobierno de Alfonsín, el MTP conducido por Gorriarán Merlo, atacó en nuestro país al Regimiento 3 de Infantería Mecanizada y al Escuadrón de Caballería blindado 10, ubicados en los cuarteles de La Tablada (Provincia de Buenos Aires), los cuales fueron recuperados por el Ejército Argentino después de una cruenta batalla de dos días que dejó un saldo de 39 muertos. Las razones y responsabilidades del hecho fueron confusas. El gobierno no investigó adecuadamente la participación de funcionarios de la juventud radical cercanos al Presidente, que tenían relación con el terrorista Gorriarán.

Veinte terroristas sobrevivientes del ataque fueron prisioneros y encarcelados, otros escaparon. Juzgados los primeros, tuvieron importantes condenas entre 10 años y prisión perpetua. Once años después, el presidente Dr. Fernando de la Rúa les conmutó las penas y salieron en libertad, con excepción de Gorriarán Merlo, que recién seis años después del hecho había sido capturado en México, traído al país, juzgado, y condenado a cadena perpetua. En el 2002, Gorriarán fue finalmente indultado por el gobierno de Eduardo Duhalde (homónimo del anterior). Las Madres de Plaza de Mayo y otros integrantes del Foro de San Pablo impulsaron esta liberación (Ver en Google “Nuestra_historia_70” Boletines 146 a 154).

Tiempo después de salir de prisión, Gorriarán formó una nueva agrupación política (PTD) que se adhirió al Foro de San Pablo, algunos de cuyos integrantes enviaron sus adhesiones al partido creado. En el año 2006, murió por enfermedad, estando en libertad. Contrariamente, en la Argentina, hoy están en prisión más de 400 oficiales y suboficiales de las FF.AA., además de miembros de las Fuerzas de Seguridad y policiales, como consecuencia de la guerra contra el terrorismo de los años 70. No hay ningún terrorista preso.

El año 1989 marca el fin adelantado del gobierno radical “estatista” de Alfonsín

En los primeros meses de 1989 se incrementó el desprestigio de la administración radical que no pudo, o no supo, contener el problema inflacionario y cuya gestión llevó a un descontrol tal de las variables económicas, que condujeron a una hiperinflación (se llegó al 4.923 % anual) con el consiguiente descontento social que produjo -especialmente en los grandes centros urbanos- desmanes tales que provocaron 15 muertos y docenas de heridos, todo lo cual obligó al gobierno a entregar el poder anticipadamente.

El 12 de junio el presidente Alfonsín renunció y transfirió el mandato 6 meses antes, al candidato vencedor de las elecciones efectuadas el 14 de mayo, doctor Carlos Saúl Menem, del Partido Justicialista, quien asumió el 8 de julio de ese año.

5. Creación del Foro de San Pablo. Se continúa con el debilitamiento de las FF.AA.

Como ya se indicó, en el año 1990 se creó el Foro de San Pablo (FSP) con los objetivos que se expresan en el comienzo de este documento.

Meses antes, como dijimos, había accedido a la presidencia el Dr. Carlos Saúl Menem, del Partido Justicialista, al que podemos caracterizar como un caso atípico, ya que fue un peronista liberal en lo económico (que logró superar la inflación y estabilizar los precios durante 10 años) cuyos dos períodos de gobierno estuvieron signados por la privatización de la mayoría de las empresas en poder del Estado, que eran muchas.

Su gestión en relación con las FF.AA. y la Defensa Nacional se caracteriza por acciones contradictorias a saber.

- Interés en pacificar el país mediante una serie de indultos, facultad que le otorgaba la Constitución Nacional en su carácter de Presidente. Con tal medida liberó o exoneró a:

- Los terroristas que aún quedaban acusados en diversos procesos y que se encontraban prófugos, detenidos o encarcelados.

- Los altos jefes militares no alcanzados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

- Todo el personal militar sumariado y personas civiles que intervinieron en los motines de Semana Santa (1987), Monte Caseros (1987), y Villa Martelli

(1988), por delitos contra la disciplina,

-Los integrantes de la Junta Militar procesados por la guerra de Malvinas.

- En marzo de 1998, con su impulso, el Congreso de la Nación sancionó la ley 24.952 por la que se derogaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y la de Extinción de Acciones Penales.
- Promovió en el Congreso Nacional el dictado de leyes que beneficiaron económicamente a los detenidos por tribunales militares (con \$ 74,66 por día de detención) y a los familiares de los muertos y desaparecidos (con US\$ 225.000), no otorgando similar beneficio con las víctimas a manos de los terroristas subversivos.
- Mantuvo el presupuesto de las FF.AA. en un nivel muy bajo, afectando como su antecesor la reposición de materiales, el mantenimiento y el adiestramiento del personal.
- Destruyó la capacidad de desarrollo tecnológico y de fabricación de los materiales para la defensa, por medio de las liquidaciones de las empresas mixtas o del Estado que no eran rentables.
- No dictó las leyes complementarias ordenadas en la Ley de Defensa que hubieran facilitado el planeamiento operacional y logístico desde tiempos de paz.
- Dejó sin efecto el Servicio Militar Obligatorio que, además de preparar reservas instruidas, era una necesidad social de un país en vías de desarrollo (conocimiento del estado sanitario, el completamiento de la alfabetización y la integración social de jóvenes provenientes de distintos

ámbitos geográficos, culturales y económicos) por la necesidad política de obtener beneficios electorales. El nuevo sistema de voluntariado no dispone de los recursos financieros necesarios para adquirir los materiales y equipos y disponer de la cantidad de recursos humanos necesarios a efectos de poder funcionar con eficacia y cumplir con las exigencias de la defensa de nuestra soberanía y de nuestros recursos. La notable disminución de efectivos, en especial de soldados, llevó aparejado el cierre de unidades o la inactivación de las mismas sobre la base de reestructuraciones cuya intención real ha sido debilitar la capacidad de las FF.AA.

- Designó funcionarios de 2da y 3ra línea del gobierno a ex militantes de la organización terrorista subversiva Montoneros. Entre ellos, ocuparon el cargo de Subs-cretaria de DD.HH., dependiente del Ministerio de Justicia, lugar clave para los fines aviesos del uso discriminado de los DD.HH. y la política contra las FF.AA.

- La desmalvinización continuó durante la década del 90 a través de todos los medios de comunicación social (la prensa oral y escrita, cine y televisión), alcanzando su difusión con carácter negativo hasta las escuelas. Dirigida a un público crédulo, ignorante de la realidad histórica y al margen de los errores políticos y estratégicos militares, lo grave es que el tema presentaba un peligroso mensaje pacifista que ponía de manifiesto su intención de destruir los valores patrióticos que son el basamento de nuestra Nación.

En Marzo de 1992 se produjo en Buenos Aires un atentado terrorista que destruyó íntegramente la Embajada de Israel, con un saldo de 29 muertos y numerosos heridos. La investigación judicial no llegó a buen fin y el hecho se mantiene impune hasta el día de hoy. Dos años después corrió la misma suerte la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) con el trágico saldo de 86 víctimas fatales y más de un centenar de heridos. En esta ocasión se puso de manifiesto lo absurdo de nuestra legislación en la materia, al impedirse a las Fuerzas Armadas Argentinas (leyes de Defensa y Seguridad Interior) investigar el atentado, mientras se autorizaba a una unidad del Ejército Israelí (Sahal) participar en la remoción de escombros y tareas de inteligencia. Simultáneamente se infería un agravio a nuestra soberanía, ya que se trataba de un atentado sufrido por una organización civil ocurrido en territorio argentino.

De nada valieron las pobres investigaciones judiciales, la demora y anomalías en los trámites, se fortalecieron las versiones que dieron pie a la creencia de que el gobierno de Menem habría preferido que no se investigara a fondo, para no echar luz sobre la fabricación y venta de armas. Tal versión volvió a cobrar fuerza tras el descubrimiento del contrabando de armas a Croacia y Ecuador, que concluyó con la explosión de la Fábrica de Río III donde se había acondicionado parte del armamento (Nov. 1995). Con este hecho de carácter netamente delictivo en lo político y comercial se volvió a involucrar a personal de las FF.AA.

A mediados de 1995, a raíz del escándalo generado por una presentación televisiva de Adolfo Scilingo (un ex marino

dado de baja por diversos delitos comunes que se asoció económicamente con el periodista montonero -presidente del CELS- Horacio Verbitsky, para escribir un libro sobre la eliminación de subversivos terroristas que luego tituló: “El vuelo”), los tres jefes de Estado Mayor de las FF.AA. habían acordado con el Ministro de Defensa, Oscar Camilión, la conveniencia de realizar una presentación en conjunto a efectos de hacer públicas expresiones relacionadas con la guerra contra la subversión terrorista. Sin embargo, una denuncia en un canal de TV efectuada por un suboficial de los servicios (de especialidad zapatero) contra quienes fueron sus superiores en Campo de Mayo, relativa a derechos humanos, fue la justificación del Jefe de estado Mayor del Ejército, el teniente general Balza, para presentarse sólo e imprevistamente en un programa televisivo de alto rating para realizar en nombre de esa institución un “mea culpa” por los métodos ilegítimos utilizados en la lucha, expresando que no existían listas de desaparecidos, haciendo hincapié, como si fueran novedades, una serie de consideraciones sobre la obediencia que siempre existieron en las normas militares. Esta presentación y su contenido no fue bien visto por el personal subordinado en actividad, ni por los retirados, ya que todos esperaban una defensa de los subordinados que cumplieron órdenes.

Aunque estas declaraciones tuvieron gran repercusión en la opinión pública, no obtuvieron su contrapartida por parte de los terroristas subversivos, ni tampoco de los políticos que tuvieron responsabilidad en los sucesos que teñirían de

sangre la República en la década del 70, por acción u omisión.

Durante varios años, a partir de los indultos del Presidente Menem y hasta el final del 2002, si bien la campaña contra los militares por los DD.HH. disminuyó notablemente, algunos jueces declararon en el 2001 la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y con ello el nuevo intento de las ONGs izquierdistas de reiniciar los juicios por los DD.HH. (de los terroristas). El desmantelamiento de las Fuerzas Armadas continuó tal como se ha expresado: la falta de presupuesto, la desaparición de la industria para la Defensa, la disminución de efectivos por la desaparición del Servicio Militar Obligatorio, la campaña de desprestigio de los cuadros, etc.

Entre el año 2000 y el 2003, durante los gobiernos de De la Rúa y Duhalde, ejerció la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército el general Ricardo Brinzoni. Durante su gestión se observaron importantes cambios que lo distinguieron de su predecesor, el general Balza.

Hubo una decidida acción de respaldo y apoyo a los oficiales cuestionados por las organizaciones de derechos humanos y una acción institucional que reivindicó justificadamente el accionar del Ejército (y las otras fuerzas) durante la guerra contrarrevolucionaria y rindió homenajes permanentes a los caídos en ella, evocando las acciones de combate más importantes. Tal acción se complementó con una permanente apelación a la reconciliación nacional, buscando cerrar heridas, olvidar rencores inconducentes y terminar con la persecución vindicativa de los terroristas enquistados en sec-

tores de la vida democrática, en las ONGs izquierdistas que defienden “sus derechos humanos”, y en alguna prensa claramente definida como de izquierda y apologista del terrorismo marxista o genuflexa.

Esto le costó al general Brinzoni críticas permanentes de la izquierda, en especial del periodista y terrorista montonero Horacio Verbitsky, a través del periódico "Página 12". Incluso se intentó comprometerlo y acusarlo de hechos acaecidos durante la guerra, sin fundamentos sólidos o pruebas fehacientes. Al asumir Kirchner la Presidencia lo reemplazó por un general que compartía su política de DDHH.

6. La persecución se reinicia en el ámbito del personal y se agrava

En el año 2003, luego de una crisis económica social de gran envergadura y una situación política inestable y por momentos anárquica, ocurrió que, en el lapso de apenas un mes (Dic. 2001 a Ene. 2002), hubo cinco presidentes constitucionales. Se efectuaron nuevas elecciones, cuyo desenlace quedó inicialmente abierto debido a que debía realizarse entre los dos más votados un ballottage, por no alcanzar ninguno el porcentaje necesario para ganar. La disputa era entre Menem, quien iba por su tercer período, y Kirchner, el gobernador de una provincia casi despoblada (200.000 habitantes), pero con abundantes recursos naturales. Menem se retiró de la contienda, asumiendo entonces como presidente el Dr. Néstor Kirchner con el 25 % de los votos totales.

Los antecedentes de Kirchner sólo lo señalaban como militante de la Juventud Peronista en la Universidad, junto con su actual mujer. En el año 1976, después de recibirse de abogado, se radicó en Santa Cruz, su tierra natal, para dedicarse la actividad profesional y comercial. A fines de la década del 80 se desempeñó como intendente de la ciudad de Río Gallegos, capital de esa provincia, donde en la década del 90 fue dos veces gobernador por el Partido Justicialista y estuvo muy identificado con el presidente Menem. Jamás había realizado ningún acto o acción a favor de los DD.HH. y, por el contrario, había sido criticado por su falta de apoyo a esas ONGs. Su relación con las unidades militares de la zona pueden calificarse de normales.

Sin embargo, en cuanto asumió la presidencia adoptó una actitud confrontativa y agresiva hacia las FF.AA., utilizando una estrategia de DD.HH. para que la izquierda activa no perturbara su acción de gobierno, dándole como prebendas, además de cargos y dinero, todas las facilidades para iniciar una enorme campaña contra las FF.AA. mediante las ONGs de DD.HH. (de los terroristas) liderada por “las Madres de Plaza de Mayo”, de Hebe de Bonafini, una radicalizada izquierdista que dirige una pseudo universidad “del odio” (con programas para hacer la revolución marxista-leninista), y que actualmente gerencia una “empresa de construcciones” solventada por el Estado. Otro personaje destacado en su relación con el gobierno es la maestra Estela Carlotto, presidenta de las “Abuelas de Plaza de Mayo” (quien nunca pudo demostrar que fue abuela), que tiene “su negocio político” en la recuperación de menores,

hijos de desaparecidos, y que ubicó a sus dos hijos en cargos de diputados o secretarios de Estado de la provincia de Buenos Aires.

En el gobierno de los Kirchner -ya que la mujer sucedió a su marido en la presidencia de la Nación- los terroristas fueron premiados con cargos de primer nivel, como ministros, secretarios de Estado, asesores de gobierno, gobernadores, directores de reparticiones públicas, jueces, etc. Desde sus altas posiciones, constituyen un equipo homogéneo en cuanto las actividades de destrucción de las FF.AA., tanto del personal que actuó en la guerra contrarrevolucionaria como en los valores permanentes de esas instituciones y sus tradiciones.

En los primeros años de gobierno hubo un ataque a fondo para anular las “leyes de Punto Final y Obediencia Debida”, y así juzgar nuevamente a la mayor cantidad de integrantes de las fuerzas legales, cosa que lograron anticonstitucionalmente por medio de un parlamento convertido en una “escribanía del gobierno”. En agosto de 2003, el Poder Legislativo, impulsado por el Ejecutivo, resolvió dictar la ley 25.779, por la cual se declaran insanablemente nulas las Leyes 23.492 y 23.521 (derogadas por Menem en 1998) alegando que se trataron de delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, inamnistiables e inindultables. El Congreso de la Nación, arrogándose facultades que no posee, declaró la nulidad de esas leyes que habían sido promulgadas por un gobierno constitucional y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ese entonces, en más de 10 oportunidades. La actual Corte Suprema incurrió en un exceso mayor pues

aplicó retroactivamente la ley de nulidad basándose en una fuente extranjera, para juzgar una guerra interna.

A partir de allí y mediante un poder judicial en muchos casos genuflexo e intimidado -y, en otros, ideológicamente afín- se reinició la persecución política por medios jurídicos y judiciales, aprovechando que habían quedado sin efecto por las leyes que ponían punto final a los conflictos del pasado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sintonía con el gobierno nacional y contra lo expresado por la Corte Penal Internacional en sus fallos y también en su estatuto (al cual estamos adheridos), estableció que los “crímenes” cometidos por las FF.AA. tenían carácter “imprescriptible”. Contrariamente, los crímenes de los terroristas fueron considerados “delitos comunes” y, en función al tiempo transcurrido, ha operado su prescripción sin posibilidad de acción legal contra ellos. Así se contradice el Estatuto de Roma (de aplicación obligatoria a partir de su aprobación como ley interna por el Congreso Nacional) que claramente norma que los “grupos civiles no estatales”, al cometer delitos aberrantes deben también ser considerados por los Tribunales como incursos en delitos de lesa humanidad

Con respecto a los veteranos de Malvinas, si bien ya lograron una pensión, la campaña de desprestigio sigue dirigida contra los cuadros de las FF.AA., con artículos escritos e incluso con películas donde muestran a los oficiales como despóticos y cobardes, que mientras los soldados estaban en pozos en el terreno y mal alimentados, ellos disponían de “privilegios alimentarios” y de comodidades físicas, aspectos total-

mente falsos de falsedad absoluta (el autor de uno de los guiones fue un ex soldado que, según sus propios compañeros, había demostrado una conducta miedosa y poco solidaria durante su estadía en las islas). Otra acción que realizan es iniciar juicio por torturas (delitos de lesa humanidad) a oficiales que sancionaron a algún soldado indisciplinado con el “calabozo de campaña” establecido en los reglamentos militares para estos casos.

En total conocimiento que las FF.AA. actuaron “institucionalmente” durante el desarrollo de la guerra revolucionaria -salvo algún grupo minúsculo- y compenetradas con su misión de “aniquilar al terrorismo subversivo”, de acuerdo con decretos emanados de la Presidente constitucional, los sucesivos gobiernos posteriores al proceso militar han adoptado políticas alternativas para atacarlas y disminuirlas:

- Persecución jurídica y judicial, sin tregua y sin límites legales, a aquellos militares cuya actividad antiterrorista era pública y manifiesta, de acuerdo con el destino y función que cumplían.
- Persecución económica al restante personal retirado, al que se le ha recortado el sueldo en el 63% (siempre fue aproximadamente el 18%) respecto al haber de los activos mediante arbitrios ilegales que generan juicios interminables. Como resultado, han logrado una progresiva pauperización del personal en situación de retiro que tiene consecuente repercusión en las familias militares. Esta medida tiene también un efecto intimidatorio sobre los militares en servicio activo, ya que los disuade de dis-

entir con las políticas de Defensa implementadas por el gobierno, so riesgo de pasar a retiro en forma inmediata y así engrosar el sector de los “desposeídos” .

El CELS, herramienta estratégica para dominar la política de personal de las FF.AA.

No podemos dejar de referirnos al CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) cuyo actual presidente es el terrorista montonero Horacio Verbitsky ⁶.

Esta organización fue creada el 12 de abril de 1980 -tres años antes que entregara el poder el gobierno militar- por iniciativa del doctor Emilio F. Mignone ⁷, quien fue su primer presidente, acompañado por Augusto Conte Mc Donell (tenían hijos “desaparecidos”). En el Acta fundacional se dejó constancia que su finalidad principal era intervenir dentro y fuera del país en todo lo atinente al tema de los DD.HH. Sus objetivos eran políticos y partiendo de la recepción y selección de denuncias pensaban llegar a involucrar a miembros de las FF.AA., de seguridad y policiales, mediante una acusación penal. Conociendo esta finalidad entendemos que el CELS nació como defensor de los derechos humanos de sólo un sector, parcializados.

Este enfoque se mantuvo a través del tiempo y explica el impulso posterior que adquirió esta entidad y la forma en que se insertó en similares organismos internacionales y dirigió la tarea y la acción psicológica de las ONGs de DD.HH. (de los terroristas) en nuestro país y en el exterior. El gran salto cuali-

tativo del CELS se dio al morir Mignone y hacerse cargo de la presidencia el ya nombrado terrorista Verbitsky, quien perteneció al servicio de inteligencia de Montoneros e inexplicablemente, fue el único que sobrevivió entre los identificados que cumplían esa función. En 1989 y desde el diario izquierdista “Página 12” (hoy vocero oficial del gobierno) fundado con los dineros suministrados por el histórico terrorista Gorriarán Merlo, Verbitsky efectuaba denuncias contra un grupo de “militares que querían realizar un golpe de Estado contra el gobierno”. Curiosamente esos artículos coincidieron luego con el falso fundamento dado por Gorriarán y el MTP como causa del sangriento ataque a los cuarteles de la Tablada, al cual ya nos referimos.

La trabajada relación de Verbitsky -debido a su cargo con la OEA, le abrió numerosos contactos en cadena que convirtieron a la entidad por su desarrollo, capacidad financiera y apoyo estatal, en la más influyente de sus similares en el campo de los DD.HH., temática en la que a partir del 2003, con la política del presidente Kirchner, agrega otras ventajas decisivas para su accionar, al actuar el gobierno contra la FF.AA. e influir en los otros poderes del Estado. En cuanto a la relación con el ministerio de Defensa, se puede afirmar -aunque parezca descabellado- que el CELS, y en especial Verbitsky, es el verdadero artífice de la política de personal de las FF.AA. (Revisión de legajos de retirados y en actividad para encontrar indicios o evidencias que le sirvan para tomar medidas administrativas y judiciales contra esos cuadros en relación a la guerra contra la subversión terrorista e incluso de los ideológicamente contra-

rios al gobierno).

A través del tiempo el CELS ha logrado un importante apoyo de fundaciones nacionales e internacionales. Entre ellas: AMNESTY Suenska Fonden (Suecia), AVINA (Buenos Aires), Centro de Estudios de Justicia de las Américas-CEJA, Coalición por la Corte Penal Internacional (Estados Unidos), Fundación FORD (Estados Unidos), Foreign and Commonwealth Office (Gran Bretaña) y British Embassy (Buenos Aires), Fondo de Contribuciones Voluntarias para Víctimas de la Tortura de Naciones Unidas (Suiza), International Human Rights Internship Program-IHRIP (Estados Unidos), Kellogg Foundation (Estados Unidos), The John Merck Fund (Estados Unidos), The Tinker Foundation (Estados Unidos), Embajada de Holanda, a las que debemos agregar unas 25 organizaciones más.

La enorme capacidad financiera que dispone el CELS le permite enviar delegados a varios países de Latinoamérica para intercambiar información y experiencias sobre la forma de crear un nuevo derecho con el que se pueda juzgar al personal militar, ayudados por el poder político, para presionar a los jueces (ataque jurídico y judicial) a efectos de ir logrando lo que hicieron y hacen en Argentina. Posee importantes contactos favorables en la Comisión Interamericana de los DD.HH., la Comisión de DD.HH. de la ONU y el Secretariado Internacional de Amnesty Internacional. El CELS ha sido aceptado como filial de la “Internacional League for Human Rights” y por tal motivo tiene facilitada su participación internacional, donde gravita con sus trabajos e informes.

Sobre el tema relacionado con el “control civil de las

Fuerzas Armadas”, el CELS tiene seis documentos publicados que pueden ser observados y descargados su sitio de Internet.

Por otra parte debe considerarse al CELS como el ente “cipayo” del “Diálogo Interamericano” (<http://www.thedialogue.org>), “centro estadounidense de análisis político, comunicación e intercambio sobre temas de interés para el Hemisferio Occidental. El Diálogo Interamericano reúne a importantes actores de los sectores público y privado de todo el continente con el propósito de tratar las problemáticas y coyunturas hemisféricas de mayor trascendencia”. En realidad es el organismo que establece las grandes líneas que el proyecto internacionalista tiene en vista en nuestro subcontinente.⁸

7. Consideraciones finales

En nuestro país, la situación de desprestigio de las FF.AA. y la animosidad de los gobiernos contra su desarrollo y su reconocimiento por parte de la sociedad, es anterior a la creación del Foro de San Pablo, ya que se inicia en 1983 como consecuencia de dos factores locales:

El primero, de carácter político, que tiene que ver con la injerencia institucional que desde 1930 -y a requerimiento de la oposición política que usufructuó los beneficios- tuvieron las FF.AA. en la política nacional (golpes de Estado y consecuentes gobiernos de facto, desplazando a los partidos políticos en el poder). Es de suyo que la intervención de los Ejércitos en la política en Argentina fue similar en aquellos años al resto de América Latina, con la particularidad que esa intervención en

todos los casos, si bien fueron encabezados por militares, la masa de funcionarios de tales gobiernos pertenecieron a los distintos partidos políticos, incluyendo a los del gobierno depuesto. Al volver los gobiernos constitucionales, esos políticos en muchos casos minimizaron esa participación y su apoyo a los gobiernos de facto e incluso lo denostaron como una forma de desvincularse de ese pasado. Otra consideración importante, es conocer que el Poder Judicial, en todos los casos, continuó ejerciendo su ministerio. Más aún, muchos de los jueces que juzgaron a los militares cuando éstos dejaron el poder en 1983, habían jurado previamente sobre los Estatutos Revolucionarios de los militares.

El segundo, de carácter preponderantemente ideológico, y como consecuencia de las secuelas de la guerra revolucionaria que dejó muchos muertos y miles de desaparecidos con la victoria militar de las FF.AA. A partir de entonces, la estrategia de desgaste y aniquilación de las fuerzas legales la hacen las ONGs de DD.HH. (de los terroristas), en connivencia con los gobiernos y apoyados por los partidos o agrupaciones políticas de izquierda.

Consecuentemente los actores de ambos factores tenían como objetivo común el debilitamiento político, la destrucción de su capacidad militar y/o la modificación ideológica de las FF.AA., a efectos de cooptarlas y lograr apoyo a sus fines políticos e ideológicos.

La derrota militar en la guerra de Malvinas, a pesar del inmenso apoyo popular que tuviera luego de tomar las islas sin derramar sangre de los ingleses ni de la población civil, cambió

ese apoyo por críticas al “descabellado intento de ganarle a los ingleses con la OTAN apoyándolos” que rápidamente fueron capitalizadas por la izquierda de los DD.HH. para desprestigiar aún más a las Fuerzas Armadas de la Nación.

Desde 1983 el país vivió en democracia sin participación alguna de las FF.AA. en el poder político, sucediéndose como presidentes: Dr. Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical); Dr. Carlos Saúl Menem (Justicialista), durante 2 períodos; Dr. Fernando de la Rúa (Alianza), Ramón Puerta (Justicialista), Dr. Alberto Rodríguez Saá (Justicialista), Eduardo Camaño (Justicialista) y Dr. Eduardo Duhalde (Justicialista). Los cuatro últimos surgidos luego de la renuncia de De la Rúa, a raíz de un cuasi golpe de Estado civil y sin participación militar alguna, y por último el Dr. Néstor Kirchner (Frente para la Victoria) y Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), esposa del anterior. Durante ese lapso se produjo una alternancia de los principales partidos políticos y el Congreso Nacional funcionó plenamente. Sin embargo, la política seguida con las Fuerzas Armadas -con diferentes matices- fue similar: ataque político, persecución jurídica y judicial, desarticulación, achicamiento, desprestigio e incapacitación de las mismas para operar como fuerza armada.

Si bien las FF.AA. destruyeron el aparato armado de las organizaciones terroristas subversivas y ganaron la batalla, los elementos residuales de esa subversión junto al oportunismo de los políticos de turno continuaron “la guerra por otros medios” y en lugar de la aplicación de los Derechos Humanos tal como

lo indica su esencia, los aplicaron unilateralmente como estrategia política y venganza contra las fuerzas legales, alcanzando el poder con el matrimonio Kirchner.

El “Juicio a las Juntas Militares”, constituyó un verdadero hito histórico en cuanto alteró el real desenlace de la Guerra Revolucionaria desatada en nuestro país, al sentar en el banquillo de los acusados a quienes la habían ganado en defensa del Estado y sus instituciones, sustrayéndolos de sus jueces naturales, juzgándolos mediante una “Comisión Especial” y leyes posteriores a la comisión de los hechos (situación prohibida por el Art. 18 de nuestra Constitución) y aplicándoles el Derecho Penal Ordinario en lugar del Derecho Militar.

Pese a que los comandantes asumieron la responsabilidad por las órdenes impartidas por el gobierno constitucional, en pleno uso de sus facultades, de aniquilar a la subversión, se hizo caso omiso de ello y se juzgó a los subalternos que habían cumplido las órdenes. Ello tuvo como consecuencia el descreimiento del cumplimiento de órdenes impartidas por superiores que disponían de poder legal para hacerlo. Tal situación traerá aparejado -en el futuro- que se pueda analizar una orden impartida por un superior legalmente autorizado para ello y cumplirla o no según su criterio o interés. Con ello se está cuestionando el comando y puede tener nefastas consecuencias en época de conflictos armados, ya que el subalterno tiene obligación de cumplir una orden del servicio y el responsable -si la cumplió reglamentariamente- es su superior. No hacerlo así, vulnera la disciplina y no puede ser aceptado por

ningún ejército del mundo a riesgo de anarquizarse.

Es evidente que el iniciador y responsable de la situación que tienen hoy (30 años después) los miembros de las FF.AA. y las otras fuerzas subordinadas (hay más de 400 detenidos y muchos más esperando proceso, y ningún terrorista en similar situación) fue el gobierno socialista del Dr. Raúl Alfonsín, que fue incapaz de pacificar el país después de la guerra interna. Él sabía que no se debía judicializar una guerra, ni juzgar con el código penal, en lugar del código militar vigente y leyes de guerra. Mucho menos, hacerlo inequitativamente, perjudicando a una sola de las partes que se enfrentaron: las fuerzas legales que defendieron las instituciones del Estado Nacional.

La Ley de Defensa promulgada por Alfonsín, al no considerar las nuevas amenazas (narcotráfico, terrorismo, radicalismo religioso, lavado de dinero y amenazas a los recursos naturales), pone en peligro nuestra sociedad que puede desintegrarse desde adentro, y deja al Estado inerme ante la toma del poder por medios no lícitos o el ataque a la soberanía y recursos de la Nación por una potencia extranjera.

En la década del 90, a partir de la creación del Foro de San Pablo, muchos de sus adeptos y simpatizantes en nuestro país, subidos en la ola izquierdista del “progresismo”, se infiltraron en los distintos poderes del Estado, en los medios de comunicación social y ya controlan ciertos resortes de la educación y la cultura, con la intención de modificar los valores que tenía la población, mayormente cristiana y católica, utilizando también “los servicios de la corrupción y el narcotrá-

fico”, verdaderos ganadores del debilitamiento material y moral de la sociedad argentina.

A partir de 2003 se hizo cargo un gobierno integrado en gran parte por ex terroristas con todas las características ideológicas (marxistas) de antaño vigentes, que están avanzando para dar el golpe final por medios jurídicos, judiciales y económicos a las “viejas FF.AA.” con la intención de hacerse del poder por muchos años. Este gobierno tiene como política de Estado apoyar la llamada “Memoria, Verdad y Justicia”, mediante recursos políticos, económicos y financieros, entregados a las ONGs de DD.HH. y otras organizaciones de izquierda, que les sirven como cortinas de humo para sus intereses particulares y acciones de corrupción, beneficiando notablemente a las actividades de narcotráfico y lavado de dinero .

La estrategia de este gobierno afín con el terrorismo, se ha basado en las siguientes premisas para accionar en desmedro de las FF.AA.:

- Defender la teoría de que no hubo guerra, sino “terrorismo de estado” y víctimas. Tratar de instalar por medio de la Corte Suprema la jurisprudencia necesaria para juzgar a todos los integrantes de las FF.AA. y fuerzas subordinadas que intervinieron en la lucha contra el terrorismo, a pesar del tiempo, de haber sido juzgados e incluso indultados por el Poder Ejecutivo Nacional (como crímenes de lesa humanidad no prescriptibles).
- Consecuentemente, continuar con la campaña de desprestigio del “viejo ejército” (los que combatieron a los

subversivos-terroristas) mediante los medios de comunicación social, a la vez que reivindicar históricamente a la agresión terrorista como una gesta heroica. Se está produciendo una situación de “cooptación”, que es la coacción para pensar en la dirección que impone el gobierno y su sector ideológico afín.

- Para éste y otros fines, obtener e incrementar el dominio de la información pública mediante presión política y medidas de índole económica a nivel de empresas de prensa escrita, oral y televisada y periodistas calificados .
- Incrementar la presión sobre los elementos de la Justicia en el corto plazo para apresurar los procesos judiciales y cambiar los jueces que “molesten ideológicamente” con distintas excusas .
- Utilizar al Poder Legislativo y a los gobiernos de la Capital y de las provincias, así como a sus elementos componentes, en las acciones de reivindicación ya expresadas, con el objeto de ratificar la deformación de la verdad histórica a partir de la desinformación en los sistemas de educación y en la opinión pública. Utilizar la “cultura” como vehículo de la ideología dentro de la sociedad.
- Tomar medidas drásticas, inmediatas y publicitadas ampliamente, con toda persona con actuación en la guerra contra el terrorismo que se encuentre en la administración pública o que, desde un lugar en cualquier relación de dependencia con el Estado, defienda lo ocurrido en esa contienda, como una forma de introducir el

temor en la gente y que no se manifieste, imponiendo “el pensamiento único”.

- Mostrar poco respeto por las FF.AA. y sus integrantes para demostrar su poder y no perder ocasión en separar “las viejas FF.AA”. de las que abrevaron en la fuente de la democracia a partir de 1983.
- Privilegiar la lealtad personal por sobre las jerarquías en el personal en actividad de las “nuevas FF.AA.”, con la idea de ir logrando una subordinación al Poder político que pase más por el gobierno que por la Constitución Nacional.

Teniendo en cuenta que el responsable del planeamiento y coordinación en toda Latinoamérica del ataque jurídico y judicial a los integrantes de las FF.AA. es el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), presidido por el terrorista montonero Horacio Verbitsky (quien recibe apoyo financiero, entre varios otros, de la Fundación Ford de EEUU), en coordinación con la Secretaría de DD.HH. de nuestro país; consecuentemente será necesario conocer sus ideas, declaraciones o escritos, porque ellos marcarán como seguirá esta “guerra revolucionaria por otros medios”.

La Argentina, que sufrió uno de los mayores ataques de las organizaciones subversivas terroristas en las décadas pasadas y que tuvo que afrontar desde 1983 las consecuencias de no haber entendido que esta “guerra revolucionaria” -como el camaleón- podía cambiar y utilizar otra modalidad, para obtener los fines políticos deseados, en la actualidad tendría que servir

“como modelo” para aquellas FF.AA. que tienen en su patria las “larvas” de la venganza contra los militares, a efectos de evaluar, por similitud, con qué medios, cómo y por dónde vendrá el ataque a su institución. Hace poco, un funcionario que se autotitula “soldado del Presidente Kirchner” expresó públicamente en un acto: “ahora... ¡vamos por todos!”

La ascensión a la presidencia de los Kirchner (2003-2008 Néstor y a partir de esa fecha, su esposa) ha determinado que nuestro país esté fuertemente involucrado con los objetivos del Foro de San Pablo, lo que está confirmado por su alineación ideológica, comercial y financiera con Chávez, actual mayor impulsor de esa organización, y por su relación fluida con Lula, Evo Morales, Correa, el Frente Amplio de Uruguay e incluso, con Fidel Castro. En lo interno apoya de distintas maneras a varios de los asiduos concurrentes a las reuniones del Foro cuyo común denominador es su “antiimperialismo” (léase EEUU).

En nuestro país, la lucha por la verdad continúa y no cesaremos hasta que se imponga. Ya se están verificando las primeras reacciones contra la “historia oficial” y el “pensamiento único”, no sólo entre la población y algunas asociaciones de abogados independientes, sino también en algún tribunal que se ejerce realmente “el Derecho” y no la obsecuencia política ni el temor por las acusaciones del “Consejo de la Magistratura”, manejada políticamente por el actual gobierno, que puede enjuiciar a los jueces por... ¡sus sentencias!

Para cerrar este documento, creemos oportuno y conveniente transcribir las palabras de un juez subrogante de Santa

Fe que pidió ser separado de un caso por razones de “violencia moral”. Al respecto el diario La Nación del jueves 30 de abril de este año, en su página 11 dice textualmente:

Se trata de Martín Gutiérrez, un abogado que integraba el Tribunal Oral Federal de Santa Fe como subrogante. Intervenia en el caso Aebi, uno de los principales casos por crímenes de la represión en la provincia.

En su excusación alegó que se sentía coaccionado por las declaraciones amenazantes de varios funcionarios, entre ellos la presidenta Cristina Kirchner. Ellos señalaron -dijo Gutiérrez- que quienes tienen la responsabilidad de entender, como el suscripto, en los procesos en los que se investigan delitos de lesa humanidad, cuando emiten fallos que resultan contrarios a las pretensiones perseguidas por el Estado Nacional, comparten la ideología represiva, favorecen a los represores del genocidio y deben ser sometidos a jury de enjuiciamiento.

Gutiérrez cuestionó puntualmente, que la Presidenta hubiera pedido la remoción de los jueces de (la cámara) Casación que liberaron a represores que llevaban años presos sin condena. Dijo además, que no quería exponerse a ser acusado de pro genocida si fallaba a favor de algún acusado.

NOTAS

1 Líder del ala izquierda del partido Unión Cívica Radical quien, en 1972 se había desempeñado como defensor de Mario Roberto Santucho, máximo dirigente del “Ejército Revolucionario del Pueblo-ERP”, brazo ar-

mado del “Partido Revolucionario de los Trabajadores-PRT”, que había asesinado al presidente de FIAT Argentina Dr. Oberdam Sallustro. En su alegato, Alfonsín expresó: “los subversivos no son delincuentes, sino combatientes, integrantes de un ejército revolucionario del pueblo alzado en armas en rebelión abierta, en operaciones”, palabras significativas que luego serían contradichas por decretos del mismo Alfonsín al asumir la presidencia de la Nación.

2 Que en su página 460 dice: ... *“Recuerdo que en el 84 Jaime Lusinchi había ganado las elecciones en Venezuela y a su asunción viajaron funcionarios nicaragüenses. El canciller de Nicaragua era entonces Miguel D´Escoto y el vice-canciller Víctor Tinoco y ahí en Caracas, en una reunión con gente de la cancillería argentina, se interesaron por el decreto en contra nuestro y, en particular, por mi caso. La respuesta obtenida de los funcionarios argentinos fue que el gobierno no pretendía perseguirnos, sino que con ese decreto lo que en realidad buscaban era justificar el juicio a las Juntas, dando la idea de que se perseguía a todos por igual”*.

3 El “Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949” (Conflictos armados sin carácter internacional) en su Título II, Artículo 6, expresa: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan formado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de su libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”.

4 Militante del PRT-ERP, hoy subsecretario de DD.HH., y quien hace pocos meses, como delegado internacional, distorsionara la realidad en el informe efectuado por los hechos acaecidos en el Departamento de Pando, en Bolivia.

5 Las enseñanzas expresadas a continuación fueron extraídas del “Informe Rattenbach - Malvinas” - Capítulo XIV - “Aspectos institucionales” - “Las

lecciones del conflicto”.

6 *“Horacio Verbitsky, un intelectual, un periodista que lanza por la prensa buchonerías seleccionadas que amedrentan desde jueces a periodistas. Un personaje no electo -ni en listas sábanas- pero de enorme poder desde las sombras en esta gestión Kirchner y que goza hoy de la impunidad jurídica que dice combatir. Verbitsky pone y saca miembros de la Corte Suprema de Justicia; sienta a su lado en comidas y es recibido en su despacho por el presidente del más alto tribunal del país, Enrique Petracchi. Se ha cebado al extremo, en estos días, de sacar en horas de su cargo a jueces, suspenderlos y hacerles juicio político porque también domina el Consejo de la Magistratura, que preside precisamente Petracchi. Ha implantado en la Argentina la vergüenza jurídica de que los magistrados ahora pueden ser juzgados y echados por sus fallos. Todo maquinado por este personaje que en su pasado apretó detonadores de explosivos que a distancia mataron civiles inocentes para satisfacer la «prueba de sangre» (de sangre derramada) que el grupo terrorista Montoneros exigía a sus miembros como resguardo de lealtad. Titiritea la Justicia sin cargo público; frecuenta los más altos despachos del gobierno; maneja los expedientes para ascensos o descabezamientos de militares; tiene colocados hombres que le responden desde la Cancillería hasta el comando general de las Fuerzas Armadas, al extremo de que en el propio gobierno dicen que «Verbitsky tiene una SIDE paralela» por la cantidad de información que recibe de sus infiltrados en organismos públicos.”* Julio Ramos , diario *Ámbito Financiero*, 19 Ago. 2005.

7 Militante católico y Rector de la Universidad de Luján.

8 Ver libro “Verbitsky. De la Habana a la Fundación Ford”, de Carlos Manuel Acuña Ed. Del Pórtico.

4.

El desgaste axiológico de las Fuerzas Armadas en Bolivia

Es muy cierto que algunos hechos históricos signan futuros acontecimientos, pero en algunos casos esa no es la norma, como lo ocurrido con la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, que dignificó al mundo dejando a un lado la penosa confrontación ideológica mundial oriente-occidente.

Esta caída fue producto de la llamada “marcha de los 70 años hacia la nada”, como fue conocido el proceso hacia el socialismo, que empecinado en la lucha de clases y la destrucción de la Organización Político Administrativa de las naciones, buscaba levantar sobre sus cenizas el nuevo orden social mundial.

En igual forma nadie imaginaba por entonces que la llamada crisis del capitalismo global resucitara a los dinosaurios estalinistas en Latinoamérica, quienes sedientos de venganza contra sus vencedores de antaño, emprendieran la venganza de los “desposeídos”, enmascarada en un indigenismo fundamentalista y radical, con su perverso y confrontador discurso de los “500 años de opresión” de los pueblos indígenas originarios campesinos, con el pretexto de “Reivindicación”.

En Bolivia, país con significativo porcentaje de indígenas y mestizos, que se identifican con alguna de las variadas etnias que existen en su territorio, el discurso de la nueva liberación

de los excluidos “hizo carne”, desde que los ultranacionalistas libros de Fausto Reynaga y muchos otros que impactaron en la juventud deseosa de una nueva “utopía”.

Estos fundamentalistas étnicos, que habían intentado expandir el “aymaro-centrismo” mediante tendencias radicales como el Ejército Guerrillero Tupaj Katari, encontraron en el cansancio del pueblo por el fracaso de los partidos tradicionales, la oportunidad de llegar al poder mediante las urnas. Lo lograron ampliamente, haciendo expresar a su vicepresidente electo, “hemos obtenido el gobierno pero no el poder”.

En el intento de hacerse de la hegemonía política que les permita su “revolución del cambio” encontraron como óbice a la fortaleza institucional de lo establecido, considerando como principales oponentes, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, a la Contraloría, Comités Cívicos y autoridades del oriente, la Iglesia, la prensa oral y escrita, el empresariado y la clase media, y, como no podría ser de otra manera, al factor militar, poder permanente del Estado que se opone a los salvajes procesos de la “destrucción creativa” schumpeteriana, la cual preconiza que el nuevo orden debe surgir de las cenizas de lo destruido.

Se ha mencionado en reiteradas oportunidades, por boca de los portavoces del gobierno boliviano, que la democracia no les sirve; pues bien, si tienen el gobierno y no el poder, esta situación no les permite alcanzar sus objetivos por la vía democrática; por lo tanto, no pueden obtener la tan deseada hegemonía política.

Ahora bien, las normas fundamentales de existencia de las FF.AA. señalan que no pueden existir como Institución profesional si no tienen organización, disciplina, medios y concepto del Honor. No se puede entender a un conglomerado humano, juramentado ante los más sagrados símbolos de la espiritualidad de su población, si no tiene lo axiológico bien fundamentado. Saltar de sus trincheras protegidas para enfrentarse en una catarsis cívica, ante la metralla, requiere que el soldado posea una espiritualidad y una mística; requiere de una formación superior muy difícil de lograr; allí reside su fortaleza. Justamente por eso, la tarea de destrucción de la Institución comienza por golpear esos aspectos fundamentales. Pero ¿Cómo realizar esta tarea?

Se emprende inicialmente con la guerra económica contra los militares, el brutal despojo presupuestario de las FF.AA. efectuado por los gobiernos de la “democracia recuperada”, que veían a los militares como sus permanentes rivales políticos; y se completa con el “gobierno de los excluidos”, utilizando los mismos mecanismos: la eliminación de bonos; aumentos de sueldos por jerarquía invertida, es decir, “mas a los que ganan menos”; y la estocada maestra, la reducción del presupuesto del profesorado, afectando así la calidad de la educación castrense. Esta situación, sin duda, es la mas peligrosa, porque afecta la parte medular de la formación profesional, pretendiendo trastocar la esencia misma de la Institución; la mística que debe existir en todo militar.

El embozado ataque contra la Institución continúa cuestionando su razón de ser, es decir, su misión; y proponiendo el

cambio del “rol” de las FF.AA. y de su ideología militar nacionalista, a la que califican como la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual consideran represiva.

Por otra parte, se sustituye el concepto de Seguridad colectiva, por otro nuevo, basado en la creación de un “movimiento antiimperialista”, bajo la égida de la nueva “potencia” rectora: la Venezuela de Chávez, que orienta sus armas hacia el enemigo común, los EE.UU. de Norte América, arras-trando infantilmente al gobierno de Bolivia a acciones y medidas totalmente desproporcionadas.

Antaño se repetía incesantemente dentro de las células terroristas y guerrilleras “foquistas” que atacaban a las FF.AA., que debería cambiarse el rol militar porque no habían amenazas que justificasen su existencia. Surge la pregunta ¿Y el Che Guevara no era una amenaza?

Afirmando con desparpajo que cuando no existe enemigo externo, los militares se inventaban la subversión interna para justificar su vigencia; y denunciando que, con su labor represora, en contra los “justos levantamientos en armas”, las FF.AA. solo servían para apuntalar a los gobiernos legalmente constituidos.

Pero ¿Qué ocurre actualmente en los “países del cambio”? En lo concerniente a inventar enemigos ficticios, el gobierno actual es experto, puesto que periódicamente denuncia -sin presentar prueba alguna- la agresión imperialista de la CIA, los grupos terroristas de derecha y los golpes cívico-prefec-turales, los cuales han ocupado el lugar de la subversión interna. ¿Es que ahora las FF.AA. han recuperado su vigencia,

como órganos de control político y represores, pero esta vez contra la “subversión ultraderechista”?

¿Como se logra que los militares se ajusten a las exigencias del cambio? En principio, manteniendo un inteligente contacto con sus mandos, se les visita periódicamente, se hacen los esfuerzos por escucharles en sus tareas de asesoramiento y se les ocupa en tareas no castrenses que permiten que sus cuadros se sientan útiles en el servicio a su pueblo.

Lamentablemente, la utilización no se circunscribe a estas tareas, sino se realizan esfuerzos para mantenerlas como fuerzas de ocupación y represión de sus conciudadanos, como se dio en el caso del Departamento de Pando, donde rigió el Estado de Sitio y se nombró a un prefecto militar activo para las tareas de control político.

Esta es una realidad preocupante, las labores represoras no están siendo representadas por los mandos y los Estados Mayores, mostrándonos claramente una debilidad espiritual que raya en la obsecuencia, alejándose cada vez más de su principal misión, la de hacer cumplir y asegurar el imperio de La Constitución Política del Estado.

Por otro lado, si bien se muestra una apariencia de apoyo político al Estamento Militar por parte del gobierno, lo que en realidad se percibe es un esfuerzo de separarlo del pueblo. Ejemplificamos esta realidad señalando lo que pasó en la celebración de la Semana Santa: las FF.AA., fueron prohibidas de asistir institucionalmente y uniformadas a la procesión del Santo Sepulcro, rompiendo una tradición centenaria; apelaron a su disciplina y, mediante una orden eminentemente política,

la divorciaron del pueblo con el cual acostumbraban a orar en las procesiones sacras durante esas importantes fechas, incluso en la Pascua de Resurrección. De la misma manera, la ausencia militar en las ceremonias cívicas departamentales, en los departamentos de Tarija y Chuquisaca, fue duramente criticada.

Nuestra institución, tradicionalmente vista por los partidos políticos como oponentes en el relevo del ejercicio del mando de la Nación, después de 27 años de conducta democrática ejemplar, ha logrado un tercer lugar de confiabilidad en la sociedad boliviana, y continúa siendo percibida por algunos sectores como la esperanza de reconducción democrática en caso de los abusos de una tiranía política.

Lamentablemente, los líderes políticos caducos no aprenden y continúan atacando el desempeño castrense que, por su carácter eminentemente obediente al gobierno, ha iniciado tareas represivas. Con estos ataques injustificados, lo que logran en realidad es fortalecer el Espíritu de Cuerpo, entregándolas en bandeja de plata al objetivo de establecer el pacto que ya no es militar-campesino, sino indígena-militar, y de esta manera contar en breve plazo con unas FF.AA. a la medida del gobierno y a sus intenciones totalitarias.

Pero donde más inciden sus esfuerzos es en el deterioro de sus virtudes y principios espirituales, sin los cuales no se comprende el sentimiento del honor que deben tener todos sus componentes.

Para mantener vigente el sentido del honor y del deber, se requiere que las FF.AA. no se conviertan en agentes represores, y que no sean utilizadas de mil maneras, distintas a la

función militar: cajeros de los bonos, aduaneros, vacunadores, alfabetizadores, centinelas de la salud, y hasta barrenderos en todas las campañas de limpieza de los municipios.

Con respecto a la disciplina -base fundamental de los ejércitos y alma fundamental de la organización- que sustenta a la jerarquía, ha sido debilitada, primero, con el retiro injustificado de tres promociones de generales, en el momento de la asunción al poder; y segundo, sancionando a la disidencia, con malos destinos o cargos militares. Este chantaje profesional beneficia a los incondicionales del régimen, quienes, abandonando la apoliticidad que debe caracterizar al militar, se comprometen con el gobierno, garantizando la subordinación consciente y voluntaria al llamado “proceso del cambio”.

De esta forma, no queda casi ningún espacio para el disenso, ni para una conducta verdaderamente profesional. Como consecuencia, no se impone la razón, sino el autoritarismo, sobre todo frente al fracaso de las decisiones del gobierno, en sus diferentes niveles. Todo lo arriba descrito daña la imagen de las FF.AA. y pone en riesgo su institucionalidad, lo cual favorece el mando autocrático y autoritario de los políticos de turno.

Todo indica que -en el alineamiento geopolítico al nuevo eje antiimperialista, claramente definido por el gobierno de Venezuela- la tónica de la nueva relación entre el gobierno y las FF.AA. contempla quitar del camino a los cuadros representativos de la institución, que deberían ocupar naturalmente el Alto Mando, y encumbrar a otros, no por razones de mérito, sino por su compromiso con la revolución. Existe el temor de

que, con estas medidas, se concretará la destrucción o eliminación de la Institución militar, tal como se la conoce ahora, como paso imprescindible en la destrucción de la soberanía patria.

En este sentido, se ha observado que existe una política del gobierno de separar a todos aquellos militares que no comulguen con el “proceso de cambio”, principalmente sobre aquellos que tienen expectativas de asumir cargos prominentes en las FF.AA.; y se les otorga estas responsabilidades a los sumisos, soplones y serviles. La subordinación al proyecto político gubernamental parece ser la única vía para alcanzar altos cargos dentro de la Institución, aun cuando -por razones de falta de antigüedad y mérito- no les corresponda asumirlos.

Policializar a las FF.AA. y militarizar a la Policía Nacional parece ser otra de las intenciones del actual gobierno; de esta manera se pergeñan nuevas tareas y se asignan roles no tradicionales.

El nuevo Servicio Militar Obligatorio prioriza la capacitación técnica y devalúa la instrucción militar; lo poco que se instruye en el manejo de armas en no mas de tres meses servirá para tareas policiales en defensa del gobierno o en tareas políticas de presencia del Estado, como es el caso de la distribución de los bonos sociales y tareas aduaneras, de educación y salud, el cuidado del medio ambiente, y la erradicación del narcotráfico.

No estamos en contra de estas actividades, pero se debe determinar con claridad cuáles Unidades prestaran apoyo al desarrollo y cuáles Unidades son esencialmente operativas, de-

dicadas en un cien por ciento en su preparación e instrucción netamente militar

El deseo de modificar las FF.AA. llega al extremo de pretender cambiar su uniforme, para que “deje de ser una copia de los uniformes estadounidenses” y represente a las regiones y las naciones del nuevo Estado Plurinacional.

Estos detalles tan nimios, pero a la vez importantes, revelan una política de transformación, cuyos resultados no podemos imaginar sin dirigir nuestra mirada hacia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba o a las de Venezuela, estas últimas también en pleno proceso de transformación. Se trata de medidas en apariencia poco trascendentales, que responden a intereses políticos y no militares.

En reiteradas oportunidades el gobierno ha mencionado que potenciará y fortalecerá a las FF.AA., pero esa intención se ha convertido en una formulación teórica, porque en la práctica no existe. Se han comprado algunos vehículos y aviones de transporte; pero no se ha comprado lo más importante, que son las armas y las municiones, todo lo cual incide negativamente en la defensa de la soberanía y de las instituciones de la patria.

Debemos señalar que lamentablemente las FF.AA. no están siendo utilizadas de acuerdo a la norma y a la Constitución; por el contrario, en muchos casos están siendo usadas para reprimir a la población, incluso cuando las protestas, además de pacíficas, estaban plenamente justificadas. La policía es, en primera instancia, la institución encargada sofocar una convulsión en caso de presentarse y, sólo cuando es rebasada o

cuando no tiene la capacidad suficiente, deben intervenir las FF.AA.

El actual gobierno ordena directamente a las FF.AA. intervenir, sin agotar la instancia policial, para que reprima las manifestaciones de la disidencia, sin los medios ni el equipo adecuado para estos fines. Además, se supone que las FF.AA. salen con armas letales que pueden provocar situaciones peligrosas; y que las FF.AA. no son provocadores de la violencia, sino que salen para dar cumplimiento a las disposiciones del poder político.

No hay duda que esta situación preocupa, porque el pueblo va perdiendo la confianza en las FF. AA. Situaciones como las arriba señaladas ocurrieron en sitios como Camiri, Sucre, y Tarija, donde las FF.AA. fueron humilladas. Afortunadamente, la respuesta de los grupos sociales involucrados en el conflicto no tenía un carácter violento.

La actuación militar en Pando -departamento con poca densidad poblacional- fue una de las más graves, porque, siguiendo órdenes del Ejecutivo, la Institución se excedió en el uso de la fuerza; ocasionando varios muertos. Esto respondió a circunstancias políticas del momento, manejadas por el Alto Gobierno, pero que sin duda constituyen imposiciones autoritarias, contrarias a la Ley.

Otro aspecto peligroso que debe señalarse es que al interior de las FF.AA. se ha establecido un sistema de control, sobre todo hacia los Comandantes, para detectar quiénes piensan de manera distinta al gobierno, para que éstos puedan ser separados o ubicados en cargos sin relevancia, coartando la ca-

rrera y las aspiraciones legítimas de militares destacados

Se debe, pues, formular una política de defensa de nuestra institución. Deben diseñarse respuestas para el adversario. Un adversario que no sólo se opone a la Institución, sino a los valores mismos que la caracterizan, a la tradición y a la mística institucional, basada en la trilogía “Dios, Patria y Hogar”, que ha sido orientadora del desempeño institucional desde sus orígenes.

Los mandos militares actuales tienen la palabra, o sacan a flote la institución o la hunden como el Titanic.

¿Acaso deberemos renunciar a nuestros símbolos patrios e izar la “whipala” andina en nuestros cuarteles? ¿Qué haremos con nuestros ritos religiosos institucionales, las misas de campaña, las bendiciones al iniciar nuestras actividades, la comunión espiritual que reconforta en momentos de peligro? ¿Qué pasará con nuestra patrona y generala de las FF.AA.? ¿Volveremos a las “challas” y “Qoas” paganas, alejadas de ese beneficioso sincretismo que unía a la tropa con sus oficiales? ¿Qué pasará con nuestros capellanes? ¿A quiénes acudiremos en nuestras cavilaciones más profundas? Estas importantes interrogantes deben ser respondidas acertadamente. Urge repensar el cambio que pretende promoverse en las FF.AA.

El conflicto creado por el mismo gobierno, al poner en práctica su proyecto ideológico, genera un incremento del racismo (discriminación); enfrentamientos sin sentido entre campesinos y ciudadanos, es decir, con la clase media; avasallamiento de tierras, es decir, violación de la propiedad privada; polarización absurda entre oriente occidente; y una infinidad

de problemas. Ante esta situación, la oposición se encuentra en franca desventaja, porque, mientras que el gobierno tiene un proyecto político-militar, la oposición tiene solamente una respuesta política.

Es necesario, pues, frustrar la estrategia del gobierno; prevenir que logre sus objetivos; para así evitar que el conflicto degenera en violencia o choque armado; lo cual tendría consecuencias desastrosas y funestas.

Sin duda, esto resulta una tarea extremadamente difícil para los políticos, porque las sociedades democráticas tienden a fluctuar entre la complacencia y el miedo. Los líderes políticos generalmente recurren a la solución de conflictos y al apaciguamiento.

Aún así, debe buscarse una estrategia que evite la expansión de una izquierda que desprecia los derechos humanos, niega absolutamente la naturaleza y la dignidad humana, e incentiva y fomenta el odio entre las clases para alcanzar la revolución social. Se trata de una izquierda que actúa con crueldad, sin ningún tipo de escrúpulo, esto se observa a diario en todas partes del mundo; por tanto, es necesario detener el avance de esta doctrina perniciosa.

La sociedad civil no pide que las FF.AA. derroquen al gobierno, pero sí le exigen que planteen al gobierno cumplir el estado de derecho y respetar la Constitución Política del Estado

Para concluir, ¿Qué pasará con los movimientos sociales, que con una clara tendencia confrontadora y racista, amenazan la región oriental? ¿Cómo evitar que en Santa Cruz se genere una preocupante tendencia a organizar células irregulares ar-

masas? Es preocupante la significación socio-política que tiene, como ocurrió en el pasado, el triangulo de la dispersión del poder: Ejército, la policía y las milicias armadas.

El proceso que se está desarrollando -que ya causa repulsa en la ciudadanía- está orientado a tener, en el corto plazo, un país sometido a la discrecionalidad de nuevos “Estados Mayores del Pueblo”, que dirigirán a las masas populares, para imponer por la fuerza su proyecto ideológico, y que se conviertan en una especie de Gestapo para las propias FF.AA. Ellos decidirán quién se queda y quién se va, quién manda y quién obedece.

La ocupación militar de Pando, la prisión ilegal de su ex prefecto Leopoldo Fernández, y la judicialización de la política y otras anomalías, ensombrecen las declaraciones democráticas del Gobierno y le restan confianza pública.

Por motivos de conciencia, denunciamos que la excesiva prudencia de los mandos que, rayando en la obsecuencia, no defienden los valores institucionales, es una actitud despreciable, que no solo debilita a la Institución sino a toda nuestra república.

Nuestros camaradas y particularmente sus mandos, no deben olvidarse que las Fuerzas Armadas, como “modificadoras de valores e integrador nacional”, no pueden ser manipuladas por ninguna organización política, menos si estas tienen tendencias totalitarias, “La Democracia es la ausencia de la Tiranía”.

5.

El Foro de São Paulo afecta a Colombia

Introducción 1

Colombia indudablemente es el país latinoamericano más afectado por la realidad que representa el Foro de São Paulo. Realidad que aparece en los horizontes sociales, políticos y económicos de cada nación, sin que se presuma a los ojos ingenuos de un lector desprevenido, de un ciudadano común, que ello pudiese tener proyección al horizonte del conflicto armado, del uso de las armas de guerra, del desangre de los pueblos supuestamente hermanados de sur y centro América.

Dada su posición geoestratégica, Colombia está en la mira de los intereses geopolíticos expansionistas del llamado Socialismo del Siglo XXI, que se refleja en un contubernio internacional que pretende revivir el anquilosado sueño tiránico de Fidel Castro hacia todo el continente, originado primero con la expansión del comunismo soviético, prolongado con la guerra fría, estimulado por la dictadura cubana y resarcido por el Noveno Congreso del Partido Comunista Colombiano, que validó la "combinación de las formas de lucha", a partir de la acción armada, pues al decir de Jacobo Arenas "las guerrillas son el estímulo de la subversión".

Caído el muro de Berlín, se hubiera podido pensar que las guerrillas comunistas colombianas perderían la justificación

ideológica política, pero en especial el sustento que recibían del exterior. Para desgracia de Colombia y suerte de los grupos guerrilleros, el narcotráfico las oxigenó en lo financiero y el Foro de São Paulo en lo político, con el argumento castrista refrendado por Lula Da Silva, que el socialismo tiene vigencia.

De esa manera las FARC se metieron de lleno al terrorismo, al narcotráfico y al narcoterrorismo. Al mismo tiempo crecieron los contactos del Frente internacional hasta completar una estrategia de diplomacia paralela, que le permitió refinar los componentes estructurales de su Plan Estratégico y conectarse con las redes de lavadores de dinero, los narcotraficantes y los comerciantes del mercado negro de armas.

Al grave problema de la tendencia izquierdista de Latinoamérica, con poco claras proyecciones del socialismo del siglo XXI, se sumó que las FARC, parte activa del Foro de São Paulo, no solo son un problema para la seguridad nacional sino para la estabilidad hemisférica, y en ese sentido el Foro de São Paulo es un combustible altamente nocivo en ambos casos.

El Foro aparece entonces como un binomio de dos polos cercanos, que encuadran precisamente a Colombia encuadrada, casi equidistante, el Partido de los Trabajadores del Brasil (PT) y el Partido Comunista de Cuba, que pretendían redefinir los objetivos y las actividades de la izquierda después de los grandes fenómenos que habían llevado casi a la extinción del comunismo en el mundo. Por lo menos en Colombia, supimos que el partido comunista colombiano (PPC) no se había resignado a la desaparición de la URSS y percibimos que siguieron como si nada hubiera pasado, como si las cosas del de-

sarrollo de la política internacional mundial fueran ajenas a los sucesos y realidades colombianas.

Era natural, en Colombia estaba en plena actividad y creciendo un movimiento guerrillero desde el año 1964 que había trastocado las relaciones con su organismo creador, el partido comunista, y había seguido adelante colocando lo militar por encima de lo político. Fue un efecto indudable del narcotráfico. El ente creado se había desarrollado económicamente más que el ente creador, pero lo que era una realidad incontrovertible: la criatura empezó desde la década del ochenta a patrocinar y sostener el movimiento político creador. No sería fácil por lo mismo que los ideólogos comunistas locales convencieran a los cabecillas de su aparato militar que la dejación de las armas era una necesidad moderna o una gran conclusión del acontecimiento mundial de su enorme espejo y su gran inspiración: la URSS.

Otra razón de peso pudo ser que se sentían tan cerca de la meta soñada de alcanzar el poder por la vía de las armas, que dar un paso atrás era perder medio siglo de lucha, entonces sí, infructuosa. Era casi como la repetición o reiteración del slogan más de moda por los tantos movimientos insurgentes colombianos: ni un paso atrás, siempre adelante; cuyo origen lo ubican en el comunero José Antonio Galán a finales del mil setecientos.

El Foro de São Paulo se convertiría a partir de su creación no en un foro, más bien en un faro de luz incendiaria, revitalizadora de la lucha que acá se libraba, no de tipo laboral, gremial o de reivindicaciones sociales o económicas; acá se

tejían redes mas duras de tambores de guerra y el Foro de São Paulo les cayó como guante vivificante de hazañas guerreras, nunca tan bien justificadas como pudiera hacerse a través del nuevo aparato de corte internacional. Si provenía de países como Brasil y Cuba, mejor; si lo patrocinaba Hugo Chávez desde Caracas, todavía mejor. Pero si las coyunturas le daban patente de corso y lo internacionalizaban gobiernos afines y coincidentes, extraordinario.

Para los integrantes colombianos del Foro, llámese FARC-EP o ELN-UC, Polo Democrático Alternativo o subsiguientes en lista de hoy o mañana, es trascendental hallar en otros gobiernos vecinos la aceptación ideológica y logística que no tienen en su propio patio, pero si la unión de esfuerzos se consigue y progresa, finalmente conseguirán un gobierno de corte similar en Colombia, con lo cual cerrarían el círculo de fuego de rojo intenso para enfrentarse contra potencias desafectas o ideologías democráticas pacíficas o irenistas. No sobra advertir que de los tres representantes colombianos, dos son movimientos armados activos e ilegales y ello es del conocimiento de todas las naciones americanas, no pueden olvidar que están en la lista de organizaciones terroristas del mundo. El estatuto de las FARC-EP, en su artículo 1º reza, como para que no queden dudas: *“Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, como la expresión más elevada de la lucha revolucionaria por la liberación nacional, son un movimiento político militar que desarrolla su acción ideológica, política, organizativa, propagandística y armada de guerrillas, conforme a la táctica de la combinación de todas las formas de lucha de*

masas por el poder para el pueblo”.

Un simple ejemplo justificaría la participación de movimientos afines, políticos o armados, ideológicos o subversivos, al Foro de São Paulo por parte de organizaciones colombianas: las relaciones inestables de Colombia con sus vecinos Venezuela, Ecuador y Nicaragua, se centran en las posiciones ideológicas de esas tres naciones promulgadas con insistencia por el Foro, el cumplimiento de sus consignas, la propalación de la política bolivariana de origen chavista y otras expresiones de corte económico y diplomático. En las posiciones individuales de los mandatarios, la sincronización de ideas y esfuerzos, la coincidencia en tiempos y espacios, no dejan lugar a dudas sobre la paternidad de un ente gobernante. Si se quisieran mas pruebas bastaría simplemente cuestionar la permanencia en esos países de cabecillas, campamentos, actividades de entrenamiento, aprovisionamiento en armas y equipos, proselitismo y coordinación de acciones contra Colombia en particular o proyecciones a otros países en donde la llama guerrera revolucionario pudiese florecer de sus cenizas aún tibias.

Colombia es sin lugar a dudas la nación sudamericana que mas ha sufrido con la creación del Foro de São Paulo; tenemos lo que las otras naciones potencialmente objetivos, no tienen, un ingrediente armado, organizado y experimentado en la lucha armada, que es actuante interna e internacionalmente y en plena coordinación con los líderes del Foro. Una muestra de esta unión de voluntades y entrega a la causa inter-

nacional la patentiza el mensaje de Julio de 2007, remitido por la narco guerrilla de las FARC al Foro de São Paulo, que en sus partes dice:

Comunicado de la Comisión Internacional de las FARC-EP al Foro de São Paulo. Compañeros Mesa Directiva del Grupo de Trabajo del Foro de São Paulo.... ()...Nos reunimos en un momento muy importante para el avance político y social de nuestro Continente. Los triunfos de Nicaragua y Ecuador nos muestran la decisión tomada por los pueblos, de no permitir a las clases dominantes y minoritarias que sigan gobernado nuestros países, atropellando a los más débiles, entregando nuestras riquezas a las empresas multinacionales y pisoteando nuestra soberanía.*

La consolidación de las revoluciones cubana, venezolana y boliviana nos aseguran que el futuro de América Latina y el Caribe se encamina por los cambios en beneficio de los pueblos. Nuestra querida Colombia está enferma, los gobiernos de los últimos decenios, han destruido todo lo que una democracia burguesa puede mostrarle al mundo, las instituciones están en crisis, el Ejecutivo es sindicado de paramilitarismo y narcotráfico, el presidente Uribe figura en el puesto número 82 en el listado de Bush padre de 1991, el Vicepresidente Francisco Santos ha sido acusado por los capos del narcotráfico de pedir escuadrones de la muerte para Bogotá. El Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos ha sido acusado de contactos con los jefes paramilitares para cometer crímenes y dar un golpe de Estado a su compinche Ernesto Samper Pisano. Gobernadores, Alcaldes e Inspec-

tores están siendo llamados a juicio y ya han condenado a muchos por los delitos que han cometido contra la población.... (*)... Los planes Colombia, Patriota, Victoria y otros ha sido un fracaso de los señores George Bush y Álvaro Uribe Vélez. Varias veces han intentado rescatar por la vía militar a los prisioneros políticos y de guerra y en todas han fracasado, el último intento fue el 18 de junio del 2007, dando como resultado la muerte de 11 diputados que se encontraban en poder de las FARC desde hace 5 años, ¿a quien sirve esta demencial acción? ¡A la guerrilla que llevaba 5 años cuidándoles la vida para un intercambio humanitario! O al gobierno que desde el primer momento ordenó el rescate por la vía militar sin importarle la vida de los prisioneros(*)... “El Comando Conjunto de Occidente de las FARC informa que el día 18 del presente mes, 11 diputados de la Asamblea del Valle que retuvimos en abril de 2002, murieron en medio del fuego cruzado cuando un grupo militar sin identificar hasta el momento, atacó el campamento donde se encontraban” ...(*)... Pero resulta que Colombia no es Uganda, no es la Embajada del Japón en el Perú... y el plan les fracasó. Ahora tratan de convertir su derrota en victoria. Los medios de comunicación en poder de los grupos económicos, los columnistas a sueldo, los periodistas sensacionalistas, los intelectuales “independientes” todos al unísono condenan a las FARC por la “masacre”....(*)... Llamamos a los colombianos y a la comunidad internacional a luchar por el intercambio humanitario y la salida política al conflicto social, político y armado que vive Colombia desde hace más de 50 años. Pedimos la solidaridad con los 5 patriotas cubanos, los 11 mil palestinos, entre ellos 100

dirigentes, los puertorriqueños, los paraguayos. Y en especial, Sonia y Simón, todos presos políticos pagando injustas condenas. POR LA NUEVA COLOMBIA LA PATRIA GRANDE Y EL SOCIALISMO. FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA EJÉRCITO DEL PUEBLO. FARC-EP. COMISIÓN INTERNACIONAL. Julio 2007.

Entre amigos se cruzan las mentiras, las consignas y la cadena de crímenes que como consecuencias de tales alianzas desangran permanentemente a Colombia.

Colombia. Conflicto armado interno. Antecedentes y presiones dominantes ²

Entender el conflicto colombiano en toda su complejidad obliga a trasegar su historia, donde hechos puntuales han marcado hitos, dejando cicatrices aún en proceso de recuperación, y aspiraciones minoritarias de lograr el cometido insurgente fijado, lo mismo que esperanzas de reconciliación en unas mayorías pasivas, hoy más dinámicas, que no han perdido la esperanza de la posible solución del conflicto.

El movimiento comunista internacional exportó a su manera la revolución cruenta, buscando simpatizantes para reproducir las revoluciones triunfantes básicamente de 1917 Rusia, 1949 China y 1959 Cuba, siguiendo los patrones del proletariado, la plusvalía, la gran marcha bajo la concepción de la tierra para quien la trabaje, y el poder que nace en la boca de los fusiles.

El Partido Comunista Colombiano fue creado en 1930, siguiendo los lineamientos del partido soviético; en abril de 1948, con ocasión del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, tuvo una importante participación en los hechos y eventos posteriores, conocidos, al inicio de la guerra fría que se ha señalado como una extensión del conflicto Este-Oeste.³

Aduciendo persecución política sectaria, el partido Comunista Colombiano fundó las autodefensas campesinas en vecindades de la capital de la república, disponiendo a los hombres, mujeres y niños en estructuras propias de la organización de izquierda, que dieron origen a las guerrillas comunistas, que se extendieran en los años venideros por todo el país.

De esta estructura armada inicial nacen las fuerzas revolucionarias comunistas, dependiendo del partido a través de la *comisión militar*, y años después se presenta la escisión de una fracción que constituye el partido comunista marxista leninista y el Ejército Popular de Liberación, EPL, de tendencia pro china en cuanto a sus apoyos y estructura político-armada. Meses después otra escisión del partido, crea el Ejército de Liberación Nacional, ELN, facción entrenada en guerra de guerrillas en Cuba y que sigue los lineamientos de esta revolución. Posteriormente el M-19, utilizando como pretexto el supuesto fraude electoral de 1970.

Estas organizaciones aplicaron técnicas de penetración e infiltración, politización y adoctrinamiento en sus áreas de influencia, que incluyeron las ciudades, los sindicatos, organizaciones gremiales, la academia, el clero, la juventud, la rama judicial y los entes de control.

En medio de este panorama, la búsqueda de una salida negociada al conflicto ha sido la preocupación de varios gobiernos, que propició con el tiempo la reinserción a la civilidad de varias facciones armadas. A partir del 2002, la decisión política del gobierno Uribe, sumado a las circunstancias vividas en el cuatrienio anterior, facilitó implementar una política de seguridad democrática, mediante el fortalecimiento de las fuerzas militares, que permitió la disponibilidad de un pie de fuerza elite, para enfrentarlo a los centros de concentración insurgente, áreas de influencia, puntos de apoyo logístico y atacando prioritariamente sus fuentes de financiamiento: el narcotráfico, la extorsión y el secuestro.

En el segundo gobierno del Presidente Uribe Vélez las desmovilizaciones de integrantes de los grupos alzados en armas suman más de cincuenta mil miembros entre hombres y mujeres que se han reinsertado, en aplicación de una ley de Justicia y Paz que incluye esquemas para resolver la situación jurídica, la capacitación para la vida civil y apoyos económicos por tiempos prudenciales.

La situación de violencia que vive el país, se refleja como el resultado del accionar de unos factores de perturbación que se manifiestan alterando el orden público, debilitando la estructura nacional, afectando la economía y especialmente atentando contra los nacionales y la tranquilidad pública. Estas presiones se materializan en facciones armadas ilegales, grupos de justicia privada mal llamados autodefensas o paramilitares, el narcotráfico en todas sus modalidades, con bandas criminales de apoyo, empeñadas en la siembra, producción de hoja,

comercialización y exportación de productos y sustancias sicotrópicas.

Organizaciones armadas al margen de la ley

A. Fuerzas Armadas Revolucionarias Comunistas, Ejército del Pueblo, FARC-EP

Fueron creadas en 1964, bajo la ideología marxista, leninista, y tuvieron como motivación la revolución Rusa de 1917, orientaron su accionar en procura de desestabilizar las instituciones, debilitar al gobierno en sus distintos niveles, producir golpes de opinión por los medios de comunicación en procura de desestabilizar las instituciones legítimas, para encabezar el descontento popular y generar la insurrección generalizada para acceder al poder político de la nación, a través de medios violentos y la acción política; alcanzada dicha meta, se debía producir el viraje hacia el marxismo leninismo. Su base de apoyo se concentra en la clase baja, en un alto porcentaje analfabeta y de escasa preparación.

Concibieron una capacidad armada estratégica, y una propuesta programática en el sentido de vitalizar e impulsar el movimiento en hombres, armas y recursos económicos inicialmente, para debilitar al Estado y potenciar las posibilidades de éxito. Diseñaron un “plan estratégico” señalando la cordillera oriental como eje de la lucha, como centro de despliegue estratégico concebido hasta el año de 1996. Plantea una nueva organización, concibiendo bloques de frente, unión de los frentes en cada zona, el soporte económico requerido y el proyecto de

la ofensiva para la insurrección generalizada.

Han buscado por todos los medios el reconocimiento como fuerza beligerante, gozando con la aquiescencia de los países con gobiernos de izquierda en tanto aplican una defensa estratégica, para preservar la fuerza, mantener aéreas vitales de gravitación, conservar capacidad de realizar acciones tácticas, aprovechando factores de oportunidad y vulnerabilidad de las fuerzas militares.

El terrorismo, el secuestro, la extorsión, la financiación con el narcotráfico, la intimidación de la población civil, el co-gobierno, la acción política, el manejo de los medios de comunicación a favor de su causa, son las formas más usuales de presionar al gobierno de turno en todos sus instancias, e influir en la opinión pública mediante la intimidación y el amedrentamiento. Un aparato político encargado de manejar actividades lícitas del movimiento como oposición radical al estado, utiliza el sistema democrático para acceder a los cuerpos corporativos, alcaldías y gobernaciones, cuyo principal exponente es el Partido Comunista Colombiano (PCC), y otras organizaciones como la Unión Patriótica (UP).

Como concepción, la combinación de todas las formas de lucha ⁴, principio marxista, acogido en su esencia, pero implementado hacia la lucha política, utiliza la igualdad de derechos que otorga el Estado, se emplea dentro de una aspiración de aceptación legal en procura de mantener el aval y por ende una representación política, para ubicarse en oposición al sistema y una vía válida de lucha, orientada a movilizar sectores vulnerables de la población. Para la fecha, el partido aceptó

públicamente lo inevitable de la lucha armada y al mismo tiempo, participar en todas las formas de lucha ⁵.

Se aprecia sin mayor esfuerzo que las FARC desviaron el proyecto de su concepción ideológica, reemplazándola por el negocio del narcotráfico y otros métodos ilegales de autofinanciación. También arrastran la pérdida de credibilidad, reflejada en las encuestas populares, la cual trae de suyo la disminución de la capacidad de convocatoria y movilización de masas, perceptible en las últimas huelgas o paros nacionales.

Persisten algunas propuestas de nítido sabor político para buscar un acuerdo humanitario, con el intercambio de secuestrados a cambio de los presos de la organización, detenidos o condenados punibles, lo cual se constituye en un as en la manga, en procura de acuerdos políticos. En esta tarea han buscado acercarse, consiguiéndolo, a varios países latinoamericanos como Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Argentina y Uruguay principalmente.

Ha sido notorio el apoyo que han encontrado en algunas de las naciones citadas tales como Venezuela, Ecuador y Nicaragua.

Las FARC han aprovechado el Foro de São Paulo en forma por demás abierta, toda vez que sus frentes en los límites con Venezuela y Ecuador gozan de libertad para instalar campamentos en esas naciones, entrenar sin contratiempos, proveerse de la ayuda logística en actividades de aprovisionamiento de armas y equipo y establecer bases de coordinación de corte internacional, no solamente con el país que le provee las facilidades sino también con otras organizaciones afines o de

corte comunista de otras naciones.

Una de las crisis más delicadas se presentó precisamente cuando el gobierno colombiano para detener y repelar la agresión de varias organizaciones establecidas en el interior del Ecuador, muy cerca de la frontera con Colombia, atacó el campamento en donde se encontraba el segundo de la organización guerrillera, Raúl Reyes, quién resultó muerto junto con otros integrantes del grupo. Las pruebas recogidas, particularmente en los computadores portátiles que manejaba el cabecilla Reyes, han mostrado el grado de comprometimiento del gobierno Correa, en las figuras de destacadas personalidades de su gobierno. Este sólo hecho produjo la ruptura de las relaciones de Ecuador con Colombia y el apoyo en el mismo sentido por parte de Venezuela y Nicaragua. El Foro de São Paulo no sólo promueve acciones, también las concerta y las estimula. La muerte de Reyes mereció por parte del presidente Chávez palabras de elogio y en una de las plazas de Caracas se erigió un monumento a Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, jefe de las FARC, fallecido recientemente.

B. Ejército de Liberación Nacional, Unión Camilista (ELN-UC)

Este movimiento armado cultivó sus raíces en el triunfo de la revolución cubana, que despertara gran fervor revolucionario en América Latina, al que no fue esquivo Colombia, a través de movimientos políticos como el Frente Unido, las Juventudes del MRL, el Grupo Golconda del clero, Sacerdotes para América Latina, la academia, varias universidades, la clase

obrero y población campesina de varias regiones rurales.

Su doctrina se fundamenta en los conceptos de “liberación nacional” y “construcción del socialismo”. La estrategia final, teóricamente contempla el proceso de la guerra popular prolongada; las guerras revolucionarias son generalmente dilatadas, buscando no vencer la resistencia, sino irla debilitando, basados en el esquema de cambiar espacio por tiempo, que se debe emplear en producir eventos políticos que elevan la conciencia revolucionaria, como condición del triunfo revolucionario llamado “La insurrección de las masas”.

No obstante su concepción teórica, el movimiento armado ha sufrido descabros inicialmente con las FARC por la lucha de regiones y negocios de las drogas, y posteriormente con las autodefensas ilegales, con el efecto de la pérdida de influencia en regiones que otrora eran de su dominio. El grupo registra un decrecimiento en número de hombres y armas que repercute en las acciones armadas y otras actividades delictivas que desarrolla, supeditada su posición a decisiones impuestas por las directrices fijadas por las FARC.

Internacionalmente ha buscado y encontrado apoyo y simpatías en Venezuela con el Presidente Hugo Chávez, varios de sus cabecillas se encuentran en esa nación sin ser molestados. La debilidad política militar la obliga a mantener alianzas en algunas regiones con las FARC, a cambio del apoyo debido, y su mayor trabajo tiene que ver con el secuestro económico o de carácter político y en los últimos años definitivamente se lanzó al negocio del narcotráfico en varias zonas del país.

C. Grupos de Justicia Privada o de Autodefensas Ilegales

Fueron organizaciones armadas al margen de la ley que tuvieron su origen inicialmente en áreas selváticas del centro del país, ricas regiones dedicadas a la explotación agropecuaria y la extracción de oro, después se extendió al norte a varios departamentos y al sur y oriente hacia los llanos orientales. En su expansión había apelado al expediente del narcotráfico y el secuestro como fuentes de financiación. Durante el gobierno del presidente Uribe, se acogió casi en su totalidad a las ofertas gubernamentales para desactivar el movimiento representado en varias organizaciones dispersas, entrega de sus cabecillas, entrega de las armas y reinserción de sus integrantes a la civilidad. Fue necesaria una Ley de Justicia y Paz que produjo la desactivación de alrededor de treinta y cinco mil combatientes y redes de apoyo.

Con el evento anterior se había puesto fin a una oleada de terror, masacres, secuestros y desplazamientos masivos de población campesina. En su siniestro recorrido había logrado permear la clase política a nivel regional y nacional, organizaciones sociales y el aparato jurídico del estado.

D. Narcotráfico

El narcotráfico y sus efectos funestos, invadió importantes sectores de la sociedad colombiana e influyó negativamente en la economía, en la política, en el orden social y agravó la situación del conflicto interno, al apropiarse en regiones enteras de este lucrativo negocio, y contar con divisas frescas para la adquisición de pertrechos armas, explosivos, financiar cam-

pañas internacionales para limpiar su imagen terrorista y al margen de la ley nacional, de los derechos humanos y el DIH.

Su manifestación se materializa en actividades relacionadas con el terrorismo, asesinatos selectivos, ajuste de cuentas, la extorsión de autoridades, la presión política e influye en la actividad económica y política del país. La acción oficial ha permitido capturar o dar de baja en combate a los principales cabecillas del narcotráfico y ha sido notoria la aplicación de la extradición a los Estados Unidos de varias decenas de jefes de primero y segundo nivel de las organizaciones criminales.

Efectos y secuelas de la confrontación armada contra el Estado

La confrontación armada, deja secuelas profundas, al forjar un dinamismo que afecta la salud de la patria, con los efectos, fruto de las metas por alcanzar, sentimientos de retaliación de los afectados, el descenso al “lumpen” de la corrupción, la violencia y el odio entre hermanos, secuelas de las que identificamos:

- Masacres causadas por los grupos armados contra sectores sociales que se oponen pacíficamente a sus intereses, tales como etnias indígenas, el clero, pastores cristianos y miembros activos de los partidos tradicionales.
- Desplazamiento forzado de campesinos, residentes en zonas de violencia, para protegerse de ella o atendiendo en muchos casos a las exigencias de la organización armada.

- Creciente reclutamiento de menores al conflicto armado, mediante tentadoras ofertas económicas, explotando el sector más vulnerable.
- Considerar en las áreas apartadas objetivo militar a la población civil, siendo el amedrentamiento y la amenaza una de sus armas preferidas.
- Sembrado de minas antipersonales que afecta especialmente a la población civil indefensa.
- Ineficaz aplicación de la justicia, que repercute en el incremento de los índices de impunidad.
- Desprestigio internacional, causado por las campañas que encuentran eco en reconocidas ONGs, donde se esfuerzan en presentar al gobierno como ilegítimo y corrupto, y a la Fuerza Pública como un instrumento para mantener el statu quo; se agrega el terrorismo indiscriminado que periódicamente ejercen los grupos armados ilegales y que eventualmente afecta a los extranjeros residentes.
- Surgimiento de los grupos de autodefensa ilegales, como efecto de la violencia insurgente y en busca de proteger intereses privados que degeneró en la llamada Justicia Privada.
- Coordinación e implementación de métodos de guerra jurídica contra el Estado, infiltración de los medios para generar opinión pública afecta a sus intereses y en contra de la fuerza pública
- Politización de los derechos humanos; utilizada como arma de enfrentamiento contra el Estado y su fuerza pública, con estrategias que les permite convertirse de acusados en acusadores, en claros procesos de connivencia y ruptura.

Apreciaciones parciales

Las comunidades nacionales y residentes sufren la alteración del orden público particularmente en zonas urbanas y rurales, en donde se desarrolla un claro enfrentamiento al Estado, se lucha por el monopolio del uso de la fuerza y se socava la libertad y el orden en todas las formas posibles. El accionar terrorista se dirige indiscriminadamente contra la población, generando el natural rechazo y la consecuencial pérdida del apoyo de la opinión pública, no obstante ser blanco de la desinformación y los efectos de presión del accionar delictivo.

En el núcleo de concentración insurgente se entrelazan concepciones de nivel estratégico y particularmente táctico, que tienen que ver con la guerra política, la acción psicológica y el apoyo internacional, que convierten el fenómeno en un círculo vicioso al ser alimentado por los negocios ilícitos de las drogas, y la influencia de dirigentes ocultos.

Los planes y documentos rectores que señalaban el año de la insurrección generalizada, no se cumplieron en los tiempos y en los lugares previstos para las ofensivas planteadas, y es de prever que este movimiento persista en el propósito de acumular fuerzas, recursos y capacidad económica, en busca del momento y el tiempo adecuado, o si las circunstancias se agravan, en un eventual proceso de paz, fruto de su incapacidad para alcanzar el objetivo final.

Así la situación nacional se podría analizar con una visión presente y futurista: en desarrollo de la política de seguridad democrática, opuesta a la pertinaz inclinación armada de

alterar el orden y generar un clima malsano de equivocada convivencia, podríamos llegar a las siguientes observaciones:

Los múltiples esquemas implementados en torno de la disminución de las drogas; desde el cultivo, producción de la materia prima, comercialización, y envío al exterior, y el manejo del tráfico de precursores, insumos, armas, y divisas, progresivamente colocarán en situación crítica a los grupos en armas, no obstante el acumulado logrado, dado el efecto y resultados logrados, como también del parcial desplazamiento del negocio ilícito a los países vecinos.

Surgen nuevos elementos que pueden ser de efectos importantes como la reinserción individual o por grupo de insurgentes, que de suyo tienen el agregado de suministrar información de la organización, que constituye una vulnerabilidad para el grupo como la identificación de los apoyos que en la clandestinidad obtienen ganancias económicas.

El proceso que adelanta el gobierno con las autodefensas ilegales, de resultar exitoso, dará algunas facilidades de disponibilidad de tropa experimentada que bien puede ser empleada en sectores de mayor interés y en su defecto utilizar tropa regular para el mantenimiento de las zonas abandonadas y de la población campesina que las habitan.

En las actuales circunstancias confluyen la decisión política, el convencimiento del pueblo colombiano a favor de la causa, la fortaleza militar en crecimiento y el apoyo de importantes sectores de la comunidad internacional. Es claro precisar que por la vía de las armas la insurgencia no llegará al poder político de la nación, pero sí puede causar serias pertur-

baciones para el desarrollo de la nación y potencialmente debilitar al Estado.

No podemos desconocer el cambio que se está dando en las gentes de bien, que han tomando partido, dentro de las posibilidades que les ofrece la ley y la democracia, para sentar las bases de una cultura de respeto, tolerancia y de convivencia.

Como nunca antes, en los últimos lustros vivimos un momento coyuntural que nos puede facilitar el debilitar considerablemente las estructuras del terrorismo en todas sus manifestaciones, que las coloque, como ya se afirma, en el umbral del principio del fin, creando así las condiciones para un acuerdo político, o la prolongación de la confrontación hasta colocar la amenaza en condiciones ínfimas de perturbación, de control manejable.

Paralelo entre el Foro de São Paulo y el Plan Estratégico de las FARC ⁶

Existen importantes coincidencias procedimentales y estratégicas entre las proyecciones globales del Foro de São Paulo y los objetivos finales del Plan Estratégico de las FARC. Por supuesto, ambos confluyen en el resurgimiento del marxismo-leninismo y la implantación del llamado socialismo del siglo XXI en el hemisferio.

El utópico sueño de “Jacobo Arenas” y sempiterna añoranza de la dictadura cubana, comenzó a tomar forma en el hemisferio cuando ya generalizado los movimientos subversivos

de Colombia atendieron la invitación de Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva en 1990, la representación estuvo a cargo del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); Hugo Chávez se inscribiría en 1995.

Lula Da Silva crea el Foro de São Paulo, para desprestigiar el Foro de Davos, desconocer la continentalidad de la OEA, dejar sin valor el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), retirar la influencia geopolítica, geoestratégica y económica de los Estados Unidos, a la par con la mitificación de Fidel Castro y la dictadura cubana. No es nada extraño entonces que en abril de 2009, Lula, sin ocultar su simpatía por las FARC, les pregunte ¿porqué no podrían llegar al poder por la vía electoral?

Chávez, Ortega, Correa y Lula olvidan que las FARC son terroristas, secuestradores, genocidas, narcotraficantes y extorsionistas, las ponderan como una fuerza política rebelde. El engranaje del maquiavélico plan comunista contra Latinoamérica, parte de la arcaica idea que a pesar de su estruendoso fracaso en otras latitudes, para las FARC y sus compinches, el vetusto comunismo tiene vigencia y es la solución a los males que aquejan a Latinoamérica.

Por desgracia, a las erosionadas democracias regionales, se suma la ineficiencia crónica de las castas políticas que han mal gobernado los países, situaciones que han favorecido que la verborrea populista, haya llevado a demagogos comunistas a los palacios presidenciales de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, y Argentina, así como a sus

correligionarios izquierdistas en Chile, Uruguay, Antigua y República Dominicana.

En medio de ese entorno, el sagaz y ladino mandatario venezolano Chávez encontró terreno abonado para liderar el proyecto de integración pro cubana disfrazado con los pintorescos nombres del ALBA, el Congreso Bolivariano de los Pueblos y luego la Coordinadora Continental Bolivariana, que es algo así como la congregación de embajadas itinerantes de las FARC en todo el continente, bajo la dirección del terrorista dominicano Narciso Isa Conde.

Todo este embrollo tiene mejor comprensión en el análisis de los documentos descifrados de los archivos electrónicos de los computadores, memorias USB y discos duros, hallados en la guarida de “Raúl Reyes” en Angostura, Ecuador.

Del acervo encontrado en los ordenadores del terrorista se infieren las orientaciones geopolíticas del Foro de São Paulo, la incidencia paralela de Fidel Castro en el entorno internacional pro subversivo y de ‘Tirofijo’ en el andamiaje de las FARC. Pero al mismo tiempo, quedó al descubierto todo el enramado del complot contra Colombia, algo que los afectados no han entendido o no han querido comprender en su verdadera dimensión.

Un examen de inteligencia estratégica para determinar la capacidad de más probable adopción de los enemigos de la democracia en Colombia, apunta a demostrar que las FARC ni han renunciado a su Plan Estratégico ni a su objetivo final de la toma del poder para instaurar una dictadura totalitaria.

En el orden internacional, el mismo examen indica que

los complotados contra Colombia tampoco han renunciado al propósito de unificar gobiernos marxistas en la región. Por esta razón, unos y otros insisten en meter el caballo de Troya con el argumento-falacia, de hacer un acuerdo humanitario que conduzca a la paz en el país. Y en este punto específico radica el veneno del asunto.

El acuerdo humanitario pretende resucitar el cadáver político de las FARC y el consecuente reconocimiento del estatus de beligerancia con la posibilidad de abrir embajadas en Quito, Caracas, La Paz, Managua y hasta en París. La amañada actitud de Correa para reanudar las relaciones con condiciones imposibles de satisfacer tales como entregarle los computadores y negar que su contenido sea cierto, es parte de la misma estrategia.

Para los integrantes del Foro de São Paulo, especialmente para las FARC, la única paz posible y valedera en Colombia, ocurrirá cuando ese movimiento armado ilegal gobierne el país y se integren al proyecto geopolítico de la izquierda encabezada por los mandatarios vecinos de Suramérica, y en el Caribe, Castro y Ortega. Lo demás es pecar en la ingenuidad y desconocer que el Plan Estratégico de las FARC, marcha a la par con los proyectos del Foro de São Paulo, y que ambos coinciden en el mismo objetivo de esclavizar a Colombia.

La información contenida en los computadores de Raúl Reyes es comprometedor para aclarar el alcance del Foro de São Paulo y la labor de equipo de sus integrantes. Por ejemplo, mientras los lenguaraces presidentes de Ecuador y Venezuela, tenían a uno de sus ministros del despacho en tratos perma-

nentes con las FARC, Lula tenía a cinco de ellos y a su Secretario General, incluido Marco Aurelio García quien actúa como el anfitrión de Piedad Córdoba en este periplo. Y qué coincidencia: En los computadores de Reyes, aparece escrito muchas veces el nombre del comunista Marco Aurelio García como el enlace ideal, como el estafeta de las FARC con Lula, como el eslabón de la cadena de argucias contra Colombia, tejidas por el ala radical del PT y los comunistas brasileños.

Las FARC y su coro de proselitistas, montaron otro episodio del sainete, con el cuál pretendían poner al gobierno Uribe contra las cuerdas durante la reciente Cumbre de las Américas, pero la rutilante estrella mediática del presidente Barack Obama, opacó el pretendido espectáculo. No obstante la diplomacia paralela de las FARC, continúa con el desarrollo del plan estratégico y ninguna de estas realidades debe causar extrañeza. El frente internacional de las FARC cuenta con el apoyo de varios gobiernos hemisféricos proclives al terrorismo. Hay en ciernes un complot contra Colombia, del cual los gestores del Foro de São Paulo no se han arrepentido.

En el caso de Venezuela y su actual gobierno, existen pruebas contundentes de su vinculación con las FARC, cuyo brazo político también es llamado Movimiento Bolivariano. Todo parece indicar que ello fue una de las razones por las cuales el alto mando militar le quitara su apoyo a Chávez y se presentara la pérdida temporal del poder en abril de 2002.

Medios de comunicación venezolanos han mostrado pruebas de visitas efectuadas por delegados de Chávez a la cúpula de la guerrilla. Un confeso guerrillero de las FARC

apareció dentro del grupo de escoltas más cercano a Chávez en una visita oficial a Colombia. Al decir de un general retirado de Venezuela, el país se había convertido en un "aliviadero" para las FARC.

En el caso concreto del Capitán Rodríguez Chacín, hombre de confianza de Hugo Chávez, desde junio de 1999 ha ingresado a Colombia en siete ocasiones. Solo en dos de esas ocasiones el gobierno colombiano considera que obtuvo autorización para ingresar, las otras han sido entradas clandestinas. Investigadores colombianos precisaron que Rodríguez Chacín se había convertido en el enlace personal entre Hugo Chávez y el cabecilla principal de las FARC, Manuel Marulanda, alias "Tirofijo", y en un intermediario en la negociación de secuestros cometidos en la frontera entre Colombia y Venezuela.

En febrero de 2000 se llevó a cabo un encuentro entre Rodríguez, "Tirofijo" y Jorge Briceño Suárez, alias "Mono Jojoy", en el Caguán. Un mes más tarde, el director saliente de la DISIP, teniente coronel Jesús Urdaneta, quien renunció a su cargo por diferencias con Rodríguez, reveló que Chávez le ordenó entregar por intermedio de Rodríguez \$300.000 dólares a las FARC.⁷

No solo con las FARC ha tenido buenas relaciones Chávez, también con el Ejército de Liberación Nacional-ELN, el cual utilizó a Caracas como sede de su oficina para el manejo directo de los asuntos de Pablo Beltrán, segundo cabecilla del ELN. Este guerrillero contó con protección de la DISIP y fue tratado prácticamente como diplomático. Igualmente el otro cabecilla del ELN, Antonio García, pasa la mayor parte del

tiempo en Venezuela y tiene acceso directo al círculo más cercano a Chávez. Las investigaciones indicaron que Chávez y los cabecillas del ELN se reunieron en un hotel cercano al Palacio de Miraflores, en donde el ELN contaba con una discreta oficina.

Esa relación no es reciente. Desde 1997, antes de que Chávez asumiera la presidencia, se registró un viaje a la serranía de los motilones cerca de la frontera con Venezuela, en donde el ELN tenía su campamento central. Allí, se reunió con Nicolás Rodríguez, alias Gabino, máximo líder de ese grupo terrorista.

En un vídeo entregado a tres periodistas venezolanas por militares opositores a Chávez, se mostró la movilización por territorio colombiano de un grupo de militares venezolanos, armados de fusiles y en uniforme de combate. En el vídeo se aprecia la reunión de los militares venezolanos con el comandante del frente 33 de las FARC, Rubén Zamora, quien se refiere a la relación entre las FARC y Venezuela como "una relación de hermandad, solidaridad, de mutua cooperación en aspectos que permitan contribuir a aclimatar la reconciliación y la paz, que pueda haber tranquilidad en los ciudadanos venezolanos". Zamora critica a la Guardia Nacional venezolana por su escasa colaboración, y afirma: "No ocurre lo mismo con el Ejército Venezolano con quien tenemos buenas relaciones".

Las acciones del gobernante venezolano de expandir la semilla socialista de su corte y estilo, es abierta y manifiesta en América Latina, en marzo de 2006, el Partido de Acción Nacional acusó a Chávez de apoyar la campaña del candidato me-

xicano Andrés Manuel López Obrador. En Mayo del mismo año, el presidente de Guatemala, Oscar Berger, denunció igual interferencia en Centroamérica, mientras que el mandatario nicaragüense Enrique Bolaños lo acusó de apoyar a los sandinistas. Ese mismo mes, el ex presidente bolivariano Jorge Quiroga acusó a Chávez ante la OEA por intervenir en los asuntos internos de su país; simultáneamente, las cámaras de la producción de Ecuador rechazaron la injerencia de Chávez en esa nación. En Julio de 2007, el primer ministro de Perú, Jorge del Castillo, denunció la injerencia de los seguidores de Hugo Chávez en la región de Puno, con el fin de desestabilizar a su país.⁸

Las marchas de indígenas contra el gobierno en Colombia han estado siempre salpicadas de los dólares provenientes del gobernante venezolano y el Polo Democrático indudablemente se beneficia no solo ideológicamente sino también en apoyo económico con mayor razón.

Daños que la conspiración política le ha hecho a Colombia

La conspiración política, guerra política, en donde juega un papel preponderante la guerra jurídica, la desinformación y la manipulación del tema de los derechos humanos, le ha causado al Estado colombiano entre otros los siguientes daños:

- En dignidad e imagen: Distorsiones sobre la realidad de los derechos humanos, el país es cuestionado con frecuencia internacionalmente con la ayuda de ONGs colombianas. Colombia

es vista como una nación donde no se aplica la democracia, donde existe terrorismo de Estado, donde la Fuerza Pública está al servicio de una clase dirigente insensata y las clases más necesitadas no tienen posibilidades políticas, ni de desarrollo, todo por efecto de la desinformación.

- En lo político: El país está polarizado, lo cual produce crímenes selectivos de militantes de izquierda, miembros de organismos de derechos humanos, militares retirados y empresarios. Las medidas expedidas en defensa de la institucionalidad democrática, son controvertidas o derogadas. El Estado en sí, ha quedado impotente para reaccionar oportunamente a la amenaza subversiva y grupos de justicia privada. La guerra política incentiva el accionar de la guerrilla, en tanto desmotiva la legítima defensa a los ciudadanos.

- En lo político-militar internacional: Aunque hubo actitudes y amenazas bélicas después de la “Operación Fénix” en la frontera con Ecuador, y el envío de tropas a la frontera con Colombia, por parte de Venezuela, estas amenazas no se van a concretar, seguramente porque los países de FSP no están interesados en desatar una guerra entre países latinoamericanos, más bien, con estas actitudes amenazantes lo que buscan es brindarles a las FARC un respaldo político y militar, y generar un ambiente en donde los inversionistas no consideren a Colombia entre sus potenciales mercados, con impacto necesariamente en la desaceleración económica.

- En lo diplomático: El servicio exterior ha sido manipulado por la subversión política a favor de sus programas. Colombia recibe presiones de organismos internacionales para que

adopte medidas de imposición o derogación, en asuntos que son expresión de su soberanía y independencia. El país está en la mira de intervenciones extranjeras en varios aspectos que sólo le incumben a su propia autonomía.

- En lo jurídico: Hay infiltración en organismos de justicia y control, tales como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Las presiones políticas sobre la administración de justicia tienen responsabilidad en el alto índice de impunidad que agobia al país.
- En lo económico: Colombia llegó a estar clasificada entre los cuatro países de más alto riesgo para inversiones internacionales. Hay presión permanente para evitar los desembolsos con destino al Plan Colombia en su componente militar y contra el narcotráfico.
- En lo comercial: Por distorsión del tema de derechos humanos, Colombia es amenazada frecuentemente con sanciones comerciales por la Unión Europea y los Estados Unidos.
- En lo social: La infiltración en algunos sindicatos ha desvirtuado las reivindicaciones laborales y ha tergiversado el sentido sindical. Aunque ha sido contrarrestada, aún es notoria la infiltración en el medio universitario.
- En lo cultural: Hay infiltración en expresiones culturales como el teatro, para emplearlo como medio de difusión de ideologías ajenas al espíritu democrático del país.

Las amenazas contra la economía surgen como parte de una estrategia, del FSP a través de sus miembros, de desestabilizar a Colombia en el ámbito político y diplomático, como

ocurrió en enero de 2005 con motivo de la captura en territorio venezolano del “canciller” de las FARC, Rodrigo Granda, Chávez ordenó el cierre de la frontera con Colombia, ocasionando pérdidas millonarias a los comerciantes de ambas naciones. Para superar la crisis Álvaro Uribe se vio obligado a reunirse con el mandatario venezolano, a pesar que Chávez había permitido que el guerrillero estuviera en su país.

En otro acontecimiento Venezuela y Ecuador decidieron cerrar las fronteras después de que el 1 de marzo de 2008 tropas colombianas atacaron a un campamento de las FARC ubicado en territorio ecuatoriano y donde fue abatido el guerrillero Raúl Reyes.

A raíz de lo anterior, se desató una crisis diplomática en el que se produjeron millonarias pérdidas económicas, tal como lo menciona la presidenta seccional de la Fenalco, Gladis Navarro, que "las pérdidas millonarias, estuvieron por el orden de los siete mil millones de pesos y afectó a todos los sectores económicos de frontera". Adicionalmente Navarro indicó que para el sector comercial, la crisis provocó una caída de un 40 y 50 por ciento en las ventas, de acuerdo con el registro de la FENALCO.⁹

Los transportadores de carga internacional reportaron la parálisis de 540 camiones pesados, que no pudieron salir desde Cúcuta con destino a las localidades fronterizas venezolanas de San Antonio o Ureña. Según el DANE el 17,4 por ciento de las exportaciones totales colombianas de 2007 tuvo como destino Venezuela y el 3,2 por ciento fue a Ecuador.

Entre enero y noviembre de ese mismo año, el comercio

entre Colombia a Venezuela fue de 5.700 millones de dólares. Gran parte de esas exportaciones son de Colombia hacia Venezuela, 4.400 millones de dólares, frente a importaciones de 1.200 millones de dólares en el mismo período.

En el caso de Ecuador, las ventas colombianas llegaron a 1.160 millones en comparación a unas importaciones de 670 millones. Lo que demuestra que en este cierre parcial de fronteras, Colombia fue el país que más perdió y de cerrarse definitivamente la frontera, Colombia tendría que abrirse nuevos mercados donde exportar sus productos, dado que Venezuela y Ecuador son su segundo y tercer socio comercial respectivamente, después de Estados Unidos.

Esto demuestra que Hugo Chávez y Rafael Correa, actúan coordinadamente, como miembros del FSP, para crear un clima desestabilizador en todos los ámbitos, para finalmente crear un ambiente en Colombia donde se pueda alcanzar el proyecto político.

Como gran corolario, habría que entender y concluir que Colombia desde hace más de cinco décadas está en la mira del comunismo internacional. Que la caída del muro de Berlín, la desaparición fragmentada de la Unión Soviética y la pérdida de justificación para la lucha armada en el mundo, no fueron para Colombia nada más que un motivo para inventar nuevas formas de perpetuación de un movimiento armado desgastado, sin norte, sin metas políticas creíbles, criminalizado, corroído por el narcotráfico y que en últimas ha recibido el espaldarazo internacional del Foro de São Paulo, que emergió de las profundidades oscuras de mesiánicas visiones como inmenso salvavi-

das para darle un nuevo aire a esta letal organización.

Que los dos movimientos armados ilegales de Colombia, como tales, están a la expectativa de nuevos horizontes, al amparo de una comunidad internacional cada vez más afecta a la causa que se les estaba dificultando por el empeño de una resistencia tenaz de las organizaciones de la fuerza pública colombiana (Fuerzas Militares y Policía Nacional) durante varias décadas y la casi total destrucción en los últimos seis años. Que la izquierdización de varios gobiernos vecinos o cercanos en centro y sur América pueden ser la salida triunfal a la “revolución en armas”, perdidas como estaban las esperanzas por alcanzar el poder por la vía armada.

El otro elemento colombiano vinculado al Foro de São Paulo, el Polo Democrático Alternativo, se ha constituido en una fuerza política importante en los últimos años y cuenta en sus filas con elementos procedentes de varios movimientos guerrilleros o facciones políticas proclives a los mismos. Desde su creación, ha estado en permanente contacto con Hugo Chávez Frías y con Lula Da Silva y es la organización política nacional que más se favorecería con un cambio de régimen en Colombia, al pasar el poder de uno de los partidos tradicionales, liberal o conservador, a uno marcadamente de izquierda, con lo cual se cerraría el cordón de es socialismo moderno y suramericano que Chávez impulsa en los países del área.

El Foro de São Paulo es una amenaza para la estabilidad democrática en Colombia debido a que gran parte de los miembros del FSP han protagonizado golpes de Estado en sus respec-

tivos países, y lo más preocupante es que han sido apoyados por gobiernos como el de Hugo Chávez. Como son los casos de Ollanta Humala el 29 de octubre del 2000, quien lideró un golpe de estado contra el entonces presidente Alberto Fujimori, y el 1 de enero de 2005 Humala apoyó abiertamente el cuartelazo de su hermano contra el presidente Toledo. Pero como no pudo alcanzar el poder por estos medios, decidió utilizar los medios democráticos lanzando su candidatura a la presidencia del Perú.

Otro claro ejemplo es el de Evo Morales, quien antes de llegar al poder organizó cierres de carreteras y manifestaciones callejeras para derrocar a dos presidentes: Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre 2003 y Carlos Mesa en junio de 2005.¹¹ Pero finalmente optó por la estrategia democrática participando en las elecciones presidenciales de 2005. El Polo Democrático no sería una excepción, con el ingrediente adicional de jugar dos cartas paralelas, el sistema electoral y la lucha armada de las FARC y el ELN.

NOTAS

1 Juan Salcedo Lora, Centro de Análisis Socio Políticos, compilador

2 En principio trataron las FARC de responsabilizar al Ejército de intentar un rescate militar, pero posteriormente les tocó obligadamente por las circunstancias, contar la terrible verdad de asesinar a sangre fría once diputados inermes que tenían como rehenes.

3 Vieira, Gilberto. Dos enfoques marxistas sobre el 9 de abril. Colección Izquierda Viva.

4 Gilberto, Vieira. Combinación de todas las formas de lucha, Ediciones Sudamérica, 1988.

5 Harnecker, Martha. Entrevista a Gilberto Vieira, Secretario General del Partido Comunista Colombiano. Ediciones suramericanas.

6 Teniente Coronel Alberto Villamarín Pulido, oficial del Ejército de Colombia en uso de retiro.

7 Peña Esclusa, Alejandro. El Foro de Sao Paulo contra Álvaro Uribe. Ediciones Fuerza Productiva. Caracas, Venezuela. 2008

8 Ibíd.

9 Tomado de:

<http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/economia/finanzas/perdidasmillonarias%20por%20cierre%20de%20frontera%20Colombia-Venezuela/134682>

10 Tomado de:

<http://notasdesdemiciudad.blogspot.com/2009/01/crisis-entre-colombia-venezuela-y.html>

11 Ibíd.

6.

Perú: La Guerra Jurídica contra las Fuerzas Armadas

Colaboración de Josué Meneses Huayra ¹ y Jorge Serrano Torres ²

Mientras el Poder Judicial peruano atraviesa por una grave crisis y anuncia una nueva reorganización tras descubrirse un caso de corrupción cometido por un Vocal Supremo Provisional que terminó en la cárcel, es necesario conocer las redes de influencia y a sus operadores que acaparan una ingente cooperación internacional destinada al fortalecimiento de la vapuleada justicia peruana.

Entonces, saldrá a la luz un entramado de ONGs neomarxistas o de “izquierda caviar”, que buscan hacer prevalecer su sesgada visión ideológica en áreas tan sensibles como la administración de justicia, derechos humanos, defensa nacional y seguridad ciudadana.

Los orígenes y mutaciones

Para comprender los hechos del presente hay que adentrarse en la historia que nos ayudará a desentrañar el accionar de un sector izquierdista metamorfoseado en las instituciones democráticas de la actualidad, con el fin de alcanzar sus obje-

tivos estratégicos en función de su orientación ideológica y política, que incluye la desarticulación de organismos claves para la estabilidad y gobernabilidad del Perú.

Una comunidad ideológica neomarxista fue acogida por el gobierno de transición de Valentín Paniagua en el 2001, tras la caída de la administración Fujimori. Este grupo se caracteriza por haber militado en tres agrupaciones de extrema izquierda en los años sesenta y setenta: Vanguardia Revolucionaria (VR), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). A ellos se han sumado algunos ex dirigentes del Partido Comunista pro moscovita.

a mayoría de estos personajes se identifican porque en sus años de formación universitaria fueron fervorosos propulsores de la lucha armada para destruir el orden establecido, incluso los tres primeros grupos (VR, PCR y MIR), abrazaron públicamente el maoísmo clásico de la República Popular China, durante los años de la cruenta revolución cultural de Mao Tse Tung.

or consiguiente, han sido enemigos de la democracia representativa, a la que tildaban de “democracia formal” y radicales antagonistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a las que denostaban como “guardianes reaccionarios del orden establecido” y mera “prolongación represiva de los intereses del imperialismo estadounidense y de sus amaestradas burguesías criollas”.

Aquella Vanguardia Revolucionaria (VR), tuvo como primer secretario general a Ricardo Napurí y los demás líderes fundadores fueron Ricardo Letts Colmenares, César Benavides,

Edmundo Murrugarra Florián y Jorge Villarán. Una de las iniciales tareas de su proyecto fue captar a estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Agraria de La Molina principalmente, usando en muchos casos como cantera de reclutamiento a la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC), un movimiento universitario católico fundado en 1941, afiliado al Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos (MIEC), ambos reconocidos por la Santa Sede, pero que en aquellos tiempos era aprovechado como centro de congregación de algunos que se consideraban futuros “brazos intelectuales de la revolución”.

En ese contexto serían ganados Javier Diez Canseco, Oscar Dancourt Masías, Agustín Haya de la Torre, Eduardo Figari, Juan Sánchez Barba, Víctor Torres, Alfredo Stecher, Alberto Gonzáles, Sinesio López y Julio César Mezzich, quien años más tarde se integraría a las huestes terroristas de Sendero Luminoso, a la cabeza de la facción Vanguardia Revolucionaria-Político Militar (VR- PM).

Gran parte de ellos apoyaron las guerrillas iniciadas durante 1965 en el Perú, por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). VR respaldó a los sediciosos y tuvo contacto con los dirigentes del MIR y del ELN. A tal punto llegaron sus lazos con la subversión marxista guevarista, que uno de los dirigentes de VR fue invitado por Luis de la Puente Uceda a “conferenciar” sobre la lucha armada a la base guerrillera de Mesa Pelada (Cusco).

Las esquirlas de los grupos marxistas

Para tener una idea más clara sobre las coordenadas ideológicas y la estratagema violentista de estos grupos, basta recordar que ante el fracaso del proceso subversivo del MIR, VR sentenció lo siguiente: "Las guerrillas del MIR parecen no haber explotado correctamente el instrumento fundamental con el cual deben enfrentarse a las Fuerzas Armadas del poder burgués: el arma subjetiva, desmoralizarlos, cansarlos, no presentar frente, darles tiempo para que se corroan, ganarles la moral, descomponerlos internamente, esperar a que se pudran desde adentro".

Antes de continuar, una referencia importante: años más tarde, cuando estos grupos marxistas ya habían mutado, el periodista peruano Herbert Mujica Rojas, los calificó con acierto, aunque solitariamente al principio, como "izquierda caviar" en el Perú, recordando la expresión formulada por el periodista francés Daniel Benoits, respecto al sinuoso proceder de la clase política izquierdista en Francia, hace unos 20 años.

Siguiendo el relato, de VR-PM se desprendió el Partido Comunista Revolucionario (PCR), liderado por Manuel Dammert Ego-Aguirre. A fines de los años setenta, en VR (y por extensión el PCR y el MIR) se fijan como objetivo "ante la crisis política de situación pre-insurreccional", formar varios frentes que los diferencien de Sendero Luminoso y posteriormente del MRTA que empezarían a comienzos de la década de los ochenta su accionar terrorista. El frente de la lucha legal, electoral, parlamentaria, municipal y en los medios de comuni-

cación; el frente de la lucha de las masas populares organizadas y el frente de la lucha armada.

En los años setenta además, VR se integra al frente Unidad Democrática Popular (UDP) y publica el semanario Amauta, codirigido por Oscar Dancourt y Fernando Rospigliosi; después ante la inviabilidad de la lucha armada de Sendero Luminoso, participan en las elecciones de la Asamblea Constituyente que redactará la Carta Magna de 1979, aunque VR luego la negó. Mientras, otros buscaron reciclarse en el régimen democrático, como el PCR de Manuel Dammert y la vertiente del MIR, base de operaciones de los futuros componentes de la denominada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR): Carlos Tapia y Javier Ciurlizza, y del ex ministro de Justicia del Gobierno de transición de Paniagua, Diego García-Sayán.

La danza con lobos

En 1986, las páginas de la revista "Cambio", vocero del grupo terrorista MRTA, acoge la siguiente propuesta de Francisco Soberón a favor de un diálogo con los senderistas: "Hay violencia por parte de Sendero, pero se deben buscar los canales necesarios de diálogo para que haya la paz con justicia social que todos deseamos".

Se trata del mismo Soberón de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y que antes fuera miembro del comité central de Vanguardia Revolucionaria (VR), así como agitador de movimientos campesinos en la época de la reforma

agraria del gobierno militar izquierdista del general Juan Velasco Alvarado en los años setenta, ubicándose luego en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en el gobierno de Belaunde.

En realidad, desde 1983 el sociólogo Francisco Soberón empezó a trabajar con Aprodeh, junto a un equipo de su misma tendencia ideológica marxista, compuesto por Martha Giraldo, Fernando Rospigliosi (a quien conocía desde la universidad), Manuel Piqueras y Liliana Panizo. A tal punto llega la confianza y empatía entre ellos, que incluso durante el gobierno de Toledo en el 2001, la Revista Ideele de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL) se preguntaba: ¿Pero por qué si está Diego García Sayán de ministro de Relaciones Exteriores y Fernando Rospigliosi en el Ministerio del Interior, deben haber organismos de derechos humanos?

Pero la mutación no se detuvo: en la temática de los derechos humanos, del mismo modo aterrizaron otros neomarxista, como Sofía Macher Batanero (llegó a ser Directora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos e integrante de la CVR) y su esposo Hans Landolt Pardo, ex integrante del Partido Comunista Revolucionario y actual conductor de un programa de entrevistas y reportajes en Televisión por Cable, financiado por la ONG IDL, donde él mismo es director.

Recapitulemos: a inicios de los ochenta, los camaradas de Vanguardia Revolucionaria (VR), del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) ya no veían a Sendero Luminoso (SL) como el

aliado del "campo popular", sino que empezaban a tomar distancia, sobre todo cuando en la década crítica de los ochenta y principios de los noventa el violento accionar terrorista mediante coches-bomba, asesinatos selectivos de militares y civiles, destrucción de infraestructura y apagones, alcanzaron a varios dirigentes de la izquierda.

Pese a que muchos tomaron distancia de la crueldad criminal de SL dirigido por Abimael Guzmán, no lo enfrentaron como era debido y tuvieron un discurso ambiguo respecto al fenómeno terrorista, posiblemente debido a que les provocaba sentimientos encontrados, ya que Sendero Luminoso, en parte llevaba a la práctica lo que ex camaradas como Diego García-Sayán y Carlos Tapia (ambos del MIR) o Ronald Gamarra, entre otros, habrían proclamado en los claustros universitarios y las movilizaciones callejeras.

ONGs: Caballo de Troya en el Poder Judicial

Mas bien estos dirigentes y militantes de izquierda afianzaron su visión y actitud negativa respecto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, luego de haber sido cómodos y vacilantes espectadores de la batalla que se dio en el terreno de las armas entre el Estado peruano y las hordas senderistas. Este es el momento del recodo y viraje estratégico.

En efecto, un grupo se introducirá en el tema de los derechos humanos, con la misión de enfrentar a las Fuerzas Armadas en el nuevo escenario de conflicto (el terreno legal), para lo cual controlarán la Defensoría del Pueblo, en especial du-

rante la precaria (no fue ratificado por el Congreso, ni renunció), pero extensa etapa de Walter Albán, también de procedencia marxista.

Completando la tenaza, operadores políticos vinculados a la ahora, izquierda neomarxista o izquierda caviar, que venían actuando desde ONGs dedicadas a la promoción de los derechos humanos, asumieron posiciones de poder en el Gobierno de Transición 2000-2001 y paralelamente, lograron copar la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

A consecuencia de estos hechos, el Estado peruano se allanó al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de realizar nuevos juicios penales a los cabecillas y militantes terroristas previamente sentenciados y ya en prisión, al tiempo que representantes de la CVR realizaban discretas conversaciones (que luego fueron conocidas por la opinión pública) con la cúpula de Sendero Luminoso encarcelada en el penal de la Base Naval del Callao (Lima), concertando facilidades para materializar el nuevo escenario judicial.

Esto fue posible gracias a que durante la gestión transitoria del presidente Valentín Paniagua Corazao, lograron el manejo del Ministerio de Justicia con Diego García-Sayán (Noviembre 2000-julio 2001), quien después extendió su poder al llegar a ser Ministro de Relaciones Exteriores en el régimen de Toledo (Julio 2001-julio 2002), con el secreto pero decisivo apoyo de Eliane Karp de Toledo y el contexto generado para sostener la feroz persecución política y la justicia jacobina contra los adversarios del toledismo, militares y policías que com-

batieron a SL y el MRTA, junto a ex integrantes del gobierno de Fujimori, tanto culpables como inocentes.

Desde esta posición de fuerza política, García-Sayán forjó sólidos nexos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, facilitando el allanamiento del Estado peruano frente a los numerosos casos abiertos ante dichos foros internacionales en base a pruebas contradictorias y endebles, por presuntas violaciones de los derechos humanos, a cargo del mismo Estado peruano o "sus agentes" en las Fuerzas Armadas y policiales. Aunque se debe reconocer que varios casos llevados ante esa instancia supranacional eran verdaderos abusos contra ciudadanos peruanos.

Resalta un hecho escandaloso: el de la ex agente de inteligencia peruana, Leonor La Rosa Bustamante, que fue indemnizada con 120 mil dólares por el presidente Toledo, en base a supuestas torturas que denunció haber sufrido en el Servicio de Inteligencia del Ejército, no obstante que luego surgieron evidencias que la desmintieron a nivel judicial.

Miguel Jugo Vieira y Heriberto Benítez Rivas, en representación de la Asociación Pro Derechos Humanos, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual luego fue avalado por los ministros Diego García-Sayán y Fernando Olivera.

A continuación, como era de esperarse, una vez alejado de sus funciones gubernamentales, García-Sayán fue nombrado Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el período 2004-2009, sin dejar su cargo como Director Ge-

neral de la Comisión Andina de Juristas (CAJ).

En este panorama, los neomarxistas de la izquierda caviar no dejaron de reforzar ONGs como el Instituto de Defensa Legal (IDL), de donde procede Ronald Gamarra; la misma Comisión Andina de Juristas, de García-Sayán (MIR) y Enrique Bernal Ballesteros (ex Partido Socialista Revolucionario).

Luego aparecerá, para completar el círculo, una extensión del IDL: el consorcio Justicia Viva, y un tercer grupo se situará en el tema de la descentralización, a la cabeza de Manuel Dammert Ego-Aguirre, Carlos Barnechea Lercari y Rudecindo Vega Zavaleta (quien después fue ministro de Vivienda y Construcción en el gobierno de Toledo).

Otros primos hermanos ideológicos se instalarán en los temas de la seguridad ciudadana y defensa nacional, tras ser nombrados para dirigir el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional de Inteligencia en el gobierno de Toledo (Fernando Rospigliosi, Carlos Basombrío, Gino Costa y Wilfredo Pedraza, como jefe del Instituto Nacional Penitenciario-INPE, entre otros).

Pero varias de sus ONGs fueron muy "pragmáticas". Por ejemplo, la Comisión Andina de Juristas de Diego García-Sayán, trabajó con el gobierno de Alberto Fujimori, particularmente en el ámbito de la reforma de la administración de justicia y la Academia de la Magistratura, como parte de un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) suscrito en 1998.

A su turno, Abraham Siles Vallejos, de IDL-Justicia

Viva, ha sido un funcionario en el PNUD y laboró en el llamado proceso de Modernización y Reforma del Poder Judicial los años 1997, 1998 y 1999. Pero tras el derrumbe del régimen de Fujimori y la instauración del gobierno de transición, visualizó junto a sus pares un nuevo campo de acción: el control del Ministerio de Justicia y del aparato judicial, a través de procuradores Ad Hoc y una red de fiscales y jueces, aunado al copamiento de la millonaria cooperación internacional.

¿Tontos útiles o cómplices?

Como se mencionó, el entramado judicial dominado por estas redes de neomarxistas reciclados, empieza allí. Coincidiendo con el liderazgo de Diego García-Sayán, quien al asumir el cargo de Ministro de Justicia en noviembre del 2000, firma dos resoluciones con carácter de "estrictamente secreto" (no publicadas en el diario oficial El Peruano), sobre conmutación de penas y rebajas de sentencias para liberar a dos terroristas de la cárcel.

Una semana después firmará otras once resoluciones supremas, éstas sí publicadas el 2 de diciembre del 2000 en la gaceta oficial, para beneficio de indultos y, a los tres días, se publicarían otras 8 resoluciones otorgando perdón a igual número de terroristas sentenciados. El 10 de diciembre del 2000 salen a luz otras 10 normas de indulto a condenados por "traición a la patria". Es decir, en 15 días Diego García-Sayán indultó a 31 sentenciados por terrorismo.

Este fue apenas el inicio de su política de "huma-

nización" de los establecimientos penales, de flexibilización carcelaria, es decir, de liberación de cientos de terroristas sentenciados. Al respecto, según cifras publicadas sobre los últimos tres años del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por el diario Perú 21 en octubre de 2006, hasta el año 2003 había en las cárceles peruanas 1.064 subversivos, pero hoy sólo permanecen 290, ya que el Poder Judicial sigue liberando masivamente a terroristas de SL y del MRTA, al declararles fundados sus pedidos de semilibertad o de liberación por exceso de carcelería.

Es más, a la fecha existe un grupo de 547 personas acusadas de terrorismo pero que no han sido sentenciadas, es decir, que sus procesos continúan en la Sala Nacional para Casos de Terrorismo, que preside el vocal superior Pablo Talavera, quien ha sido denunciado por una fiscal y el procurador para casos de terrorismo Guillermo Cabala, de ser muy "condescendiente" con los acusados. ¿Y los terroristas libres donde están? Nadie lo sabe con certeza, por que favoreciendo la estratagema pro-terrorista, durante el gobierno de Toledo destruyeron lo que quedaba del sistema de inteligencia nacional con el falaz argumento de que estaba totalmente contaminado por la corrupción de la década pasada y recortaron drásticamente el presupuesto del sector militar y policial.

Según inteligencia policial, una parte significativa, si no mayoritaria, de los senderistas excarcelados no había abandonado sus convicciones ideológicas ni su sujeción a Sendero Luminoso al momento de salir de los establecimientos penales; por lo que se infiere que estarían en posición de reintegrarse a dicha organización criminal a fin de contribuir decisivamente

a restaurar las estructuras y los aparatos partidarios a nivel nacional.

Por otra parte, cuando fuera titular de Justicia, García-Sayán mantuvo a los procuradores Ad Hoc del caso Montesinos contratados por Alberto Fujimori, es decir, José Ugaz de la ONG Proética y a su socio Luis Vargas Valdivia. Pero antes de incorporar a Ronald Gamarra (de la ONG Instituto de Defensa Legal) a la procuraduría en asuntos de derechos humanos, convocó a Javier Ciurlizza Contreras como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y el 16 de enero del 2001, lo nombró presidente de la Comisión de Indultos, Derecho de Gracia y Conmutación de Penas para los casos de terrorismo. Quienes conocen el pasado de Ciurlizza afirman que militó en la filas del Partido Comunista Revolucionario y hace poco se hizo tristemente célebre cuando se difundieron unos audios donde se escucha a Ciurlizza intercambiar ideas en la Base Naval con los cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA, sobre varios puntos de agenda, como la irresponsable flexibilización carcelaria y la misma composición de la Comisión de la Verdad (CV), mientras Abimael Guzmán exigía que lo trataran como "preso político".

Acto seguido, Ciurlizza habría de ser secretario ejecutivo de la CV, para finalmente recalar en una dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por si fuera poco, en agosto de 2006, durante el gobierno de Alan García, se nombró como Vicepresidenta del INPE, a Susana Silva Hasembank, actual esposa de Javier Ciurlizza, quien ya se había desempeñado

como Segunda Vicepresidenta del INPE entre marzo de 2004 y febrero de 2006; además, ha sido asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Lima, Perú.

Otro integrante del aparato neomarxista caviar en el sector justicia, ha sido Iván Bazán Chacón, de la ONG Fedepaz (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz). Fue el primer secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y Conmutación de Penas. En este esquema de infiltración, no llamó la atención que en la procuraduría Ad Hoc anticorrupción se incluyera a Ronald Gamarra, cuyo historial es bien conocido, no sólo en los claustros de la Universidad Mayor de San Marcos, sino como activista de "Pueblo en Marcha" (fundado en 1983), que junto a la Unidad Democrática Popular de Cecilia Oviedo, hoy exiliada en México, fungían como brazo legal del MRTA.

Debido a estos antecedentes, no extraña el fundamentalismo de Gamarra y su actitud carcelaria para con los militares y policías acusados de presuntas violaciones de derechos humanos. A la luz de estos sucesos, resulta condenable la indolencia y en muchos casos complicidad abierta del gobierno de Alejandro Toledo, quien alertado del juego propio en que estaban inmersos estos personajes que usaban sus cargos y la política anticorrupción para sus venganzas político-ideológicas, no hizo nada para impedirlo y únicamente procedió a remover a un sector de ellos, cuando comenzaron a investigar denuncias de corrupción que salpicaban al propio Toledo y a sus familiares.

Peor aún, al designar a un nuevo procurador anticorrup-

ción, Toledo y sus asesores siguieron la misma tendencia: el elegido fue Antonio Maldonado, también ex militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR).

Circunstancias similares se produjeron en el Ministerio Público, donde se encumbró en el poder el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, que igualmente fuera del PCR en la Universidad Mayor de San Marcos. En el Poder Judicial el máximo exponente de la red neomarxista sería el vocal supremo César San Martín Castro, socio entre el 2000 y el 2004, del Estudio Benites de Las Casas, Forno & Ugaz Abogados. César San Martín es señalado por muchos como el teórico de gran parte de la legislación antigarantista y jacobina en materia judicial anticorrupción, aplicada desde el 2001 hasta la fecha.

Siempre con el obsesivo respaldo político y confabulaciones del entonces poderoso ministro de Justicia Fernando Olivera Vega, líder del FIM aliado del gobierno toledista, el vocal supremo César San Martín Castro, sería el creador de la figura jurídica de "complicidad en peculado" que habría servido para encarcelar a corruptos pero también a muchos enemigos políticos de la izquierda caviar.

Claramente, esta red neomarxista promovió el talionaje político y judicial atropellando principios básicos del Derecho, como la no retroactividad de las leyes; la preexistencia jurídica del delito a los hechos materia de acusación; la presunción de inocencia y el plazo perentorio de la detención sin sentencia, entre otros más; panorama que configura una violación sistemática del debido proceso en contra de los inculpados por la presunta comisión de actos de corrupción o violación de los

derechos humanos, que fueron juzgados durante las administraciones de los presidentes Paniagua y Toledo.

El grupo reciclado de los camaradas tiene además sus tontos útiles y ejecutores en la Judicatura. Para algunos podría estar en la segunda categoría Juan Jiménez Mayor, ex viceministro de Justicia y Secretario Técnico de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia- (Ceriajus), donde la izquierda caviar no dejó pasar la oportunidad para ubicar como "representante de la sociedad civil" a David Lobatón Palacios, activo operador de Instituto de Defensa Legal (IDL).

En este marco, el IDL y su hijo el consorcio Justicia Viva, habrían beneficiado mediante respaldo académico, social y de promoción mediática a varios magistrados anticorrupción: Inés Felipa Villa Bonilla, Inés Tello Valcárcel de Ñecco, Hilda Cecilia Piedra Rojas, Araceli Baca Cabrera, Susana Inés Castañeda Otsu, Carlos Ventura Cueva y Saúl Peña Farfán, entre otros.

En el área administrativa, durante el período en que fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Sivina Hurtado, estuvo en la secretaría técnica del Poder Judicial la abogada Rosa Mavila León (Universidad Mayor de San Marcos y ex militante del PCR). Mavila León no niega su pasado radical y ha reconocido en una entrevista al diario El Comercio en agosto de 2006, que siendo abogada defendió a un acusado de terrorismo que luego habría sido absuelto por la Corte Suprema. Además, ella ha sido una pieza clave: en la gestión de Toledo fue procuradora pública en asuntos judiciales y de te-

rrorismo del Ministerio del Interior, así como asesora en el Acuerdo Nacional por la Justicia.

Pero su influencia llegaría lejos, Rosa Mavila también ha ejercido como secretaria general del Ministerio de Educación y Coordinadora de la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial; docente del Programa de Capacitación para Fiscales y Vocales aspirantes a la Corte Suprema de la Academia de la Magistratura y antes integró el equipo técnico de la Iniciativa Nacional Anticorrupción que fuera encabezada por Monseñor Miguel Irizar, durante el Gobierno de Paniagua en el 2001. Como si fuera poco, en agosto de 2006, el Ministerio de Justicia, designó a Rosa Mavila, como jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Igualmente, en septiembre de 2006, surge otra muestra del poder de los lobbies de la izquierda caviar: la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) encargada de supervisar a las ONGs, nombró a Mariella Pinto Rocha, en el puesto de asesora principal de este organismo. Mariella Pinto es una profesional especializada en educación inicial, que ha trabajado desde el 2001 en el ministerio de Justicia a cargo del proyecto de reforma de los centros carcelarios y además estaría vinculada sentimentalmente a Diego García-Sayán.

El consorcio Justicia Viva

Por su condición de institución operativa del engranaje construido por la red neomarxista en el sector Justicia, es necesario conocer a la entidad "Justicia Viva" (JV): es un proyecto au-

todenominado "de participación y fiscalización ciudadana en la reforma judicial", a cargo de un consorcio integrado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Facultad y el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, junto a la Asociación de Jueces por la Justicia y Democracia, aunque este último grupo luego se apartó.

Con este proyecto, JV ganó en el área de justicia un concurso convocado por la USAID estadounidense y su "Oficina de Iniciativas Democráticas", mediante el cual JV recibe apoyo económico y académico durante tres años. Confirmando la sólida influencia de los neomarxistas en el consorcio JV, dicha institución tiene como actuales directivos y operadores a los siguientes personajes: Hans Landolt Pardo (Director General del IDL); Ernesto De la Jara Basombrío (Director General de Justicia Viva); Alfredo Villavicencio Ríos (Coordinador General); David Lovatón Palacios; Antonio Salazar García; Beatriz Santiváñez Arias; Javier La Rosa Calle; Juan Carlos Ruiz Molleda y por supuesto Ronald Gamarra Herrera.

Otra pieza de este grupo, es el sociólogo e historiador, Nelson Manrique Gálvez, ex asesor de la denominada Comisión de la Verdad y Reconciliación, y ahora columnista de IDL, Manrique Gálvez fue integrante del marxista Partido Unificado Mariateguista (PUM) y del grupo ultrarradical Márgenes, que en tiempos pasados llamaba "liberales" (Diario Amauta No 46), a otros camaradas que recusaban la violencia revolucionaria. Resulta que en octubre de 2006, a Nelson Manrique le habría salido su entraña marxista, al afirmar que las condenas penales benévolas aplicadas a los cabecillas del grupo

terrorista MRTA eran "desproporcionadas".

Antimilitarismo y direccionalidad ideológica

Como no podría ser de otra manera, considerando los antecedentes políticos y la orientación ideológica de quienes integran JV; sus trabajos evidencian una fuerte animadversión y desprecio hacia las Fuerzas Armadas y policiales, actitud que por extensión la proyectan a los ex funcionarios del régimen de Fujimori (inocentes y culpables); cayendo en una generalización y prejuicios incompatibles con una institución que opera en el Poder Judicial y ejerce una influencia en la opinión pública debido a sus amplios recursos económicos y mediáticos, a través de páginas Web, programas de televisión por cable, seminarios, becas, programas en radios de Lima y provincias, así como en revistas y boletines.

Esta postura reñida con la objetividad y contraria a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se basa en temas como los derechos humanos y lucha anticorrupción, a partir de los casos de corrupción y violación de derechos humanos que perpetraron algunos miembros de dichas fuerzas del orden. Frente a lo cual, JV se dedica a estigmatizar, deslegitimar y desarticular a las instituciones militares y policiales en general, promoviendo el enjuiciamiento masivo de sus integrantes que participaron en la lucha antiterrorista contra Sendero Luminoso y el MRTA.

Bajo ese enfoque sesgado, entre las publicaciones de los operadores de JV encontramos textos como: "30 razones por

la inconstitucionalidad de la ley de organización y funciones de la justicia militar“, de David Lobatón Palacios; "¿Hasta cuándo la curiosa justicia militar?" de Ronald Gamarra Herrera; "El ministerio de Defensa y su urgente compromiso con el post CVR", por Antonio Salazar García; "La judicialización de crímenes contra los derechos humanos presentados por la CVR y asumidos por el IDL" y "El desafío de la justicia militar", entre otros.

En un artículo adicional publicado por Ernesto de la Jara Basombrío, a propósito del discurso del Presidente Alan García Pérez el 28 de julio del 2006, se expresa lo siguiente: "En resumen: hasta ahora no hay nada para decir que en materia de justicia, Alan García volvió a las andadas, pero tampoco para decir que hay señales de cambio. Más de lo mismo: parece que continuará existiendo un sistema de justicia precario, en crisis permanente y sin reforma".

A continuación añade "¿Y cómo interpretar el nombramiento de una magistrada del perfil de María Zavala, como Ministra de Justicia? Si bien ella no se ha caracterizado por ser parte del cada vez más reducido número de jueces comprometidos con la autocrítica y el cambio, ella como Ministra de Justicia tiene la posibilidad de hacer lo que objetivamente no hizo como magistrada: impulsar contra viento y marea la reforma del sistema de Justicia".

En una línea antimilitarista y parcializada respecto a la lucha del Estado peruano contra el terrorismo de SL y el MRTA, y olvidando que este caso ya sigue un curso legal, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y el Instituto de

Defensa Legal (IDL) declararon, según la agencia Notimex el 3 de agosto de 2006: "Que se investigue de manera profunda la masacre de 200 presos acusados de terrorismo que fueron ejecutados en tres penales en 1986".

Asimismo, en pronunciamientos por separado, la Aprodeh y el IDL solicitaron a la justicia que "determine las responsabilidades políticas y penales de los responsables de las ejecuciones realizadas en el primer gobierno (1985-1990) del presidente Alan García"; puntualizando: "Aún quedan cuentas por rendir con el pasado", en alusión a lo ocurrido hace más de 20 años en los penales peruanos de San Juan de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara.

En esta misma senda y buscando mantener latente el proceso judicial, uno de los abogados del IDL-Justicia Viva, Carlos Rivera Paz, presentó en setiembre de 2006, una "queja de derecho" contra el último dictamen del fiscal Mario González, vale decir el tercero que éste emite y que exonera de responsabilidad a Alan García y a miembros de su Consejo de Ministros de 1987, respecto a los presuntos crímenes ocurridos en las prisiones peruanas.

Acaparando la cooperación internacional

Sobre la cooperación internacional que financia a las redes neomarxistas, es necesario conocer que según datos publicados por el diario Expreso, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, (APCI), sólo en el año 2004, tres ONGs neomarxistas recibieron de la cooperación externa cua-

tro millones 221,353 dólares para operar en el país: el Instituto de Defensa Legal recibió dos millones 798,585 dólares para realizar su plan de "Consolidación de la Transición Democrática y de los Derechos Humanos en el Perú", este dinero también sirvió para financiar los trabajos que desarrollaba la Comisión de la Verdad (CVR). Entre las principales fuentes de financiamiento del IDL, figuran la Open Society Institute, USAID, Fundación Ford, British Council y la Comisión Europea.

La Comisión Andina de Juristas (CAJ), habría recibido 957,669 dólares para realizar su "Plan Trienal 2004-2006", ubicado en la temática de gobernabilidad, teniendo como sus principales fuentes de financiamiento a la Oficina de Cooperación Canadiense, Save The Children, la Cooperación Alemana al Desarrollo, la poderosa National Endowment for Democracy de EE.UU., la Corporación Andina de Fomento y la Fundación Ford, entre otras.

A su turno, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) recibió el 2004 para su "Proyecto Aprodeh 2004", un total de 465,099 dólares para trabajos en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica relacionados con la CVR. Entre los donantes figuran The Oxford Committee for Famine Relief, la Fundación John Merck, The Ford Foundation, la holandesa ICCO y la francesa Secours Catholique, entre otros.

Un informe del Consejo por la Paz, entidad presidida por Francisco Diez Canseco, es más puntual y revela que entre los años 2004 y 2005, doce ONGs de la izquierda caviar recibieron unos 43 millones de dólares, significando estos montos

entre el 20 y 30 por ciento del total de dinero obtenido por las diferentes ONGs, sólo referente a la cooperación internacional entregada por organismos extranjeros independientes a sus gobiernos. De todas, la ONG Instituto de Defensa Legal se adjudicó más de 5.5 millones de dólares en dicho período y la ONG Comisión Andina de Juristas 1.9 millones de dólares.

En otro plano, Diez Canseco Távara, está convencido que el lobby de las ONGs de izquierda caviar, con el poder político que les dio Alejandro Toledo, impuso el informe de la Comisión de la Verdad, como si fuese de cumplimiento obligatorio en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Simultáneamente, Diez Canseco Távara (al igual que otros), denuncia que es víctima del abuso de poder de los neomarxistas en la administración de justicia, y por ello enfrenta tres juicios después de haber criticado al ex ministro de Justicia Diego García-Sayán: dos querellas y una denuncia penal.

Las conexiones con Argentina y Chile

Las instituciones de la izquierda judicial del Cono Sur mantienen relaciones principalmente con cuatro instituciones peruanas: el Instituto de Defensa Legal (IDL); la Comisión Andina de Juristas (CAJ); la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).

Con respecto al IDL, las relaciones con entidades chilenas y argentinas vienen de años atrás, cuando el eje de su labor estaba centrado en la defensa de los derechos humanos, siendo más fuerte con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

de Argentina y con la Corporación Chilena de Derechos Humanos. Cabe agregar que estos vínculos se ven reforzados a su vez por la presencia de la Fundación Ford, en tanto las tres constituyen socios estratégicos de ésta en sus respectivos países.

Recientemente, el IDL ha establecido relaciones con otras entidades de estos países sobre la base de sus nuevas líneas de acción, como son las de seguridad ciudadana y administración de justicia, vinculándose en el primer caso con el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) de Chile, dirigida por Hugo Frühling, sobre la base de un proyecto regional financiado por la Fundación Ford, y en el segundo caso con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, formando parte de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil en Materia de Justicia (Red OSC).

Los intereses de IDL parecen estar puestos más bien en la región andina, donde ha promovido una Red Andina de Justicia de Paz y Justicia Comunitaria con organismos de Ecuador (CIDES), Colombia (CEJ) y Venezuela (Consortio Justicia) para fortalecer su posición en el tema de justicia de paz, con el apoyo de la Unión Europea.

En el caso de la CAJ, ella mantiene aún fuertes vínculos institucionales con diferentes organizaciones del Cono Sur, especialmente con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y CELS en Argentina, y el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales y la Corporación Forja en Chile, mediante la participación constante de expertos de estas instituciones en sus cursos internacionales de derechos humanos.

En definitiva, puede señalarse que salvo por los contactos que mantiene el IDL, las relaciones entre las instituciones de la izquierda judicial del Cono Sur con sus pares peruanas no son tan estrechas como aparentan ser. Ello explica porqué instituciones de larga experiencia en procesos de reforma procesal penal, como INECIP, la Universidad Diego Portales o CEJA, no hayan logrado aún una presencia significativa en el espacio nacional. En el caso de INECIP, ésta intentó crear una Oficina Regional a nivel de los países andinos, encabezada por un peruano, la que sin embargo no prosperó por la falta de apoyo económico a esta iniciativa.

Denuncian a JV y a IDL

"La propuesta de eliminar el fuero judicial castrense podría desestabilizar las Fuerzas Armadas y el estado democrático", afirmó el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), general Juan Pablo Ramos, en agosto del 2006; en su opinión, esto es lo que buscan las ONGs conformadas por el consorcio Justicia Viva y el Instituto de Defensa Legal (IDL). Tras señalar que la existencia de justicia militar está amparada la Constitución, el general Ramos, sostiene que suprimirla forma parte de una campaña sistemática que se inició desde el 2004 y ojalá no llegue a trascender.

Sobre el tema, cabe acotar que el Colegio de Abogados de Lima tiene más de 40 mil asociados, pese a ello, quien sostuvo la desaparición del fuero castrense fue el ex director de IDL e integrante de Justicia Viva, David Lobatón Palacios; y la

demanda de inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar, la sustentó el ex procurador Ronald Gamarra, también de Justicia Viva. En consecuencia, genera demasiadas suspicacias el desmedido interés de dichas instituciones de la izquierda caviar por arremeter contra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la justicia militar.

En tal sentido, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Walter Vásquez Vejarano, denunció en setiembre de 2006, que el consorcio "Justicia Viva" tiene la intención de manejar el Poder Judicial, con una injerencia tal, que quiere participar de la conformación de los órganos jurisdiccionales, y aseveró que ONGs similares están incrustadas en el Poder Judicial y aprovecharían el voto universal para elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema (planteado por la ministra de Justicia, María Zavala), a fin de promover mediante los cursos de capacitación que dictan, a los candidatos que quisieran poner en la administración de justicia.

Adicionalmente, el Presidente del Poder Judicial agregó que "Justicia Viva" se encarga de capacitar a los magistrados sin la autorización expresa del Consejo Ejecutivo de la Corte Suprema, lo que demuestra un extraño interés en posicionarse dentro de la justicia peruana.

En relación a este hecho, se sabe que en anteriores "cursos de capacitación" a los que hizo referencia el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, se habría condicionado a los magistrados para que sean duros con los militares y blandos con los terroristas, y para que hagan tabla rasa del derecho a la presunción de inocencia en los procesos anticorrupción. Pero al

abordar el tema, el Presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, el oficialista Luis Gonzales Posada (APRA), piensa que las ONGs deben ceñirse a un marco regulatorio. "Ni siquiera el Parlamento puede solicitar información o inmiscuirse en los procesos de selección de autoridades en las Cortes Superiores y menos en la Corte Suprema", recordó.

Siendo más categórico aún, el Secretario General y congresista del APRA, Mauricio Mulder, expresa su alarma por el peligro proveniente de los sectores de la izquierda caviar, al considerar que tienen mucho poder extrapartidario, gracias a su manejo de ONGs y sus sólidos nexos con algunos medios de comunicación, lobbies de estudios de abogados y dinero que proviene de la cooperación internacional, sobre todo de EEUU, Canadá y Francia.

A la vez, confirmando una preponderante visión crítica en las altas esferas de la administración García sobre las ONGs de la izquierda caviar, Mulder no duda que estas instituciones están alrededor de los derechos humanos sirviendo de tontos útiles al terrorismo y en torno a la reforma del Poder Judicial (PJ), favoreciendo a quienes están en contra del PJ, buscando menoscabar su autonomía, "como la ONG IDL, que pretende inmiscuirse en la elección del presidente de la Corte Suprema".

En esa misma línea de cuestionamiento contra ONGs y organismos integrantes de la izquierda caviar, durante la IV Conferencia Interreligiosa Peruana, en la Pontificia Universidad Católica, del 15 de agosto de 2006, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Jorge Del Castillo Gálvez, denunció

que "sectores de izquierda se apropiaron de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y excluyeron al APRA para presentarla como enemigo de aquella". Pese a estas expresiones y en un giro inesperado, el premier luego nombró a Sofía Macher, como presidenta del Consejo de Reparaciones para las víctimas de la violencia terrorista, instalado en la PCM. A su turno, el ahora vicepresidente de la República del gobierno de Alan García, Vicealmirante AP, Luis Giampietri Rojas, escribió el artículo: "El Reposo del Guerrero", con ocasión del fallecimiento del general Clemente Noel Moral en mayo de 2005, donde entre otras cosas expresa lo siguiente:

"Mas de veinte años después y basándose en acusaciones no vinculantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, con la ayuda de ONGs y consorcios como Justicia Viva, el Instituto de Defensa Legal, la Comisión Andina de Juristas, Aprodeh, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, la Defensoría del Pueblo, jugando en pared con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica a través de sentencias a la medida, y contando con el preocupante e insólito apoyo de tres millones de dólares del USAID del gobierno norteamericano; se ha iniciado una implacable persecución judicial sobre todos aquellos oficiales y personal subalterno que, obedeciendo órdenes de los jefes Supremos de las Fuerzas Armadas que los comandaron, lucharon y en muchos casos dieron la vida para lograr la paz de que gozamos, luego de transitar por épocas de inseguridad y muerte, que parece habríamos ya olvidado".

Definen política de gobierno

Sobre el particular, el día del aniversario de las Fuerzas Armadas del Perú en setiembre de 2006, el Presidente Alan García Pérez anunció que la defensa judicial de los efectivos militares y policiales (en actividad y retiro) que vienen siendo procesados por la supuesta violación de derechos humanos mientras luchaban contra el terrorismo, entre 1980 y el 2000, será asumida por los ministerios de Defensa y del Interior; con la finalidad de "no dejar abandonados a miles de soldados y oficiales sobre los que recae siempre la sospecha de los que no pusieron nada por defender a la patria contra el terrorismo", enfatizó el mandatario.

Según cálculos preliminares, serían unos 950 los militares enjuiciados, aunque las cifras continúan en estudio. Antes de este anuncio presidencial, el ministro de Defensa había declarado, que las recomendaciones y conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad sobre la presunta culpabilidad de militares y policías en la lucha antisubversiva, no tienen carácter vinculante.

Reflexión final

Un análisis objetivo e integral sobre la actuación y el entramado de las ONGs neomarxistas o de la izquierda caviar en el Poder Judicial peruano, revela que nada en el rol de los agentes de la cooperación internacional debe incluir el fortalecimiento de ONGs locales como actores monopólicos que imponen sus

puntos de vista y prejuicios ideológicos, sobre temas tan sensibles como la administración de justicia, las fuerzas armadas, la defensa nacional y la seguridad ciudadana.

Por último, nada justifica tampoco que se utilicen los fondos internacionales que son para la sociedad peruana, como recursos que alimentan el poder de ONGs, integrantes de una especie de logia mutante que busca enquistarse en el ámbito judicial y seguir entrometiéndose de manera hostil en el funcionamiento de las fuerzas armadas y policiales.

Frente a lo cual hay dos objetivos pendientes, uno: lograr que la cooperación internacional se pluralice y descentralice, y dos: afianzar una activa vigilancia ciudadana e institucional sobre el accionar pernicioso e infiltración de redes neomarxistas a través de ONGs que funcionan con ingentes cantidades de dinero que deberían destinarse a políticas públicas estatales en beneficio de los sectores más desposeídos de la población.

NOTAS

1 Peruano. Estudios en Derecho y Ciencia Política, Diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Washington Collage of Law de la American University - Washington DC. 2006. Director de la Revista Huellas. Asesor AFAVIT-PERU Mártires de la Democracia, Organización - Víctimas de Terrorismo. Director de UnoAmérica - Capítulo Perú. Ha participado como conferencista en Chile, Argentina, Colombia. Sus Intereses en Investigaciones incluye la Historia del Militarismo en América Latina, Terrorismo y Análisis de Amenazas, Manipulaciones de lenguajes en política y diplomacia.

2 Peruano. Profesional en Administración, estudios de Derecho y Ciencias de la Comunicación, especialización en Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia en la “Escuela Nacional de Inteligencia” del Perú; capacitación en la “Academia Diplomática del Perú”. Analista invitado del Centro de Investigación de Inteligencia Estratégica, del Colegio Nacional de Inteligencia y de Defensa-Washington, D.C., en la elaboración del libro: “Democratización de la Función de Inteligencia” (PCN 12060), publicado en Washington, D.C., en enero de 2009. Participante en el Ejercicio Policylab, conducido por el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de Washington, D.C. y el Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú en agosto de 2008; miembro del Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad desde el año 2008. Profesor Permanente de las Diplomaturas: “Inteligencia y Contrainteligencia”, “Estudios Estratégicos en las Relaciones Perú-Chile-Bolivia” e “Inteligencia Aplicada a la Seguridad Ciudadana”, de la Cátedra Mariátegui y la Universidad Ricardo Palma-Perú. Conferencista sobre Inteligencia y Contrainteligencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Ha sido Conferencista del Curso Superior de Inteligencia en la “Escuela de Inteligencia del Ejército” - Perú. Investigador en la temática de seguridad e inteligencia estratégica a través de la red multilingüe en Internet “Voltaire” con sede en Francia y en la Agencia de Prensa Internacional; con artículos y ensayos publicados en más de diez países de América y Europa.

7.

El Foro de São Paulo y el desmantelamiento de las FF.AA. en Uruguay

Colaboración del General Manuel Ignacio Fernández Vergara

El ataque a las FF.AA. tiene como fin último la destrucción del Ser Nacional.

1. Prólogo

La Historia reciente de nuestra Patria, ha sido severa y deliberadamente violentada y subvertida, mediante una hábil acción psicopolítica. En efecto, a través de un enfoque materialista dialéctico se ha obtenido un revisionismo histórico, producto radicalmente opuesto a la verdad de lo sucedido en los últimos cincuenta años, que crudamente nos dice: el 1 de marzo de 2005, accedió legalmente al gobierno una coalición de izquierda dominada por marxistas-leninistas, por definición enemigos acérrimos de la Democracia.¹

El Frente Amplio llegó al Gobierno en elecciones libres, con multiplicidad de Partidos Políticos (la "pluriporquería" según Fidel Castro). Basado en que tiene mayoría absoluta en las Cámaras de Senadores y Diputados, al haber obtenido el 50.4% de los votos emitidos en las últimas elecciones del año 2004, actúa con una visión totalitaria y despótica del Poder,

como si hubiera llegado al mismo por vía de la lucha armada.

Este cambio en la opinión pública uruguaya, que en veinte años pasa de una izquierda con el 18% de adherentes al 50.4%, se debe a la fenomenal estrategia política del más puro cúneo “gramsciano”, desarrollada desde la restauración de la institucionalidad democrática por parte de sus dirigentes.

En efecto, en 1985 son generosamente amnistiados los sediciosos terroristas detenidos y los exiliados, y reivindicados los partidos de izquierda que estaban fuera de la Ley, devolviéndoles todos los derechos perdidos y beneficiándolos de mil maneras. Esta nueva realidad les permitió copar de inmediato la Enseñanza, la Justicia, la Cultura, los Medios de Comunicación, etc., y a la vez iniciar acciones tendientes a la obtención del Poder por otros medios, distintos a la lucha armada.

Para la izquierda uruguaya, a partir de aquel momento, la guerra revolucionaria que había perdido en el campo militar, seguía en los otros tres “frentes” (político, económico y psicosocial). En 1984, al salir de prisión su conductor político, el General Reformado Líber Seregni, mediante una hábil estratagema, cambia la violencia leninista (que tanto mal le había hecho a la izquierda, nada menos que 13 años de ostracismo), por el insidioso “gramscismo”, con la impagable complacencia de los Partidos Fundacionales, “Concertación Nacional Programática” mediante.²

En esencia los cambios doctrinarios no fueron tales, lo que cambió fue la estrategia para lograr los objetivos marcados hace muchos años para la toma del Poder. Una vez en el gobierno comienzan a mostrar sus verdaderas intenciones.

El Partido Socialista y el Partido Comunista en el Uruguay, integrantes del Frente Amplio, son oficialmente marxistas-leninistas hasta el día de hoy y los más "ortodoxos" del mundo.

Los Ministros de Estado, Senadores, Diputados, del partido de gobierno, la mayoría de los cuales firmaron la "Declaración de la OLAS" en 1967, y otros dirigentes frenteamplistas, no tienen reparo en anunciar que están trabajando desde el gobierno para implantar el Socialismo y la Dictadura o Hegemonía del Proletariado en el Uruguay, y cambiar el sistema de gobierno republicano democrático que nos rige, objetivo que no pudieron cumplir con la lucha armada en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado.

Hasta la fecha, siguen siendo fieles a sus compromisos de antaño. Recordemos que el 10 de Agosto de 1967, en el Teatro Chaplín de La Habana, Cuba, Fidel Castro, junto a representantes comunistas, socialistas y "compañeros de ruta" del Continente y, desde luego de Uruguay, en el cierre de la Conferencia de la OLAS le declara la guerra a todos los gobiernos de Iberoamérica, incluido el Republicano, Democrático y Representativo de la República Oriental del Uruguay. Fue el comienzo de la Guerra Revolucionaria en gran escala en Latinoamérica, situación bélica que se mantiene hasta el presente, ahora a través del Foro de San Pablo a cual se lo considera la continuación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad. ³

Cuando la implosión de la URSS, la Cuba de Fidel Castro quedó sin medios para continuar apoyando a los movimien-

tos revolucionarios en Latinoamérica, surgió entonces la necesidad de constituir una coalición transnacional que representara la continuación de la OLAS.

2. Introducción

La República Oriental del Uruguay como cualquier otro estado-nación ha estado sometida a las injerencias de “sujetos estratégicos” ⁴ desde siempre. Zona de frontera en época del imperio español, país clave para la dominación de los grandes ríos afluentes del Plata, cuña entre los dos colosos sudamericanos, factores fundamentales entre otros, que fueron determinantes en nuestro surgimiento como país independiente con tradición militar.

En 1830 es aprobada nuestra primera Constitución, rígida, elitista y doctoral, con clara influencia foránea; fue la piedra de la discordia entre los “Orientales” durante el siglo XIX, donde los levantamientos y sublevaciones fueron la constante por casi 80 años.

La última contienda civil, en 1904, marcó el punto final de la lucha por la consolidación institucional, pero también el punto de unión entre civiles y militares. Durante gran parte del Siglo XX, las FF.AA. ya profesionalizadas ocuparon un discreto segundo plano como factor de estabilidad interna, una época de nuestra historia que algunos historiadores le llaman el “civilismo excluyente”. ⁵

En 1963 cuando aparecen en nuestro país las primeras manifestaciones de una expresión militar revolucionaria, las alertas tempranas no fueron escuchadas por los gobernantes

de turno y políticos en general, quienes disponen sea la Policía la que asuma la represión. Se distinguen dos organizaciones subversivas el MLN-T (Tupamaros) en la vanguardia y el PCU apoyando desde las sombras.⁶

Ambas organizaciones comienzan el aumento de su aparato militar en 1968, coincidente con las determinaciones de la OLAS de Agosto de 1967, en un período que a los efectos de la esquematización histórica se denomina “Propaganda Armada”.

En 1971 las FF.AA. son llamadas por el Poder Político para combatir a la subversión marxista que se había enseñoreado en todo el país y estaba afectando a todos los factores del poder. El Instituto Policial había sido sobrepasado por la sedición tupamara y comunista.

En ese mismo año, ante un nuevo fracaso electoral de la izquierda, se prioriza nuevamente el factor militar en los diferentes grupos marxistas, ahora apoyados desde la legalidad por el Frente Amplio, partido político de reciente creación (1971). Siguiendo las órdenes recibidas de La Habana cuando la Conferencia de la OLAS (10 de Agosto de 1967), se proponen una expansión aún mayor de sus respectivos aparatos armados, teniendo como objetivo: la toma del poder; su finalidad: la implantación del socialismo; su instrumento táctico principal: la guerrilla; el motor dinamizante: el odio al enemigo burgués.

En 1972 ante la contraofensiva llevada adelante por las FF.CC. (Fuerzas Conjuntas, compuesta por unidades tácticas del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía), culmina la etapa de hostigamiento a las FF.AA. y Policiales, de los secuestros a

Representantes Diplomáticos, de la “Justicia Revolucionaria”, de la “Cárcel del Pueblo”, de los asaltos espectaculares, etc. Los terroristas pierden la iniciativa táctica y comienzan a experimentar fuertes reveses que significarán la declinación y rápida liquidación del MLN-T como problema militar, mientras quedaba intacto el aparato armado del Partido Comunista (IV Dirección).

Las organizaciones sediciosas se batían en retirada en el frente de la lucha armada, así como también en el “frente” legal, pese al apoyo que se les brinda desde el Parlamento por los sectores políticos con los que están vinculadas. La gran mayoría de sus miembros se exilia en Argentina o en Chile, mientras que los dirigentes e intelectuales lo hacen en Europa, donde comienzan y llevan adelante una formidable campaña psicopolítica de desprestigio contra las FF.AA. y contra el gobierno del Uruguay, basada en los “Derechos Humanos”.

Se debe dejar constancia que fue mayor el número de bajas entre los integrantes de las FF.AA. y de la Policía, más civiles inocentes, que las muertes y desapariciones ocurridas en las organizaciones sediciosas. Los terroristas detenidos fueron sometidos a la Justicia Militar, tratados como prisioneros de guerra, en cárceles especiales, bajo supervisión de la Cruz Roja y otros organismos internacionales.

Los terroristas de ayer, son los gobernantes actuales de la República Oriental del Uruguay. Curiosamente, quienes desataron la guerra revolucionaria han obtenido en la paz democrática las mayores ganancias electorales y consecuentemente el acceso casi irrestricto al poder.

3. Desarrollo

Entrando de lleno en el tema que nos ocupa, comencemos por decir que no sería correcto, ni históricamente cierto, afirmar que únicamente el enemigo marxista es el responsable del intento de desmantelamiento o reducción de las FF.AA. uruguayas.

El intento del desmantelamiento de las FF.AA. uruguayas, en lo que tiene relación con “fuerzas interiores”, proviene básicamente de la izquierda vernácula dentro de la cual sobresale el Frente Amplio, mientras que los Partidos Políticos No Marxistas se afiliaron mayoritariamente a la reducción de la Fuerzas Militares. Ambas corrientes siguiendo lineamientos del Exterior.

A. Acción de la izquierda vernácula

Para poner una fecha, a los efectos de encuadrar el presente trabajo, vamos a tomar arbitrariamente 1963, como el año en que comienza una acción decidida de enfrentamiento y/o destrucción del aparato militar burgués, cuando los miembros del MLN-T (Tupamaros), asaltan y roban el Club de Tiro Suizo de Nueva Helvecia.⁶

Es a partir de ese momento, hace 46 años, que el terrorismo marxista se expande en nuestro país en forma desembozada y, junto con ello, el intento de desmantelar, desmoralizar e infiltrar a quienes preveían como su principal enemigo: las Fuerzas Armadas Uruguayas. Lo afirmado precedentemente no es fruto de la imaginación, está documentado en la informa-

ción abierta de la época y en la gran cantidad de documentos capturados y re-quisados, no solo a los tupamaros, sino también al Partido Comunista y a otros grupúsculos radicales; documentación ésta que obra aún hoy en poder de las FF.AA., y nos dan la pauta de sus posiciones dentro de una concertada orquestación revolucionaria con proyecciones continentales. Al respecto existe un documento anterior a la Tricontinental (1965) y a la OLAS (1967), que habla ya de la continentalidad de la lucha. “Por ser la revolución continental, la estrategia será continental”, lo que indica el carácter vanguardista de la dirigencia terrorista de la época.⁷

Del análisis de dichos documentos surge una finalidad implícita, que no es otra que la de servir de vanguardia y, en algunos casos, en forma paralela a los fines de expansión que el marxismo persigue, o sea, realizar los esfuerzos para contribuir al triunfo del comunismo en el mundo, comenzando por entregar a su hegemonía, atado de pies y manos, al propio país en que se gesta y actúa.

Esos ataques por parte de diversas organizaciones marxistas han subsistido a través de estos años hasta el presente, llevados adelante por diversos “sujetos estratégicos” de distintas formas.

El Frente Amplio, como integrante y fundador del Foro de San Pablo, ya venía intentando realizar su acción demoleadora desde antes de 1990. Sus actuales dirigentes, desde antes de la fundación de la coalición marxista en 1971, ya estaban inspirados en la Revolución Cubana triunfante en 1959, o seguían directivas de la URSS o estaban afiliados a las tesis del

maoísmo.

A pesar de que el Frente Amplio llegó democráticamente al gobierno, en el año 2005, los revolucionarios que lo integran no han cambiado sus objetivos. Según sus propias manifestaciones, lo que cambió es la forma de conquistarlos, aprovechando el abanico de posibilidades que brinda el poder y las debilidades que tienen las instituciones en un sistema democrático-republicano de gobierno, en el cual los marxistas medran. El objetivo sigue siendo el mismo: “si no se puede ganar el apoyo de las FF.AA., debilitarlas hasta anularlas para facilitar el camino de la revolución socialista que nunca abandonaron”.

Una vez en el gobierno, de inmediato reanudaron las hostilidades contra el remanente de lo que fue el victorioso Ejército Nacional, con la finalidad de aniquilar al Enemigo y consolidar su victoria en todos los campos, propiciando el revanchismo e iniciando un nuevo frente de guerra revolucionaria: La guerra judicial y jurídica.

La actividad del gobierno frenteamplista encuentra su apoyo en “Organizaciones Auxiliares”, copadas por el marxismo desde hace larga data. Entre ellas se destacan:

- La Universidad de la República, transformada en la “Universidad Marxista del Uruguay” desde que se consagró su autonomía en 1958. Tiene el triste privilegio de haber descendido a los puestos más bajos en la consideración mundial, debido a la obsolescencia y atraso de sus planes de estudio, siempre de espalda a la realidad nacional y mundial, siguiendo las directi-

vas de sus amos marxistas.

- El PIT-CNT, central sindical dominada por los comunistas desde la década de los cincuenta, mantiene regimentados a los trabajadores y es un órgano de presión a órdenes del gobierno marxista. En el pasado, fue enconada opositora de los Partidos Tradicionales en el gobierno.

- Los medios de comunicación, copados por operadores marxistas, complacientes a cualquier título, o amedrentados por el propio gobierno de izquierda o por sus militantes, que ofician de verdaderos “censores”, con una severidad propia de un estado totalitario estaliniano o castrista; esto ocurre incluso en medios de clara e histórica orientación democrática.

- Las actividades culturales (Teatro, Cine, Música, Literatura, Carnaval), totalmente tendenciosas, en las cuales se impide por todos los medios que afloren elementos opositores a la ideología marxista.

- La Educación, se cambiaron los planes de estudios y, lo peor, se impusieron textos de historia donde se ignoran los trescientos o más años de vida anteriores a la revolución cubana, y se tergiversa la historia reciente con una orientación sesgada, según la cual los nuevos héroes son los terroristas en el Poder.

- La Iglesia Católica, infiltrada desde hace décadas por los curas progresistas, continúa dividida y en pleno proceso de secularización. Pese a que el tema del aborto la ha distanciado del Frente Amplio en el poder, ha habido curas progresistas que han ocupado cargos en el gobierno. No obstante, como lo profetizó Gramsci, la línea general es que la religión en el Uruguay termina en “suicidio”, al diluirse los límites de la Cris-

tiandad con respecto al mundo moderno.

Respecto al “Frente Judicial y Jurídico”, es opinión generalizada, tanto en el país como en el exterior, que el Uruguay es un país donde no hay seguridad jurídica de ningún tipo, la inmoralidad campea en los estrados judiciales, los abogados serios se ven obligados a renunciar para no hacerle el juego a esa justicia “estalinista o guevariana”. La Constitución y las Leyes son constantemente pisoteadas.

En un seminario realizado en los últimos días de Abril del corriente año 2009, expertos internacionales manifestaron su preocupación, porque consideran que en Uruguay se está generando un "derecho penal para enemigos", con la voluntad expresa de responsabilizar, 30 años después, a militares que participaron de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

Como era de esperarse, tales apreciaciones fueron enfáticamente negadas por fiscales y abogados locales, que se desempeñan en esa área y que actúan siguiendo directivas de los marxistas enquistados en el Poder.

El seminario se abrió con una presentación del abogado Pablo Galain, en la que sostuvo que Uruguay, atravesó por tres etapas respecto a los crímenes de la dictadura militar: la amnistía absoluta, la reconciliación y la persecución penal.

El catedrático en Derecho Penal, de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Pastor, manifestó reparos sobre la forma en la que se está enjuiciando a militares retirados en los países de la región, incluido Uruguay. El Dr. Pastor sostuvo que en al-

gunos procesos judiciales se están violentando las garantías de los encausados. En particular, el especialista señaló que la revisión de los delitos a más de treinta años de que hayan sido cometidos, se enfrenta a la dificultad de la prescripción. Expresó además, su preocupación por la aplicación a los militares retirados de normas que no existían al tiempo de la comisión de los delitos, como es el caso de “la desaparición forzada”.

A juicio del especialista argentino, con ese procedimiento se está llegando al extremo de aplicar un "derecho penal" diseñado exclusivamente para responsabilizar a los "enemigos", lo cual pone en crisis al propio "Estado constitucional de derecho" y al "derecho penal liberal", que se basan en los principios de "legalidad y tipicidad".

Las expresiones de Pastor fueron compartidas por otros expertos internacionales y por los profesores Langón, Otatti y Chaves.

B. Análisis del Estado de Situación de las FF.AA.

El Mando Superior de las FF.AA. (Presidente de la República y Ministro de Defensa Nacional) y sus asesores en posiciones elevadas e intermedias, todos ellos marxistas reconocidos pertenecientes al Foro de San Pablo, han causado una serie de inconvenientes a la moral de las Fuerzas Armadas, a su patrimonio, a sus efectivos, y a la Institución Militar como un todo, que a continuación se analizan.

En el período comprendido entre el año 2005 hasta abril del 2009, El Mando Superior de Todas las Fuerzas Armadas:

- Ha cumplido oficialmente algunos compromisos públicos y privados, de naturaleza esencialmente militar, pero de forma más bien protocolar. En muchos actos patrióticos no se ha hecho presente.
- No ha demostrado compromiso con las Fuerzas Armadas.
- Ha suprimido los desfiles militares.
- Ha permitido que se deshonren los símbolos nacionales.
- En el Ministerio de Defensa se ha permitido que se introduzca un logotipo de identificación del gobierno, sustituyendo el emblema que identifica esa repartición.
- No ha cumplido con la palabra empeñada en lo relativo a la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado⁸ y otros asuntos, fundamentalmente en los vinculados a los Derechos Humanos.
- *Extraditó* por un supuesto delito que ya había sido juzgado en nuestro país, a dos Oficiales Superiores en situación de retiro, y a un Jefe en actividad, como *gesto de buena voluntad con un mandatario extranjero*, esto último reconocido por el Ministro de Defensa Nacional.
- Con el sistema de ascenso a la más alta jerarquía puesto en práctica por el actual Mando Superior, se ha politizado a las Fuerzas Armadas. Asimismo prostituyó el grado de “General”, al otorgárselo a militares marxistas que, por haber estado en una posición adversa al Ejército cuando la guerra subversiva, habían sido dados de baja por haber cometido delitos de “lesa nación” y “traición a la patria”.

- No ha realizado reconocimiento alguno al sacrificio que representa para las Fuerzas Armadas su contribución a las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, que es la mayor contribución activa que se hace a su Política Exterior.
- No ha tenido iniciativas respecto a los bajos sueldos militares, habiendo manifestado su “preocupación” por el tema.
- Ha promovido debates, en los cuales intervinieron extranjeros para sacar ideas para el proyecto de la Ley MADRE en asuntos militares, la Ley de Defensa Nacional.
- El presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, tradicionalmente el mayor de todos los ministerios, comenzó a ser sobrepasado por el del Ministerio del Interior en el año 2007, último dato público disponible..
- Se tomaron decisiones que afectaron patrimonialmente a las Fuerzas Armadas, y continúan las iniciativas en tal sentido.
- A las Fuerzas Armadas se le atribuyeron misiones que corresponden al Ministerio del Interior.
- El Mando Superior cumple en un 50% con la función que le atribuye la Constitución, el otro 50% lo hace siguiendo el programa de la fuerza política que está en el gobierno⁹. Actitud totalmente alejada del “Deber Ser” de su investidura como Mando Superior de Todas las Fuerzas Armadas, patrimonio de la Nación.
- Se ha caracterizado por el aprovechamiento de los medios de las Fuerzas Armadas para su bienestar personal.

La *Moral* es el primer elemento a tener en cuenta para la efectividad de las Fuerzas Armadas. El Mando Superior de las Fuerzas Armadas, a través de su compromiso con las mismas, es uno de los elementos esenciales para mantener en alto la *Moral*.

En este caso no lo ha logrado. Peor aún, la ha debilitado, decretando, permitiendo y promoviendo que el tema Derechos Humanos fracturara la *Institución Militar*; haciendo perder el contacto entre militares en actividad y retirados; desvaneciéndose así las tradiciones que junto con los Símbolos Nacionales y Símbolos Militares le dan continuidad al espíritu de la *Institución*, a pesar de los cambios generacionales y los naturales de adaptación a la modernidad y las nuevas tecnologías.

Los *Derechos Humanos* se han sobredimensionado en una aproximación hemipléjica, y hoy todo es un derecho humano. Nadie ha hablado de las responsabilidades humanas, excepto aquellos que frente a una falla en el sistema salen disparados a buscar un responsable que esté bien lejos de su entorno.

Los *verdaderos* Derechos Humanos son un compendio de valores propios de la naturaleza del hombre. Además de vida y libertad, plasman el derecho a alcanzar y disfrutar de otros valores que el ser humano necesita, como integrante de una sociedad organizada política y socialmente. Junto con los que garantizan su existencia -derecho a la vida y a la subsistencia- están los que garantizan su mejoramiento permanente en sociedad como ser: igualdad, justicia, tolerancia, paz, familia, trabajo, vivienda, propiedad, educación, salud, seguridad, democracia, soberanía, república.

También constituye una clara violación a los Derechos Humanos permitir que haya niños viviendo de la basura. Nadie levanta la voz contra ese delito.

Los Derechos Humanos irrumpieron tardíamente en escena y surgieron principalmente impulsados por causas políticas. Cobraron la vigencia que hoy tienen a partir de los años sesenta, cuando fueron empleados durante la Guerra Fría en el enfrentamiento de los bloques.

Fueron Inicialmente esgrimidos por los revolucionarios marxistas, que proliferaron cobijados por la URSS durante su expansionismo, para dar una “causa justa” a “las luchas de liberación”¹⁰. También para defender a los terroristas detenidos y encausados, alegando que eran víctimas del terrorismo de Estado.

Los Estados Unidos los utilizaron internamente, bajo la forma de Derechos Civiles, relacionados con segregación racial. Y en el exterior para promover y defender la libertad y la democracia, como forma de neutralizar las luchas expansionistas “de liberación” del Bloque Soviético, que violaban esos principios como norma y procedimiento.

También fueron empleados a fines de los años setenta por los Estados Unidos como un arma para apoyar la disidencia interna en la URSS.

Después de la caída del Muro de Berlín, fueron la herramienta efectiva para mantener en forma discreta el orden mundial, y solucionar con mayor facilidad alteraciones que afectaban intereses de los países más poderosos.

De esa forma se imponen ajenos al Humanismo sincero.

Más bien al amparo de la liviana definición de política como “el arte de lo posible” ¹¹, en procura de ganar más poder. Aunque nacieron cobijados por los sentimientos más puros del ser humano, no llegaron a la edad adulta casi dos mil años después de su concepción. Impuestos hoy mediante legislación supranacional, aceptada sin restricción por los estados menos poderosos de occidente ¹², pero ignorada por otros occidentales de mayor poder. Reconocidos a medias por otras civilizaciones que conviven con la Occidental ¹³.

A pesar de esto cuentan con respaldo internacional de mucha importancia porque, si bien para algunos países poderosos no es conveniente comprometerse a cumplirlos, para esos mismos países es conveniente que los cumplan los otros.

Pero existe otra dualidad. Es moralmente obligatorio su cumplimiento por parte de los gobiernos democráticos, pero son sistemáticamente ignorados y violados por otros gobiernos, estados, países o movimientos, que no adhieren a la democracia, ni al derecho. Ello no altera el relacionamiento internacional, ni el reconocimiento y la defensa que los propios países occidentales prestan a esos agentes violadores de los Derechos Humanos, como pueden ser Cuba, Irán, Corea del Norte, y China.

Estados Unidos fue impulsor del Estatuto de Roma y, por lo tanto, de la creación de la Corte Penal Internacional. Sin embargo -junto con Israel- lo firmó, pero no lo ratificó. La República Popular China ni siquiera lo firmó.

En nuestro país, al ser aplicados con parcialidad por el actual gobierno, los Derechos Humanos generan tensiones y desgastes que mantienen al país estancado en el pasado. Aquí

también aparece -en este caso la política del gobierno-, como el “arte de lo posible”... Decir una cosa y hacer otra... Dar esperanzas que ocurra algo que se sabe que nunca va a ocurrir... Jugar al humanismo con el aborto para obtener beneficios personales a futuro, en algo que nada tiene que ver con política... Y paralelamente, siguiendo el mandato materialista del socialismo, promover una “fuerza progresista” que promociona el aborto, sin tener en cuenta que se está violando nada menos que el derecho a la *Vida* ¹⁴.

Con estas explicaciones, ha quedado aclarado el punto relativo a un tema que en el Uruguay es engañosamente agitado en forma permanente, como un asunto de la mayor importancia y un logro histórico. La realidad indica que en ese tema lamentablemente uno de los poderes de Estado ha descendido de su elevado pedestal para ensuciarse con el barro terrorista. Los juicios por violaciones a los Derechos Humanos serán ejemplo de Horrores Jurídicos para las futuras generaciones. En el Uruguay una parte de la población ha sido convencida que la Guerra Fría no ha terminado.

En lo referente a las leyes a consideración del Parlamento y a sus efectos sobre la Misión de las Fuerzas Armadas, se detalla lo siguiente:

- *Organización y despliegue de las Fuerzas Armadas.* Se proyecta en la Ley de Defensa Nacional -a estudio de la Cámara de Diputados y aprobada ya por la Cámara de Senadores-, cambiar la organización de las Fuerzas Armadas, introduciendo la figura del Estado Mayor de Defensa por encima de los comandantes en

jefe, con atribuciones por demás confusas y de comando de parte de unidades subordinadas a los comandantes. Con respecto al material de guerra, se ha aumentado en pequeñas cantidades, frente a situaciones de hecho que impedían cumplir la misión. Se ha incorporado material de guerra de inferior calidad y de tecnología de hace treinta años.

- *Tamaño de las Fuerzas Armadas.* En lo que se refiere a este tema, existe una tendencia a disminuir los efectivos. Cosa que de hecho se materializa asignándole a las Fuerzas Armadas misiones secundarias que las alejan del *Límite Mínimo del Poder Militar*, al estar empeñadas en tareas que no le permiten mantener el entrenamiento y la instrucción. A lo que debe sumarse la contribución que hacen las Fuerzas Armadas a la política exterior, cumpliendo misiones de paz a órdenes de las Naciones Unidas. Ha sido afectada en su infraestructura perdiendo patrimonio necesario para el cumplimiento de su misión: Edificios de unidades, campos de maniobras.

- Con relación del *Limite Mínimo del Poder Militar*, se encuentra por debajo del mismo, al no poder lograr capacidad disuasiva por falta de preparación, limitada instrucción y carencia de material de guerra. La capacidad de Disposición y Acción Ejecutiva se mantiene en base a la voluntad y el esfuerzo de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Hoy se puede cumplir con la misión de defensa de la Nación con un altísimo costo de vidas.

- *El Máximo de Efectividad de las Fuerzas Armadas* se logra mediante la Instrucción y Preparación Continua y Permanente. Las Fuerzas Armadas hoy están lejos de ello debido a carencias de

todo tipo. La formación profesional del Cuerpo de Comando se basa en una herencia de un siglo de perfeccionamiento constante, basado en la voluntad y capacidad de los responsables de la misma. La falta de material impide la instrucción completa de los efectivos individualmente y del nivel unidad básica. En niveles superiores de la organización, lo que incluye la preparación para acciones conjuntas, no existe. También impide realizar las provisiones mínimas para un caso de empleo de la fuerza.

C. Acción de los Partidos Políticos No Marxistas.

Los Partidos Políticos No Marxistas, especialmente el Partido Nacional (blanco) y el Partido Colorado, llamados también Partidos Fundacionales o Tradicionales, que ejercieron el gobierno desde la salida democrática en 1985 hasta el año 2005, se aferraron casi con desesperación a la tesis de la reducción de las FF.AA., con la finalidad de apartarlas de los primeros planos de la actividad gubernativa, intentando volver de cualquier manera a la época del “Civilismo Excluyente”, a instancias de “sujetos estratégicos” extranjeros.

Nos tenemos que ubicar entonces a fines de la década de los setenta y principios de los ochenta, cuando las FF.AA., que habían luchado en solitario contra la subversión marxista y habían vencido militarmente a uno de los grupos sediciosos que operaba en el país (MLN-T), coparticipaban activamente en el gobierno de la República desde los sucesos de Febrero de 1973 ¹⁵.

Coincidente con el período de gobierno de James

Carter, en esos años se comienzan a sentir las “Estrategias de Intervención” por parte del otro bloque en pugna de la “guerra fría”: Estados Unidos.

El presidente Carter tenía la particularidad de admitir en sus círculos íntimos a “anarquistas y adolescentes rebeldes”; se caracterizó, además, por su aflojamiento ante el enemigo comunista y por su énfasis en los derechos humanos.

La administración Carter era muy sensible a los “lobbies” de pseudo demócratas que continuamente golpeaban las puertas de la Casa Blanca o del Congreso de los EE.UU., pidiendo ayuda y despotricando contra la patria, con el único objetivo de satisfacer intereses personales o sectoriales.

Dirigentes Políticos, compatriotas pertenecientes a agrupaciones “no marxistas”, fueron los encargados de hacerle llegar al Gobierno Cívico-Militar las aspiraciones del primer mundo (EE.UU. y varios países de Europa), sobre el tema militar. Los clásicos “sujetos estratégicos” de la historia, que se sumaron a las presiones de otros organismos internacionales.

Los “Partidos No Marxistas”, con los Partidos Tradicionales a la cabeza, se esfuerzan aún hoy por “lavar sus culpas” ante la inacción exhibida en los años que van desde 1960 a 1980, y se niegan a reconocer la agresión del comunismo internacional, o lo hacen limitadamente, afiliándose a la “teoría de los dos demonios”.

Ignoran y soslayan la declaración de guerra que la Cuba castrista y sus aliados representantes de las más diversas organizaciones marxistas y revolucionarias latinoamericanas, le hicieran a todos los gobiernos iberoamericanos, incluido el

constitucional, republicano y democrático de la República Oriental del Uruguay (Ver la Declaración de la OLAS, el 10 de Agosto de 1967, en La Habana).

Esta actitud de los Partidos Tradicionales los convirtió, aún sin quererlo, en aliados estratégicos de los marxistas. La situación se agravó cuando los ahora “compañeros de ruta” comenzaron a hostilizar a la Institución Militar con furibundos ataques psicopolíticos.

Los Partidos Tradicionales concebían -equivocadamente- como adversarios o enemigos en el plano político a las Fuerzas Armadas y por ello quisieron debilitarlas. En su afán de minimizar los logros espectaculares del “Gobierno Cívico Militar”¹⁶, secundaron, por omisión, la ofensiva de los terroristas contra el sector castrense. Olvidaron prontamente que los militares les habían entregado el poder voluntariamente y con ello se logró el retorno a la normalidad institucional democrática.

La Estrategia seguida fue: primero, impedir que las FF.AA. contestaran en tiempo y forma los infundíos que provenían de la izquierda; segundo “combatir a los militares con presupuestos y leyes”¹⁷, pauperizando a las FF.AA. de tal manera, que en determinado momento se estuvo a punto de descender del Límite Mínimo del Poder Militar¹⁸.

Los Partidos Tradicionales, luego de veinte años gobernando y cinco en el llano, siguen pensando y aceptando que la izquierda revolucionaria marxista, aglutinada en el Frente Amplio, constituye una fuerza democrática.

4. Conclusión

Analizando lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años, se percibe que desde distintos ámbitos existe el objetivo de debilitar a las FF.AA. quitándole imagen, presupuesto, potestades, y sometiénolas a un férreo control civil.

Estos intentos de desmantelamiento o reducción de las FF.AA. se encuentran inscriptos dentro de la “acción gramsciana”, desplegada particularmente por el marxismo, para la toma del Poder y la destrucción del “Ser Nacional”, *desde antes de la creación del Foro de San Pablo en 1990.*

Los políticos intervinientes en los temas de Defensa Nacional lo han hecho indefectiblemente con preconceptos, considerando tendencias predominantes de “familias ideológicas” o simpatías entre gobiernos, con un factor común: *la hostilidad hacia las FF.AA.*

No seríamos leales con nuestros compatriotas y con nuestros lectores, si no expresáramos el hilo conductor que ha inspirado el presente trabajo, y que persigue el “Deber Ser” de las relaciones político-militares en un estado verdaderamente democrático, con una Institución Militar que proporcione el respaldo de la Fuerza a los “Poderes Constituidos”.

Las FF.AA., *actuando por mandato de los mismos*, deben cumplir un rol permanente de paz y de seguridad, a la vez que defensivo del patrimonio nacional cuando éste fuera amenazado o atacado. Las FF.AA. deberán estar capacitadas, como mínimo, para reaccionar adecuadamente frente a situaciones no previstas, intervenir en apoyo al desarrollo, en la protección

civil, en el mantenimiento del orden interno y en la preservación de la identidad nacional.

A su vez el Poder Político, representado por el *Mando Superior* (Presidente de la República y Ministro de Defensa Nacional), deberá estar compenetrado de su responsabilidad ante una Institución del porte y la importancia de las Fuerzas Armadas. Su tarea no se agota en exigir disciplina, cumplimiento de la misión y respeto a la ley.

El Mando Superior deberá estar *comprometido* con las Fuerzas Armadas, con su actividad, con su aprestamiento, con sus hombres, con su material, con sus necesidades, con sus resultados. *Considerar a las Fuerzas Armadas como lo que son: Una Fuerza letal destinada a la Defensa de la Nación y Patrimonio de ésta desde 1811.*

Debe ejercer el Control Civil sobre las Fuerzas Armadas y, desde esa Posición de Mando Superior, debe igualmente sentirse responsable por las fallas que el resto de los organismos que también ejercen el Control Civil detecten en las Fuerzas Armadas.

También debe hacerse responsable ante las propias Fuerzas, como todo comandante es responsable de lo que su unidad haga o deje de hacer.

Si existe convicción en esa forma de ejercer el Mando Superior, se generará Alta Moral en la Institución Militar.

Por último, las Fuerzas Armadas deberán estar integradas a la actividad nacional. No alcanza con la integración funcional que en Uruguay se cumple a cabalidad. Deberán tam-

bién ser reconocidas tanto por el Factor Político como por la Sociedad por su *Misión Fundamental: por mandato constitucional las FF.AA. tienen la responsabilidad de emplear la capacidad letal que dispone la República, y arriesgar la vida de sus integrantes, como último recurso para la subsistencia de la Nación.*

Ese reconocimiento tan sencillo, de algo que es obvio, le proporcionará un respaldo psicológico y emotivo a la fría integración funcional de las Fuerzas Armadas.

NOTAS

1 *Democracia* tal como la conciben los "Orientales" civiles y militares es una concepción total de vida, con diversas manifestaciones en lo político, en lo social y en lo económico; la idea esencial es la libertad individual y la sumisión al Derecho. Es, en síntesis: el ordenamiento jurídico de la Libertad. La Democracia es dinámica y debe mantener el equilibrio sociológico de la Libertad. Pero también está claro que el Derecho del Ciudadano a la Libertad genera el Deber del mismo de protegerla y jerarquizarla. Su amplitud no puede exceder los límites de su vigencia, no

puede significar apertura a conductas, actitudes, corrientes o ideologías que la vulneren. "Democracia es un estado espiritual socialmente elevado y no una regalía suicida de sus valores a quienes buscan destruirla".

2 A.- *Concertación Nacional Programática.* Se llama así a la reorganización de la oposición política, al Gobierno Cívico-Militar a través de instancias de coordinación y unidad. Comienza en el extranjero en Europa y EE.UU. entre exilados marxistas y no-marxistas. Al instalarse en Uruguay es copada por elementos de izquierda. Su máxima expresión llega el 4 de

setiembre de 1984 e integrada por la Multipartidaria: el Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, Unión Cívica, y los grupos que forman parte de la Intersocial: PIT-CNT, ASCEEP-FEUU, FUCVAM, SERPAJ, así como representantes de las gremiales empresariales, de comercio y rurales (excepto la Asociación de Bancos). Los candidatos presidenciales de los cuatro partidos firmarán los acuerdos de la CONAPRO el 16 de noviembre de 1984. Fue la llave con la cual los Partidos Tradicionales (Nacional y Colorado), abrieron la puerta al avance incontenible del marxismo para conquistar todos los Factores del Poder en Uruguay. En Noviembre de 1983, en el Obelisco de Montevideo, una vez que el Gobierno de Facto anunció elecciones libres para Noviembre de 1984, tuvo lugar una reunión heterogénea donde los Partidos Tradicionales se unieron a los partidos de izquierda para atacar a las FF.AA. que voluntariamente les entregaban el Poder, declarándolas en la práctica su Enemigo y abriendo las puertas a una regresión a los primeros años de los setenta.

B.- General Reformado Líber Seregni. Ver (19).

C.- Antonio Gramsci. Ver (20).

3 OLAS. En la parte resolutive, la Declaración General de OLAS, expresa:

1. Que constituye un derecho y un deber de los pueblos de América Latina hacer la revolución.

2. Que la Revolución en América Latina tiene sus más profundas raíces históricas en el movimiento de liberación contra el colonialismo europeo del siglo XIX y contra el imperialismo de este siglo. La epopeya de los pueblos de América y las grandes batallas de clase contra el imperialismo que han librado nuestros pueblos en las décadas anteriores constituyen la fuente de inspiración histórica del movimiento revolucionario latinoamericano. 3. Que el contenido esencial de la revolución en América Latina está dado por su enfrentamiento al imperialismo y a las oligarquías de burgueses y terratenientes. Consiguientemente, el carácter de la revolución es de la lucha por la independencia nacional, la emancipación de las oligarquías y el camino socialista para su pleno desarrollo económico

y social.

4. Que los principios del marxismo-leninismo orientan al movimiento revolucionario de América Latina.

5. Que la lucha revolucionaria armada constituye la línea fundamental de la Revolución en América Latina.

6. Que todas las demás formas de lucha deben servir y no retrasar el desarrollo de la línea fundamental que es la lucha armada.

7. Que para la mayoría de los países del continente el problema de organizar, iniciar, desarrollar y culminar la lucha armada constituye hoy la tarea inmediata y fundamental del movimiento revolucionario.

8. Que aquellos países en que esta tarea no está planteada de modo inmediato, de todas formas han de considerarla como una perspectiva inevitable en el desarrollo de la lucha revolucionaria en su país.

9. Que a los pueblos de cada país y a sus vanguardias revolucionarias corresponderá la responsabilidad histórica de echar hacia delante la revolución en cada uno de ellos.

10. Que la guerrilla como embrión de los ejércitos de liberación constituye el método más eficaz para iniciar y desarrollar la lucha revolucionaria en la mayoría de nuestros países.

11. Que la dirección de la revolución exige como un principio organizativo, la existencia del mando unificado político y militar como garantía para su éxito.

12. Que la solidaridad más efectiva que pueden prestarse los movimientos revolucionarios, entre sí, la constituye el desarrollo y culminación de la propia lucha en el seno de cada país.

13. Que la solidaridad con Cuba y la colaboración y cooperación con el movimiento revolucionario en armas constituyen un deber insoslayable de tipo internacional de todas las organizaciones antiimperialistas del continente.

14. Que la Revolución Cubana, como símbolo del triunfo del movimiento revolucionario armado, constituye la vanguardia del movimiento antiimperialista latinoamericano. Los pueblos que desarrollan la lucha armada, en la medida en que avanzan por ese camino se sitúan también en la van-

guardia.

15. Que los pueblos directamente colonizados por las metrópolis europeas o sujetos por dominación colonial directa a los Estados Unidos en su camino para la liberación tienen como objetivo inmediato y fundamental el luchar por la independencia y mantenerse vinculados a la lucha general del continente como única forma de evitar ser absorbidos por el neocolonialismo norteamericano.

16. Que la Segunda Declaración de La Habana, recogiendo la hermosa y gloriosa tradición revolucionaria de los últimos 150 años de la historia de América, constituye un documento programático de la Revolución Latinoamericana, que los pueblos de este continente durante los últimos cinco años han confirmado, profundizado, enriquecido y radicalizado.

17. Que los pueblos de la América Latina no tienen antagonismos con ningún otro pueblo del mundo y le extienden su mano fraternal al propio pueblo de los Estados Unidos, al que exhortar a luchar contra la política represiva de los monopolios imperialistas.

18. Que la lucha en América Latina fortalezca sus vínculos de solidaridad con los pueblos de África y Asia y de los países socialistas, y con los trabajadores de los países capitalistas, especialmente con la población negra de los EE.UU., que sufre a la vez la explotación de clases, la miseria, desempleo, la discriminación racial y la negación de los mas elementales derechos humanos y constituye una importante fuerza a considerar en el contexto de la lucha revolucionaria.

19. Que la lucha heroica del pueblo de Viet Nam presta a todos los pueblos revolucionarios que combaten al imperialismo, una inestimable ayuda y constituye un ejemplo inspirador para los pueblos de América Latina.

20. Que hemos aprobado los Estatutos y creado el Comité Permanente, con sede en La Habana, de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la constituye la genuina representación de los pueblos de América Latina.

propósito de Defensa Nacional, La Maniobra Exterior”, acuñó el término “sujetos estratégicos” y los define como: “sujetos que tienen relación con un estado nación y son capaces de influir en forma positiva o negativa sobre sus intereses. Se trata de estados o conjuntos de estados unidos por una causa; organismos internacionales; empresas nacionales, transnacionales o multinacionales; organizaciones no gubernamentales; partidos, sindicatos, movimientos sociales, políticos o de otra naturaleza, internos pero relacionados con el exterior, opuestos o a favor de los intereses nacionales. Entre esos sujetos estratégicos se deberá convivir. Lo que significa aceptar, rechazar, ayudar, imponer, reprimir, transar, dar, recibir, intercambiar, distribuir, organizar, asignar prioridades, apoyar o quitar apoyo. Derivado de situaciones de valencia variable, pueden existir ayudas, alianzas, apoyos, compromisos, antagonismos, tensiones, disuasiones, amenazas, coacciones, agresiones”.

5 *Civilismo excluyente*. Período de la historia que se gobernó con prescindencia absoluta de la Institución Militar, relegándolas a un segundo plano; hubo momentos que fueron empleadas como “fuerzas gubernistas” para asegurar la estabilidad interna. A lo largo del siglo XX las FF.AA. se fueron profesionalizando hasta convertirse en FF.AA. Nacionales. Abarcó desde fines del “Militarismo” en 1886 hasta 1971.

6 *PCU. Partido Comunista en el Uruguay*. Como su nombre lo indica es una organización política dependiente de centros de poder externos, en su momento el más fiel a la URSS. Aceptó a “pies juntillos” las 21 condicionantes cuando en 1920 se afilia a la Tercera Internacional con motivo de la creación del COMINTERN.

MLN-T. Tupamaros. Movimiento sedicioso que hace su aparición el 31 de Julio de 1963, cuando asaltan y roban armas y municiones del Club de Tiro Suizo de Nueva Helvecia, Departamento de Colonia. La mayoría de estas armas habían sido cedidas en préstamo por el Ejército. Luego se convertiría en el movimiento guerrillero urbano más famoso del mundo luego del argelino.

7 El MLN-T plasma la “*continentalidad*” de la lucha subversiva y por ende sediciosa, a mediados de la década de los sesenta del Siglo XX, cuando en su documento 1 pide que “las organizaciones revolucionarias colaboren con sus máximas posibilidades en la elaboración y construcción de la estrategia continental” y agrega: “la revolución no debe detenerse en las fronteras nacionales”. Esa postura queda abonada por la presencia de sediciosos latinoamericanos y españoles en el MLN-T y la actuación de terroristas uruguayos en Argentina, Chile, Bolivia y países de África, entre otros.

8 Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la R.O.U. Lo acaba de confirmar en abril de 2009 en su declaración en Costa Rica “...el Uruguay no merece un ley de impunidad,...yo siempre estuve en contra...”

9 Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la R.O.U.: “Gobernaré con una mano en la Constitución de la República y la otra en el Programa del Frente Amplio”.

10 Liberación del *Imperialismo*. En su lucha contra el capitalismo los marxistas identifican a los Estados Unidos como centro promotor y sostén de ese sistema. *Esa es la verdadera razón del alineamiento y enfrentamiento de los Bloques durante la Guerra Fría.*

11 El ejemplo más a mano que encontramos son los activistas de DD.HH. en el Uruguay que ignoran sistemáticamente las *violaciones de los DD.HH. en Cuba y en todos los países que se oponen a los Estados Unidos.*

12 Pensando ganar la buena voluntad de los países más poderosos que le imponían esa legislación supranacional.

13 Islámica, Sínica, Japonesa, Ortodoxa Rusa, India.

14 Esto demuestra que lo que determina la ideología se encuentra por

encima de los valores, para la “fuerza política en el gobierno” del Uruguay,.

15 *Sucesos de Febrero de 1973*. La obsesiva y cada día más intensa preocupación de los dirigentes políticos, especialmente los parlamentarios, a medida que los éxitos de las FF.AA. se consolidaban, fue creciendo de tal modo, que llegó al extremo de presionar e inducir al Poder Ejecutivo - mediante el artilugio de la designación de un nuevo Ministro de Defensa Nacional- a los efectos de cambiar el rumbo y frustrar la misión de “restablecer el orden interno y brindar seguridad al desarrollo nacional”, que las Fuerzas se habían trazado y venían cumpliendo con el beneplácito general de la ciudadanía y de toda la opinión sana del país. Los Mandos Militares, advirtiendo las irreparables proyecciones de la maniobra que se ensayaba a nivel político, plantearon sus discrepancias al Presidente de la República y le sugirieron el relevo del nuevo Secretario de Estado, cuya autoridad se habían negado a reconocer. Se debe dejar constancia que ninguna de las Cámaras, ni la Comisión Permanente, ni la Asamblea General, se reunieron para analizar los graves hechos sucedidos en Febrero de 1973 y que ellos habían sido los grandes instigadores. No asumieron ni enfrentaron ningún tipo de responsabilidad, era más cómodo hacerse los desentendidos. Nadie podrá explicarse nunca tamaña omisión en el cumplimiento del deber público.

16 Existe una publicación “Uruguay Verdad” donde se detallan las obras de infraestructura que se realizaron en el período del “Gobierno Cívico Militar”, la mayor en la historia del Uruguay. También en ese período, hubo formidables logros de distinta naturaleza, como el “Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo” (19-Nov-1973) pendiente de resolución desde siempre, el reordenamiento administrativo de toda la Administración Pública, la exaltación del sentimiento patriótico y el afianzamiento de la soberanía, la Jubilación Automática, la Ley Nacional de Electricidad (1-Sept-1977), convenios de trabajo entre UTU (Universidad del Trabajo del Uruguay) y organismos del Estado con especialidades afines, creación

de la “Universidad Católica del Uruguay - Dámaso A. Larrañaga” (22-Ago-1984), creación del CONAE (Consejo Nacional de Educación), por Ley N° 14101 de 1974 el que estableció por la Ordenanza N° 28 el nuevo Estatuto del Docente, creación de ANTEL (Administración Nacional de Telecomunicaciones), el 25 de Julio de 1974, etc.

17 “*Combatir a los militares con presupuestos y leyes*”, Frase pronunciada por el Ex Presidente Julio María Sanguinetti en Asunción del Paraguay en un Seminario sobre el “Tema Militar”, hace ya muchos años.

18 *Límite Mínimo del Poder Militar*. Se relaciona con la fuerza disponible real o potencialmente. Está dado por aquella situación en la cual el Factor Militar, si decrece, pierde posibilidades de cumplir las misiones asignadas como parte integrante del Poder Nacional. Será un poder no creíble, por lo tanto carente de capacidad de lograr efecto disuasivo.

19 *General Reformado Líber Seregni*.

General Reformado quiere decir Ex General. A los “Oficiales Reformados”, la Institución no los abandona y le abona un tercio de su “Haber de Retiro”, pasando los dos tercios restantes a su Esposa o Familia. *No pueden usar el Grado, ni el uniforme*.

Fue sometido a Tribunales de Honor en varias oportunidades durante su carrera militar, por asuntos políticos e ideológicos, pero igual se las ingenió para llegar a ser General, grado al cual llegan muy pocos; en nuestro Ejército la carrera termina de Coronel, “ser General es un accidente decía un viejo Soldado”. A lo último terminó degradado y en prisión. En 1985 cuando se reinstaura la institucionalidad democrática, el Presidente Sanguinetti, como pago y agradecimiento por su colaboración en el Pacto del Club Naval, le devolvió el grado y los honores correspondientes, pero en la interna del Ejército nunca se lo reconoció como General luego de los sucesos de 1970 en adelante.

Para el Ejército fue un “traidor”, y “un agente comunista”; esto ha sido confirmado en numerosas biografías y artículos, que “civiles adeptos”

han hecho sobre su persona y que ingenuamente, en su *desconcepto de la vida militar*, han ratificado las sospechas. No se pudo confirmar oficialmente, ya que Guillermo Bodner, un judío-uruguayo que tenía los archivos de la “Cuarta Dirección” del Partido Comunista en el Uruguay; que atendía la infiltración de los comunistas en las Fuerzas Armadas (FF.AA.), logró escapar y se exilió en la Embajada de México, viajando luego a dicho País.

Un General Uruguayo oportunamente dijo: “*Para nosotros: los comunistas no son demócratas*; estamos persuadidos de que el ingreso de Seregni a la Escuela Militar fue a instancias del Partido Comunista, como “topo”, como “agente dormido”. Nos resulta absolutamente inconcebible que el hijo de un “anarquista” pudiera ingresar en la Escuela Militar, en una época de un “civilismo excluyente”, donde únicamente los muy vocacionales se atrevían a realizar la carrera militar. (Esto no ha cambiado nada de esa época hasta la actualidad, hay que ser muy vocacional para ser Oficial del Ejército en el Uruguay)”.

Como político fue el articulador de la unión de las izquierdas en 1971 y el conductor del Frente Amplio en el ostracismo desde la cárcel, al que guió disciplinadamente. A partir de 1985, Seregni avizó la caída del comunismo en el mundo y levantó las banderas de “avanzar en democracia”, en un golpe de timón digno de un político capaz y ambicioso, abandonando la violencia leninista y abrazando el insidioso “gramscismo”, con la impagable complacencia de los Partidos Políticos Tradicionales.

Fue condecorado con la orden al mérito “Lenín”, en la todavía existente URSS.

Entre sus “récorde” y relacionado con el Foro de San Pablo, fue quien introdujo a Hugo Chávez en el mismo.

20 Antonio Gramsci. (1891 – 1937)

Marxista Italiano, fundador del Partido Comunista junto con Palmiro Togliatti, se lo consideró un “disidente” del leninismo porque preconizaba el “acondicionamiento mental de la sociedad” para el triunfo

del comunismo, priorizándolo sobre la lucha armada.

Su obra se centra en la importancia de los fenómenos culturales en la transformación de la sociedad occidental, y en el control ejercido por las clases dominantes a través de la cultura. Se ha convertido en figura dominante del pensamiento marxista contemporáneo. Al no poder establecer una dictadura abierta en las naciones occidentales, sus seguidores han adoptado una vía más larga que se busca sea más efectiva, más sólida y afianzada que es la “dictadura mental”.

Gramsci junto a otros pensadores marxistas se abocó a diseñar una estrategia para Occidente, especialmente para Italia y por extensión para todos los países de cultura latino-católica.

A diferencia de Lenin que preconizaba la conquista en primer lugar de la “sociedad política” personificada en el Estado y otros organismos que ejercen una función coercitiva y de dominio directo en el campo jurídico, político y militar, Gramsci en cambio sostiene que hay que conseguir la conquista de la “sociedad civil”: la Universidad, la Educación, la Cultura, los Medios de Comunicación, entre otros que son los que crean un modo de pensar en el pueblo, le crean un “sentido común”, o modo natural de sentir y pensar.

Por lo expuesto, parecería que estamos viviendo en un mundo diseñado por Gramsci: se han invertido las valoraciones morales y políticas, se busca desjerarquizar todo lo valioso, se exalta todo lo que sea o implique “horizontalismo”, se “desconstruye” el sano pensamiento filosófico y teológico, de forma tal que queda “pulverizado” en una multitud de nuevas ideologías, “filosofías”, cuyo sólo empeño es “desmitificar”, “secularizar” y “desacralizar”.

El programa es bien claro: “lograr el desprestigio de la clase hegemónica, de la Iglesia, de las FF.AA., de los intelectuales, de los profesores y maestros, etc.

Al decir de Alfredo Sáenz: *“Gramsci considera que se ha ganado una gran batalla cuando se logra la defección de un intelectual, cuando se conquista a un teólogo traidor, un militar traidor, un profesor traidor, traidor a su cosmovisión....ya que cada de uno de ellos arrastra tras de si a un número considerable*

de prosélitos”.

Cualquier similitud con lo que está sucediendo en nuestras patrias NO es simple coincidencia.

8.

El Socialismo del Siglo XXI contra las Fuerzas Armadas en Venezuela

Colaboración de la Alianza Militar por Venezuela

1. Introducción

El Preámbulo de la Constitución de Venezuela promulgada el 30 de diciembre de 1999 propugna “*el establecimiento de una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolida los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para ésta y las futuras generaciones; asegura el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad, sin discriminación ni subordinación alguna; promueve la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo a los principios de la no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional y el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio irrenunciable de la humanidad...*”.

Según el Artículo 3 de la Constitución Nacional vigente, “*el Estado venezolano tiene como fines esenciales la defensa y el de-*

sarollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución”.

Por otra parte, la Fuerza Armada Nacional (FAN) representa la única institución del Estado Venezolano, autorizada por la Constitución para ejercer la Defensa Militar de los intereses soberanos de la Nación y la custodia de las armas y equipos bélicos de la República.

Según su Artículo 328 “....*la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y la ley”* .

En otra parte del mismo Artículo, se establece que “*la Fuerza Armada Nacional esta integrada por el Ejercito, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional...*”. Ello implica la formación profesional y doctrinaria de sus integrantes en una estructura cerrada, de mando vertical y de pensamiento compenetrado con la Seguridad y Defensa de la Nación, dentro del respeto al marco democrático de sustentación política que rige la gobernabilidad del Estado.

Su profesionalismo y dedicación la obliga a alejarse de las parcialidades políticas y encerrar su actuación en la obediencia a su deber constitucional y que “*en cumplimiento de sus*

funciones está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna” (Artículo 328). La Constitución establece que los militares en servicio activo no pueden optar a cargos de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político (artículo 330).

2. Antecedentes

Es verdad que el teniente coronel Hugo Chávez Frías llegó al poder con el voto democrático y mayoritario de los venezolanos, basado en promesas que el pueblo acogió con entusiasmo y optimismo como tabla de salvación contra gobiernos que ya habían agotado sus mejores argumentos y opciones dentro de la democracia representativa, y que ya mostraba inquietantes síntomas de la caducidad de sus argumentos, propósitos e ideales y, por lo tanto, era perentoria y necesaria su renovación.

Pero las esperanzadoras expectativas que nos prometió el nuevo mandatario, al paso del tiempo se han tornado en crueles desengaños. Las mentiras, desaciertos, ineficiencias, vergonzante corrupción, mas burocracia parasitaria, entrega sin medida proporcional de apreciable parte del patrimonio nacional a otros países, y otras aberraciones similares y hasta peores comparadas con las que gobiernos anteriores habían cometido; liquidaron las ilusiones, las aspiraciones, las esperanzas y expectativas, y la posibilidad de una vida mejor para el

pueblo venezolano.

Su discurso y acciones han tomado un curso retrogrado y hoy observamos que se ha multiplicado la desconfianza, la disolución, el desaliento, la duda y la desmoralización de un pueblo que confiadamente creyó en sus ofrecimientos y hoy solamente les queda una angustiante y desconsolada frustración.

Desde nuestra formación como República libre e independiente, se hicieron grandes esfuerzos por organizar un Ejército Nacional, todos estos esfuerzos se diluyeron en medio de la anarquía y la pugna estéril entre los próceres de los bandos civiles y militares que participaron en la guerra de Independencia, facciones enfrentadas por el poder, caudillos que surgían por los cuatro puntos cardinales de nuestra geografía nacional, reclamando su pedazo de Patria para un grupo armado en armas.

Así hubo de transcurrir todo el siglo XIX, para que la Revolución Liberal Restauradora en el año 1.899, al mando del General Cipriano Castro, se iniciara un proceso de paz duradero para la República, con la erradicación de los caudillos civiles y militares. El General Juan Vicente Gómez dirigió al país a partir del año 1.908 hasta su muerte en 1.935. Durante este período se hizo un gran esfuerzo doctrinario y de organización, y eso permitió que en 1.910 entrase en funcionamiento la Academia Militar de Venezuela, la cual da inicio a la profesionalización de la Institución Armada.

El énfasis y orientación del pensamiento militar estaba dirigido a crear una organización piramidal de mando vertical, subordinada al poder civil, al servicio del Estado y a garantizar

la seguridad y defensa nacional. A partir del año 1.945 se profundiza el proceso de modernización de la institución armada, se envían oficiales a efectuar cursos de Estado Mayor y de especialización técnica en el exterior, se mejoran las instalaciones, las raciones, se adquieren sistemas de armas, comunicaciones, transporte y fusiles automáticos, y se mejora el sistema de seguridad social de sus miembros.

En los años 60 aparecen en el país acciones guerrilleras cuyo fin político era conquistar el poder para establecer un gobierno comunista. El gobierno castrista apoyó con todas sus fuerzas el movimiento subversivo en Venezuela y se establecieron frentes guerrilleros en diferentes zonas urbanas del país, así como en más de 10 frentes rurales; esto exigió a la institución armada una rápida adaptación para enfrentarlas y se activaron varios Teatros de Operaciones con unidades y efectivos de todos los componentes de la organización.

Fidel Castro apoyó esta etapa sangrienta para Venezuela, ejecutando un desembarco con guerrilleros cubanos por la región de Machurucuto, al mando de quien después sería el célebre general Ochoa; este desembarco es derrotado por la Fuerza Armada Venezolana y apresados sus integrantes. Fidel Castro envía armas y pertrechos por las costas del Estado Falcón, la cuales son capturadas por las autoridades; y, a partir de estas acciones, Venezuela logra la expulsión de Cuba del seno de la OEA. Por la derrota militar que sufrieron y la política de pacificación de 1.969, los guerrilleros venezolanos se reinser-taron a la vida democrática.

En el año 1.969 se celebra en La Habana la Internacional Socialista, donde se toman decisiones importantes, entre ellas una táctica muy bien teorizada por Lenin: La Infiltración, y así vemos como los organismos del Estado venezolano, los gremios profesionales, la Fuerza Armada, sindicatos, sistema educativo, judicial, el económico, medios de comunicación y federaciones campesinas, serán penetradas por marxistas radicales, haciéndose pasar por Demócratas luchadores sociales. Hugo Chávez Frías representa el ejemplo más emblemático de cómo el comunismo penetró a la Fuerza Armada Nacional. De formación marxista a muy temprana edad, Chávez ingresa a la Institución con un plan político para acceder al poder a través de la insurrección militar.

Podemos afirmar que durante el periodo 1958-1998, correspondiente a los gobiernos de ejercicio democrático representativo, las Fuerzas Armadas de entonces alcanzaron el mayor grado de prestigio y desarrollo jamás logrado en nuestra historia republicana. Prueba de ello lo constituye el haber ocupado siempre un lugar privilegiado entre las instituciones que gozaban de mayor credibilidad y respeto en la sociedad civil.

A pesar de los innegables logros alcanzados, persistieron importantes fallas atribuibles a la falta de decisión de los diferentes gobiernos de no querer establecer una política militar de Estado, proyectada en el tiempo, que permitiera realizar las reformas exigidas de manera perentoria por los cuadros profesionales de las Fuerzas Armadas. Entre ellas se destacan las siguientes:

- La negativa de aprobar una verdadera reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que permitieran transformar el sistema de ascenso y de permanencia en la situación de actividad del personal profesional, crear una verdadera meritocracia, y conformar una estructura militar adaptada a los nuevos tiempos, para poder consolidar un verdadero liderazgo, modernizar el servicio militar y establecer una planificación a largo plazo.
- Carencia de programas de mantenimiento para los modernos sistemas de armas que se adquirieron a solicitud de las diferentes fuerzas o componentes.
- El excesivo e innecesario empleo de la Institución Armada en actividades que no le son propias, incidió negativamente en la moral del personal y en el necesario e imprescindible entrenamiento de las tropas.

Al asumir el teniente coronel Hugo Chávez Frías la Presidencia de la República, renació la esperanza entre quienes aspiraban a que se produjeran profundos cambios en las Fuerzas Armadas. Lamentablemente no ha sido así. Por el contrario, hoy en día nos encontramos con la triste realidad de verlas orientadas a cumplir un papel totalmente alejado de su verdadera responsabilidad institucional.

3. Situación Actual

Es un hecho palmario que la democracia venezolana se

encuentra amenazada de muerte. Es necesario subrayar las múltiples acciones emprendidas por el régimen de Hugo Chávez para desconocer y descalificar el pluralismo político que es la base misma de la democracia, violando las mismas normas que establecen la Constitución y las leyes de la República.

La campaña del régimen, encaminada a la destrucción de los valores democráticos, a través de decretos, medidas y sus propias acciones, es permanente e inconstitucional. Trata de imponernos el ignominioso “pensamiento único” y la creación del “hombre nuevo”, enmarcado en su proyecto del “socialismo del siglo XXI”, rechazado por la mayoría de los venezolanos en la consulta electoral del 2 de diciembre de 2007.

Este proyecto nos recuerda las más siniestras y oscuras maquinaciones de los regímenes estalinistas, de estremecedora recordación, por las consecuencias de sus inhumanos genocidios, destrucción y aniquilamiento de toda clase de disidencia.

Este nefasto sistema no ha desaparecido con la caída del Muro de Berlín, puesto que en la práctica continua aplicándose, por parte del dictador Fidel Castro y su hermano Raúl, quienes, junto con su antiguo compinche, el Che Guevara, establecieron un régimen dictatorial que ha prevalecido por mas de cincuenta años en Cuba.

En Venezuela, el gobierno mantiene un tozudo empeño por cambiar la historia y torcer sus hechos mas relevantes, para encaminarla a considerar solo aquellos que le son favorables a su mal llamada “revolución”. Se pretende imponer un adoctrin-

namiento ideológico de corte comunista en el sistema educativo nacional y, más grave aún, en las escuelas e instalaciones militares.

La separación de los poderes, que es parte de la esencia misma de la democracia y que fue una de las consignas banderas para llegar al gobierno, es desconocida insolente y cínicamente cuando se dan ordenes directas, al más puro estilo cuartelero, a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Fiscalía General, al Consejo Nacional Electoral, a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo y a otros órganos subalternos, supuestamente autónomos, cuyos acoquinados directivos no responden otra cosa que: “Ordene usted, mi Comandante”.

Dentro de su pusilanimidad, no se atreven ni siquiera a solicitar el requerimiento por escrito, por temor a cometer una afrenta contra el “bien amado líder”, que pueda significar la pérdida sus muy lucrativas canonjías. La concentración de todos los poderes en la persona de Chávez, recuerda mucho el estilo del pervertido Rey francés Luis XIV, con su famosa expresión de “El Estado soy Yo”.

También es preocupante el empeño del régimen en continuar su política de expropiación ilegal de tierras, haciendas y fundos en plena producción, arruinando a sus legítimos propietarios y ocasionando confusión, trastorno y descontento entre los productores del campo. Estatización o confiscación de empresas -públicas y privadas- de electricidad, teléfonos, gas, alimentos, cemento, hierro y aluminio, entre otras; las cuales, a la larga, se harán mas improductivas e ineficientes, y termi-

narán convertidas en patios de chatarra, propiciando las condiciones para ser de nuevo privatizadas, pero en manos de empresarios afines al gobierno. Están en lista de espera: la banca, las clínicas privadas, el transporte terrestre, marítimo y aéreo, la industria pesquera, la educación privada, la industria automotriz, etc.

Todo esto ha ocurrido durante un período en que nuestro país ha obtenido por la renta petrolera ingresos que, cuantitativa y comparativamente, superan todos los recibidos por la totalidad de los gobiernos que ha tenido Venezuela en toda su historia. Lo anterior es posible por el empeño de Hugo Chávez Frías en centralizar y controlar todas las actividades económicas, condición sine qua non para facilitar su paso al sistema comunista; sistema que, como es sabido, ha experimentado rotundos fracasos en todas partes donde se ha querido imponer; y que, además, fue rechazado por los venezolanos en el referéndum del 2 de diciembre de 2007.

Los síntomas de la alarmante descomposición en Venezuela se evidencian en: El aterrador desbordamiento de la crisis ético-moral, materializada en los escandalosos hechos de corrupción denunciados diariamente en los medios de comunicación; el abominable trafico de influencias y grosero nepotismo en el entorno familiar de Hugo Chávez y sus parientes mas cercanos; los horrorosos extremos a que ha llegado la inseguridad personal, que se contabiliza en cientos de asesinatos semanales en todo el territorio nacional, como si Venezuela se encontrara en un estado de guerra; la multiplicación de los desvergonzados y bochornosos actos de corrup-

ción, llevados a cabo por connotados dirigentes del partido en el poder y por sus subalternos inmediatos; los cuales superan en numero de transgresores y en cuantía a lo desvalijado, estafado, malversado y saqueado al tesoro nacional durante los anteriores gobiernos, de la denominada “cuarta república”.

Es necesario subrayar también, las múltiples acciones emprendidas por el régimen para desconocer y descalificar el pluralismo y la disidencia política, que es la base misma de la democracia, a través de planes preconcebidos; utilizando la justicia conculcada, la mas paladina persecución, encarcelamiento y exclusión de valiosos y prominentes venezolanos, hechos que demuestran el desprecio evidente del régimen por el ejercicio de los mas sagrados derechos universales del ciudadano. Son muchas y variadas las denuncias interpuestas por diferentes organizaciones no gubernamentales ante la OEA y la ONU por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Hugo Chávez Frías.

Hugo Rafael Chávez Frías se graduó en la Academia Militar de Venezuela de subteniente del ejército en el año 1.975 y empieza a cumplir con su plan conspirativo dirigido por la izquierda radical venezolana (tutelada por Fidel Castro). Durante 15 años, valiéndose del engaño y de la manipulación, logró reclutar a un grupo importante de oficiales, proponiéndoles un proyecto de apariencia nacionalista, sustentado en un caballo de Troya, llamado el “árbol de las tres raíces”. Dicho proyecto se basa, supuestamente, en los ideales de tres personajes de nuestra historia: Simón Bolívar, Simón Rodríguez (maestro del Libertador), y el General Ezequiel Zamora, quien

en el siglo XIX fue uno de los líderes de una guerra civil llamada Federal.

Chávez nunca mencionó su verdadera filiación ideológica -de corte marxista leninista castrista- ni su reverencia hacia el Ché Guevara, porque sabía que no hubiera tenido éxito. Esta fue la forma ingeniosa y fraudulenta que utilizó para arrastrar a muchos oficiales a la insurrección militar en contra del gobierno constitucional, realizada el 04 de febrero de 1.992. Este golpe militar fue derrotado por la Fuerza Armada Institucional y Democrática. Como consecuencia, Chávez fue a la cárcel, de donde salió por una medida de gracia del entonces Presidente Rafael Caldera. Posteriormente, en las elecciones de Diciembre de 1.998, alcanza el triunfo presidencial, recibiendo el apoyo de una población frustrada y desencantada de la dirigencia de los partidos políticos del país.

A partir de ese momento, los comunistas venezolanos, que fueron derrotados militarmente en los años 60, toman el poder en Venezuela, apoyados por el marxismo internacional. Esta nueva situación les dio la oportunidad de saciar todo el odio y el resentimiento acumulado a lo largo de 40 años contra la institución militar, sumados a los que tenía Chávez, por haber sido derrotado el 04 de Febrero de 1.992.

Todas estas circunstancias convergen para someter a las FF.AA. a un diabólico plan de destrucción institucional. Irónicamente, el plan está dirigido por un militar; pero por un militar que infiltró a la Institución, para usarla como trampolín para acceder al poder; un militar sin vocación castrense; un político infiltrado, sin valores ni principios, para quien, como

decía Hitler: “La moral no es compatible con la búsqueda del poder”.

4.- Plan de Destrucción de la Fuerza Armada Nacional

Tan pronto asumió el gobierno, Chávez convoca a Martha Harnecker, revolucionaria con vasta experiencia en Chile, Nicaragua y en toda la lucha revolucionaria continental. Ella le presenta un plan para destruir a la Fuerza Armada Nacional Institucional, el cual resalta... “Las acciones de desprestigio, desmoralización y provocación”, entre las que se destacan las siguientes:

- La satanización de la Fuerza Armada en la etapa democrática de 1.958 a 1.998.
- Activación de programas especiales como el Plan Bolívar 2.000, con asignaciones mil millonarias, generando corrupción en todos los niveles de la organización.
- Utilización del personal militar en la Administración Pública, con los mismos fines.
- Presencia de Fidel Castro en las instalaciones militares y entrega de la réplica del sable del Libertador.
- Arengas constantes al personal militar en formación, sobre la revolución, lucha de clases y la guerra al imperialismo.
- Valoración suprema de la lealtad al proceso y al líder, sobre los principios establecidos, promoviendo el servilismo y el espionaje entre compañeros.
- Ascensos a oficiales a grados superiores con historiales

negativos, premiando la adulación y el amiguismo revolucionario.

- Invasión masiva del G2 cubano para cumplir funciones de seguridad interna en el país.
- Purga de oficiales de todos los grados, sin cargo en sus casas, sometidos a juicio y separados de la organización militar. Publicación de pasquines tipo lejano oeste, ofreciendo recompensas monetarias por la detección o captura de oficiales no revolucionarios.
- Aplicación de un espionaje masivo en las unidades militares.
- Radicalización del discurso revolucionario en las instalaciones militares.
- Reemplazo de la mística y del espíritu militar por la Devoción Revolucionaria.
- Vinculación del gobierno con la guerrilla colombiana, desvirtuando el empleo de la Fuerza Armada en la frontera.
- Manipulación y utilización de la FAN como una herramienta represiva y de miedo hacia la sociedad democrática, convirtiendo al profesional militar en un instrumento policial del caudillo.
- Conformar un cuadro de militares serviles a la revolución, a través de la compra de voluntades y del chantaje profesional.
- Buscar que el eje Castro-Chávez consolide en Venezuela el centro vital de la expansión estratégica regional de este movimiento de extrema izquierda.

Desde 1999, la política militar del gobierno bolivariano ha mantenido una dirección constante que apunta y abre camino al “socialismo militarista”, basada en el sometimiento de la Fuerza Armada Nacional a la revolución y no a las necesidades de Seguridad y Defensa nacionales.

En el año 1999, el entonces nuevo gobierno, realiza esfuerzos concretos para lograr el reconocimiento interno (FAN) de los golpistas del 4 de febrero y 27 de noviembre del año 1992, al tiempo que crea los mecanismos de sometimiento al nuevo poder civil, distintos al mecanismo tradicional de subordinación de la Fuerza Armada.

La primera manifestación pública de las verdaderas intenciones del presidente Hugo Chávez Frías, se vio en los discursos y actos públicos del nuevo gobierno, cuando cambia el concepto operacional de la Fuerza Armada a un concepto social (Plan Bolívar 200) e incluye la participación activa de los golpistas de 1992, ahora “reivindicados”, en funciones importantes de gobierno.

Sin embargo, no es sino hasta después de la aprobación de la nueva Constitución en diciembre de 1999, cuando se manifiesta en toda su dimensión la verdadera política militar del régimen; la orientación castrista con la carga anti norteamericana visible. Desde entonces la política de Hugo Chávez ha sido de enfrentamiento con Estados Unidos de América, acercamiento con Cuba y control -en forma no tradicional- de la Fuerza Armada Nacional.

Una vez conocida la intención de Hugo Chávez de destruir el sentido profesional e institucional de la Fuerza Ar-

mada Nacional para convertirla en una organización politizada y al servicio de su proyecto político, las acciones dirigidas a tal propósito se encuentran enmarcadas en las siguientes decisiones de carácter militar tomadas por el régimen en el ámbito legal, estructural, logístico y doctrinario:

A. El impacto de la Constitución de 1999

La Constitución de 1999 produjo un cambio profundo en las relaciones del Poder Civil y el Poder Militar, fundamentando su relación con la disciplina, la obediencia y la subordinación, y no a partir de la defensa de las instituciones legítimamente constituidas. Deliberadamente se suprimen en la nueva constitución los artículos referidos en la constitución de 1961, respecto a la “no deliberancia” de los militares y a la obligación de “asegurar la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará por encima de cualquier otra obligación”.

Asimismo, se eliminó la prohibición a los militares de ejercer simultáneamente la autoridad militar y civil. Es decir, se llega a una Fuerza Armada sometida por las leyes a las órdenes arbitrarias del Ejecutivo y desprendida de la conciencia del deber. De esta forma, quedan atrás las Fuerzas Armadas de un estado democrático, comprometidas con la seguridad y la defensa de la Nación, y con la protección de la población. Se define una nueva Fuerza Armada subordinada a los objetivos ideológicos del régimen y a la consolidación del socialismo militarista.

B. El impacto de la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional

Logrado el marco legal general, el segundo paso más importante en el proceso de sometimiento y control de la Fuerza Armada Nacional, fue alcanzado con la aprobación de la nueva Ley Orgánica. Allí se plantea legalmente el cambio de estructura, organización, misiones y funciones; es decir, se creó la nueva Fuerza Armada, basada en la “participación de la población” a través de la creación de la reserva, recientemente transformada en milicia.

Con estos cambios se amplió la base de participación política-ideológica dentro de la institución. La nueva estructura da cabida a la presencia de bandas armadas dentro de la Fuerza Armada, violando el Artículo 328 de la Constitución Nacional, que establece que la Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional.

C. Incremento del gasto militar para la adquisición de nuevos sistemas y equipos militares en países ideológicamente afines a la revolución

El alejamiento de Estados Unidos de América ha venido acompañado de un amplio plan de adquisiciones de sistemas, equipos, armas y municiones de fabricantes y países identificados con doctrinas socialistas (entre ellos Rusia). El programa de adquisiciones es una forma de abrirle la puerta de la defensa nacional, sistemas de inteligencia y seguridad interna a funcionarios rusos y cubanos, entre otros. Producir un cambio en los sistemas tradicionales es costoso, lleva tiempo y establece

nuevas doctrinas operacionales; es decir, modifica la doctrina y el pensamiento militar.

D. Cambio en la doctrina militar

La doctrina de empleo, formulación de hipótesis de conflictos, definición de enemigos y los escenarios de actuación (Concepto Estratégico Militar), han sido modificados. Se pasó de la confrontación convencional de una Fuerza Armada orientada a la defensa nacional, a una Fuerza Armada cuyo escenario principal de actuaciones es el orden interno y la preservación de la revolución y de su caudillo autócrata, Hugo Chávez. La doctrina militar revolucionaria, mal llamada “bolivariana”, tiene como elemento principal la confrontación entre un factor poderoso (régimen) contra un opositor débil (oposición o disidencia).

¿Hacia donde vamos? Nos dirigimos a la adopción de la doctrina militar cubana, la cual tiene sus antecedentes en la doctrina de la antigua Unión Soviética, conocida como “Guerra de todo el Pueblo”. El régimen castro-comunista creó su doctrina con base en el pensamiento militar de sus líderes comunistas, en las características geográficas de una isla y en su historia militar. Nuestros estrategas, civiles y militares, la tomaron como modelo, y en la práctica realizan la preparación global de los líderes de las fábricas, industrias básicas, dependencias oficiales, barrios, comunas y zonas rurales.

La incitación psicológica de la población contra el enemigo externo e interno, es decir, contra el imperialismo yanqui y la disidencia, respectivamente, es permanente; con el auxilio

de todos los medios disponibles controlados por el régimen; se aumenta el contenido ideológico en la propaganda oficial y, para justificar su comportamiento, constantemente se repite la amenaza de una supuesta invasión.

E. El fomento de la corrupción militar

La llegada de Hugo Chávez al poder significó dentro de la Fuerza Armada Nacional la promoción de la corrupción en sus más variadas formas. Corrupción moral de los mandos, al eliminar los meritos personales y profesionales, y sustituirlos por la lealtad revolucionaria. Corrupción en la administración militar, como forma de asegurar lealtades, ejercer y ganar el control interno de la Institución.

F. Situación de la institucionalidad

Hábilmente, Hugo Chávez, en sus relaciones con la Fuerza Armada, se ha colocado por encima de la Constitución, al garantizar respaldo a las actuaciones de los militares si las mismas están alineadas con los objetivos de la revolución. La institucionalidad, cadenas de mando y el órgano regular, no cuentan para los abiertamente identificados y comprometidos con el proceso revolucionario.

La institucionalidad fue sustituida por las reglas dictadas por la “mayoría” revolucionaria, representada por los mandos comprometidos y la oficialidad sometida sobre la base del terror, sospecha, miedo, persecución, y la acción psicológica permanente.

Resulta sumamente difícil mantenerse dentro de la

Institución armada si no se está abiertamente con la revolución. El régimen no escatima mecanismo alguno, aunque sean ilegales y abusivos, para enviar a su casa o dar de baja a los militares que no están con el proceso, a través de procesos sumarios.

G. Imposición del modelo de Defensa Integral Popular

Se impulsa el modelo binomio cívico-militar (milicia y guardia territorial) en los estratos sociales bajos de la población, identificados como D y E, alegando que los poderosos quieren nuestro petróleo y hay que defenderlo (división de la sociedad); es decir, se profundiza el odio y el enfrentamiento entre ricos y pobres, entre opositores y revolucionarios.

H. Reorganización del territorio nacional alineado con los fines revolucionarios

A la par de la ampliación de las medidas de control militar sobre la población y la oposición política, representadas por las zonas de seguridad, regiones militares, teatros de operaciones, uso de la justicia militar y persecución política, se intenta “cubanizar” las relaciones y organizaciones de base de la sociedad, a través de los denominados consejos comunales.

Esta nueva organización hará uso de la Fuerza Armada (incluyendo la milicia) como elemento de control (binomio FAN-Pueblo); extenderá las cadenas de información del régimen, y facilitará la presencia de funcionarios cubanos en todo el territorio nacional: notarías, Oficina Nacional de Extranjería, registros, oficinas públicas, órganos de seguridad del Estado,

cuarteles y hospitales, centros de producción, industria petrolera, etc.

I. Politización de la Fuerza Armada Nacional

La actuación política de Hugo Chávez hacia el interior de la Fuerza Armada Nacional no respeta las exigencias constitucionales y la utiliza con fines proselitistas y de dominio interno. En más de una oportunidad, en recintos militares y con el atuendo rojo que identifica a su ideología política, Hugo Chávez le ha pedido a la oficialidad que “quien no esté con su revolución, solicite su baja de la Fuerza Armada”.

J. El empleo de la Fuerza Armada en otros países

En el pasado, el empleo de militares venezolanos para cumplir faenas y trabajos en otros países, era por lo general solicitado y aprobado por los canales correspondientes del Estado venezolano, a petición o en coordinación con los países involucrados. Pero actualmente, Hugo Chávez ordena estas comisiones sin cumplir las normas; sólo bastan su deseo y su afinidad política con el gobierno receptor. Ello ha puesto en entredicho el prestigio de la Fuerza Armada, puesto que aparenta actuar como brazo político del presidente, llegando al colmo de ser abiertamente rechazada en algunos países.

Hugo Chávez Frías, con el objeto de afectar el sentido profesional y la unidad interna de la Fuerza Armada, ha utilizado en forma masiva a militares activos para ocupar cargos civiles en amplios sectores de la administración pública. Al mismo tiempo que persigue estos funestos propósitos, ha hecho

creer a los venezolanos que éste es un gobierno de la Fuerza Armada, cuando en realidad la filosofía que lo inspira es totalmente contraria a los principios y valores que sustentan la institución. Esta lamentable situación ha creado en la sociedad civil un justificado rechazo hacia la Fuerza Armada, al considerarla usurpadora de sus espacios naturales y corresponsable de los desaciertos del régimen chavista.

El delito de lesa patria hay que atribuírselo a Hugo Chávez Frías, quien tiene una responsabilidad directa en el proceso de destrucción de la Fuerza Armada Nacional, a la que ha convertido en su propio cuerpo armado pretoriano obediente solo a sus designios. Esa destrucción no solo ha operado en lo físico y operacional sino, y esto es lo mas grave, en el orden moral y ético.

El absurdo y contradictorio lema de “Patria, Socialismo o Muerte” que pretende imponer en todos los ámbitos de la Fuerza Armada, ha chocado estrepitosamente contra la pared patriótica, la fortaleza espiritual, el respeto a la democracia y los valores morales y nacionalistas que le son mas caros al pensamiento y acción de la mayoría de los miembros de la Institución Armada.

En el corazón y en la mente de nuestros militares profesionales bullen los sentimientos de libertad y de democracia que se instalaron en ellos desde los albores de la Independencia. No en balde, nuestros militares siempre se han considerado herederos de las glorias conquistadas por nuestros libertadores y defensores de los valores fundamentales de nuestra nacionalidad, entre los cuales, la muerte por una ideología

política fracasada y contrapuesta a nuestra esencia, no es precisamente uno de ellos.

El falso militar Chávez ha traicionado las raíces históricas de nuestro Ejército, que en el pasado exportó libertad a otras naciones. Usando como herramienta el petróleo que pertenece al pueblo venezolano, él se dedica ahora a exportar la esclavitud comunista de Fidel Castro; a la vez que fortalece a Cuba, dándole herramientas para convertirla en una potencia energética; y de esta forma, ejercer descaradamente una influencia geopolítica. El objetivo final es crear una Unión de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas. El discurso antiimperialista y anticapitalista, le sirve para desarrollar en nuestro continente el imperio marxista concebido por Lenin.

El supuesto antiimperialismo, le sirve al gobierno para justificar la adopción de una doctrina de Seguridad y Defensa que nos lleva al concepto estratégico de una Guerra Asimétrica, mediante la cual Venezuela se alinea con los países comunistas del mundo (Cuba, Corea del Norte, China, Vietnam) y las naciones musulmanas más radicales, como Irán y Siria.

Chávez no da un paso, no toma una decisión importante sobre la Fuerza Armada, sin antes consultarla con su reverenciado “líder”.

Chávez amplió los términos de saludo militar y protocolo para hablar o retirarse de un superior con la frase: “Patria, Socialismo o Muerte”, lo cual constituye una afrenta y humillación al honor y espíritu de la institución.

5. Se acelera el Plan Destructor

El gobierno ha adelantado un proceso de transformación y destrucción de la FAN mediante la aprobación de una nueva Ley Orgánica en el 2.005 y una vez puesta en ejecución ha logrado lo siguiente:

- Cambio del nombre de Fuerza Armada Nacional por Fuerza Armada Bolivariana, así como los de sus componentes.
- Convirtió el aparato militar en el soporte armado de su revolución.
- Le restó poder al Ministerio de la Defensa, convirtiéndolo en un ente administrativo.
- Creó una Reserva, una Guardia Territorial y una Milicia Nacional, con dependencia directa del Jefe del Estado, cuyo dimensionamiento sobrepasa los efectivos orgánicos en pie de paz de la FAN.
- Cambio del concepto estratégico de Seguridad y Defensa Nacional, asumiendo una alianza ideológica con gobiernos comunistas y totalitarios.
- Asumió el control absoluto de la Institución Armada, decidiendo directamente todo lo relativo a los asuntos administrativos y operacionales hasta el más bajo escalón.
- Activa una red de espionaje interno que le reporta al Jefe de Estado directamente todas aquellas manifestaciones contrarias a su proceso revolucionario.
- Violando la Constitución Nacional, se asignó el grado

militar de Comandante en Jefe, eliminando la esencia civil de la figura presidencial

Los lineamientos estratégicos implícitos en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana -LOFANB- son los siguientes:

Primero

Consolidación del Poder Militar mediante la ejecución de las siguientes acciones:

- Copar los espacios de naturaleza civil con efectivos militares.
- Adquisición masiva y desproporcionada de equipos militares y sistemas de armas defensivas y ofensivas de corto, mediano y largo alcance.
- Aumento de efectivos de pie en paz.
- Creación de nuevas unidades de combate y de Apoyo de Fuego y Servicios.

Segundo

Fortalecimiento de la unidad cívico militar para lograr la captación de hombres y mujeres para la Reserva y Milicia Nacional.

Tercero

Organizar y asegurar la Movilización Nacional para:

- Emplearlos en caso de un conflicto interno o externo.
- Para dar cumplimiento a los Tratados o Alianza de Asistencia Militar suscritos con varios países.

Cuarto

- Apuntalar los objetivos geopolíticos de la política exterior del gobierno.
- Consolidar los gobiernos de izquierda en el continente.
- Establecer un nuevo régimen de Seguridad Hemisférica.

El gobierno busca lograr el control total y absoluto del espacio territorial, dividido en Regiones, Zonas, Áreas y Distritos Estratégicos para la Defensa Integral, y además controlar todas las actividades públicas y privadas de la sociedad civil, tanto oficialista como de la oposición.

Chávez busca exaltar su ego y, siendo el Comandante Supremo de la Fuerza Armada, se asigna un nuevo grado militar de Comandante en Jefe, ofendiendo la dignidad y majestad de la Primera Magistratura y atropellando la vocación civilista de nuestro pueblo. No satisfecho con los poderes supra terrenales que se otorga, comanda y dirige las operaciones militares aún en caso de confrontación bélica.

Otro aspecto que ha sufrido un considerable retroceso es la seguridad social de los integrantes de la FAN, así vemos:

- La prestación del servicio de salud se ha visto afectada

por cuanto los hospitales militares han sido abiertos al público en general, llevando el programa de Barrio Adentro, manejados por cubanos, disminuyendo en forma brusca la capacidad de atención al personal militar y sus familiares.

- El personal militar activo y retirado cotiza mensualmente para el manejo de la infraestructura de salud militar.
- Los almacenes militares dejaron de ser medio importante de beneficio social para los militares, ahora se abrieron al público en general, ya no venden a precios solidarios.
- Las pólizas de seguro de vida y HCM lucen estancadas, no se han modernizado, otros gremios menos numerosos disponen de pólizas con mayores beneficios.
- Los círculos militares ahora permanecen ocupados por personal del gobierno no militar, extranjeros, misiones, etc. y los militares ya no tienen disponibilidad adecuada para utilizar la red hotelera y los espacios de esparcimiento porque fueron abiertos al público en general.

6.- Conclusiones

Podemos afirmar que en Venezuela la democracia es una entelequia, no existe la separación ni la autonomía de los poderes, no existe estado de derecho para los opositores, estamos presenciando la disolución del Estado Institucional, Ju-

rídico y Democrático, y que está siendo reemplazado por un modelo totalitario, militar y hegemónico:

- Se ha fortalecido y consolidado el poder militar, permitiendo la presencia hegemónica en todos los campos y actividades de la vida ciudadana.
- Se consolidan los objetivos geopolíticos de la política exterior del gobierno.
- Busca la consolidación del modelo político Castro comunista.
- Se ha reconocido la beligerancia del grupo narco-terrorista FARC y la implicación y apoyo del gobierno que se derivan del contenido de las computadoras del terrorista Raúl Reyes.
- Existe un grupo minoritario de Generales y Almirantes, así como de oficiales en diferentes grados, que bien por los beneficios económicos y profesionales que están recibiendo, o por afinidad ideológica con el proceso y se encuentran en cargos de comando de tropa y están dispuestos a dar su apoyo a Chávez.
- Cuba, con sus expertos en guerra política, inteligencia estratégica, guerra psicológica, capacidad de organización de equipos y células de espionajes ha tenido el apoyo de Chávez para controlar todos los escenarios de la sociedad.
- La FAN está en el más bajo nivel histórico de opinión pública.

Las circunstancias políticas permiten asegurar que los militares, en un momento decisivo de la historia por venir, deberán dilucidar si dan su apoyo al comunismo que adelanta Chávez o al régimen de verdadera democracia al cual aspiran la mayoría de los venezolanos.

En estos momentos dramáticos en que se debate la existencia misma de la Institución Militar y de la democracia en Venezuela, apelamos a la conciencia nacional y a la vocación democrática de la Fuerza Armada de Venezuela, para que una vez mas se mantengan firmes en la defensa de los valores mas puros y sagrados que ordena cumplir la Constitución Nacional, cuyo contenido no ha sido modificado y por tanto no pueden ser cambiados los roles, obligaciones y deberes que les son inherentes.

Esta grave situación aquí detallada ha tenido una respuesta del personal militar retirado del servicio activo. Ante la grave situación descrita, los militares retirados hacen un esfuerzo que en este momento se encuentra en plena evolución, para alertar, no solamente al venezolano sino también a los nacionales de otros países, sobre esta amenaza que ve el venezolano tan cerca, pero también a la vez tan lejos. Dentro este contexto hemos querido presentar a los lectores el Manifiesto No. 1 de los Militares Retirados en defensa de la Institucionalidad.

7. Manifiesto No. 1 de los Oficiales en Situación de Retiro

Venezuela vive actualmente los momentos políticos, sociales y económicos más difíciles de toda su historia. Un proyecto internacional comunista ideado y diseñado por Fidel Castro, pretende convertir a nuestro país en una nación satélite de Cuba. Para lograrlo, el régimen cubano ha utilizado al Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, para que en su papel de guiñol político, destruya lo que queda de las instituciones democráticas. Con el objetivo de debilitar la cohesión social de la sociedad venezolana que pueda ser un obstáculo irreducible para su proyecto comunista, Hugo Chávez Frías ha sembrado el odio y ha polarizado al pueblo en dos bandos irreconciliables, acabando con los tejidos económicos y los centros de producción y, más grave todavía, arrancando los cimientos mismos de la identidad nacional, al sustituir nuestros valores tradicionales por otros totalmente contrarios, utilizando para ello métodos perversos, como ese de querer lavar el cerebro a nuestros hijos y nietos.

La Fuerza Armada de Venezuela ha sido sometida, desde hace varios años, a un proceso de politización que busca fundamentalmente debilitar los valores tradicionales del profesionalismo militar. La penetración ideológica ha sido conducida implacablemente por parte del régimen.

Al principio del gobierno, el presidente Chávez respetó la pirámide jerárquica. Poco a poco fue sustituyendo algunos mandos operativos por personal de su confianza. El 11 de abril

de 2002, lo sorprendió sin haber concluido su política de control sobre la Organización militar. Después de este hecho, se ha incrementado la intensidad de captación de incondicionales dentro de las unidades de la FAN, pudiéndose afirmar sin lugar a dudas que para este momento existe una variedad de operadores políticos ejerciendo un severo control sobre importantes sectores de la Fuerza Armada y de las principales unidades operativas.

Además, se ha buscado captar ideológicamente al personal militar, sin importar el grado, mediante campañas orientadoras que buscan sembrar ciertos paradigmas tales como pueblo, revolución, oligarquía, explotación, imperialismo etc., debilitando los tradicionales valores de disciplina, subordinación y obediencia. Es difícil determinar con precisión el grado de ideologización logrado; no obstante, sabemos que no es mucho. Ciertamente que se escuchan murmuraciones en algunos sectores subalternos de manera constante, lo que prolifera normalmente en oficiales de grados superiores. Estas circunstancias políticas han comprometido totalmente la institucionalidad y la propia eficiencia de la Fuerza Armada. Un nuevo gobierno democrático tendrá, sin duda, que enfrentar estas dos circunstancias con un conjunto de medidas que permitan revertir este proceso de desprofesionalización, fortaleciendo un conjunto de sólidos valores democráticos y, al mismo tiempo, revitalizando su capacidad operativa a objeto de poder enfrentar las amenazas que actualmente vulneran gravemente nuestra seguridad como país.

Y ya va siendo hora de decir: ¡Basta! Porque ya es mucho el grave daño que el rencor y la discordia han hecho en este país, de donde le proviene que el pueblo no haya sabido andar sino con las vacilaciones del temor, desusadas y desprestigiadas las formas del respeto mutuo; impasible ante la inseguridad que cobra vidas en su entorno todos los días; y se hace el desentendido ante la desfachatez con la cual el régimen pisotea los principios más elementales de probidad, de igualdad y de justicia.

Claro que no son los envilecidos por el servilismo quienes ese clamor harían, ni tampoco aquellos aprovechadores de los regímenes de fuerza a cuya sombra el provecho material pueda crecerles tanto como vaya menguándoseles la dignidad. Es la sociedad civil honesta, sin distingo de color ni de partido, quienes ya sienten en su interior que los límites a la tolerancia pacífica están siendo desbordados.

En su intención de fomentar la desintegración generalizada, el oficialismo ha violado los preceptos fundamentales de la Constitución: secuestró los poderes públicos, cometió delitos de lesa patria y de lesa humanidad, perpetró fraudes electorales, acabó con la libertad de prensa y de información, dilapidó nuestros recursos, y se alió con grupos narcoterroristas, gobiernos forajidos y sectores fundamentalistas.

El pueblo venezolano ha resistido valientemente la arremetida de este proyecto, a través de todos los mecanismos que la democracia le proporciona: firmas, denuncias nacionales e internacionales, marchas, manifestaciones, elecciones, huelgas y protestas de todo tipo; sin embargo, estas acciones han sido

insuficientes, porque este no es un gobierno democrático, sino una dictadura “militarista” comunista que no escucha, ni le conviene escuchar el clamor popular.

Cuando la democracia está en peligro, cuando las libertades ya casi no existen, y cuando la patria misma está a punto de desaparecer, los hombres de la Fuerza Armada Nacional están en la obligación de levantar su voz y de hacer respetar la Constitución. Pero, dado que el Alto Mando ya no representa a la institución armada, y en virtud de que a los militares activos de la Fuerza Armada les está vedado por la ley la beligerancia política militante, y la ley les impide expresarse públicamente, les exhortamos a que como responsables de la defensa nacional, no omitan en sus análisis las consideraciones de tipo político que están afectando a esa misma defensa.

Especial atención merece el Estamento Militar, el cual ha sido tratado de una manera vil para que se sometan a una conducta que es una afrenta a las normas de nuestra Constitución. Hugo Chávez ha creado odios y diferencias que han dejado atrás todas las reivindicaciones sociales obtenidas por la Institución armada a través de toda su historia republicana, y con esta discriminaciones ha hecho posible la manipulación de facciones militares dentro de la organización.

Para nosotros, quienes hoy hemos decidido reactivar la organización que nos reúne, constituye una obligación impostergable asumir la condición de voceros y de interlocutores del sentir castrense. Con este propósito, convocamos a todos los oficiales generales, superiores, oficiales subalternos, suboficiales y tropas profesionales en la situación de retiro, a incorpo-

rarse a este reactivado esfuerzo orientado a salvar a Venezuela de la desintegración y la anomia, y a recuperar la democracia y la libertad.

Para estos fines convocamos a todos nuestros Compañeros de Armas para revivir la otrora Alianza Militar por Venezuela, a los que ya pertenecemos a ella, así como a todos aquellos que han entendido el letal peligro que se cierne sobre Venezuela.

Esta Organización de Personal Militar retirados por Venezuela luchará sin descanso, en unión de las Organizaciones Democráticas Nacionales, Estatales y Municipales, y del valiente pueblo de Venezuela, para la restitución de la vigencia de la Constitución de la República, la recuperación de la Democracia y de la Libertad en nuestro país.

El régimen castro comunista ilegalmente impuesto en Venezuela se propone instaurar su proyecto militarista totalitario, apoyándose en la ilegítima Asamblea Nacional, mediante la aprobación de leyes que, por ser contrarias a la Constitución Nacional, resultan siendo inexistentes por nulidad absoluta. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 333 de la Constitución Nacional, la Alianza del personal retirado por Venezuela exigirá, junto a toda la Nación, el estricto cumplimiento de los artículos 5, 326, 333, 347 y 350 de la Carta Magna.

Nuestra organización por Venezuela proclamará, a lo largo y a lo ancho del país, y a todos los niveles de la sociedad venezolana, la reivindicación de la dignidad del auténtico militar, que actúa en todo momento guiado por la fuerza de la razón, frente a la ignominia del militarista que no actúa sino por impulso de la razón de la fuerza.

Compañeros todos, sobran las razones para continuar activos aún desde nuestra situación de retirados. Nuestros hijos y nietos, nuestros subalternos de ayer, de hoy y de siempre, no nos perdonarían si nosotros permitimos que nuestra querida y amada Venezuela sea la segunda Cuba de América.

El proyecto de este régimen es una imposición del comunismo internacional. Nuestra obligación es defender la Patria y sus Instituciones hasta perder la vida si fuese necesario.

8. Exhorto

Un fraterno saludo a todas las Fuerzas Armadas de América y los exhortamos a que no permitan que en su país ocurra lo que en Venezuela está pasando y que su acción sirva en todo momento para que la democracia verdadera se fortalezca y se profundice, y se evite la destrucción del sentido profesional e institucional de sus Fuerzas Armadas.

Deseamos de corazón que la clase política verdaderamente democrática tome conciencia de su enorme responsabilidad ante la historia, impedir que el totalitarismo marxista con su lenguaje populista y manipulador conquiste el poder, y que por el contrario se fortalezca el sistema de libertades que tanto nos ha costado construir.

Es imperativo que la sociedad democrática de América Latina abra los ojos ante la amenaza cierta que significan Fidel Castro y Hugo Chávez para la estabilidad política y social de nuestra región.

Conclusión

Quien lea de un solo tirón este compendio, sin duda quedará preocupado y profundamente impactado. Ciertamente, no es posible detectar el alcance del gravísimo daño que se le está ocasionando a las instituciones armadas, sin conocer el panorama militar de toda la región.

Pareciera que se estuviera aplicando una misma receta, elaborada por mismo ente destructor, para dismantelar las Fuerzas Armadas en cada uno de nuestros países; sólo cambian las fechas, los personajes, las leyes decretadas y las ONGs involucradas.

La conclusión es evidente: Urge diseñar una estrategia continental para defender las Fuerzas Armadas de América Latina, frente a la injusta y brutal agresión de las que son objeto.

Esta defensa debe ser emprendida no solamente por los militares, sino por la sociedad entera; porque la existencia de unas Fuerzas Armadas bien equipadas, bien entrenadas y con una Alta Moral, es requisito indispensable para la supervivencia misma de nuestras naciones. De ello pueden dar testimonio el pueblo colombiano, que ha sido rescatado por las FF.AA. de las garras de las FARC; y el pueblo hondureño que, gracias a sus militares, pudo salvarse de una dictadura chavista.

Hay dos sencillos pasos que pueden darse en este sentido:

Primero, iniciar un debate continental sobre lo que ocurre con nuestras Fuerzas Armadas; publicando libros y

artículos, y realizando conferencias y seminarios sobre el tema. Anticipamos que será una tarea difícil, porque los integrantes y aliados del Foro de São Paulo ya han logrado consolidar una matriz de opinión sumamente negativa respecto a los militares. De hecho, en algunos países, como Argentina y Uruguay, existe incluso un tabú, que impide a los ciudadanos defender a sus Fuerzas Armadas, so pena de ser condenados por la opinión pública.

Segundo, crear una organización, conformada por militares retirados (y apoyada por civiles), que emprenda -de manera coordinada- la defensa de las Fuerzas Armadas de América Latina. Son ellos los que tienen el conocimiento y la capacidad para elaborar un cuerpo doctrinal que contrarreste los prejuicios marxistas prevalecientes; y de proponer reformas y mejoras que aseguren el fortalecimiento de las Instituciones Castrenses.

La Unión de Organizaciones Democráticas de América -UnoAmérica, hace un llamado a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, en especial aquellos que de alguna manera han estado vinculados a las Instituciones Militares, para que se sumen a una cruzada por la defensa del último bastión de la democracia y de la libertad: Nuestras gloriosas Fuerzas Armadas de América Latina.